



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

**EL IMPACTO DE LAS INTERVENCIONES MILITARES HUMANITARIAS EN ÁFRICA SUB-
SAHARIANA SOBRE LA DEMOCRATIZACIÓN
¿LA BALA DE PLATA O LA FÁBULA DE ESOPPO?**

Trabajo de Graduación para la obtención del título de
Licenciada en Relaciones Internacionales

Julieta Romero

Legajo: 20185

Mentor: Federico Merke

Victoria, Mayo de 2013

- AGRADECIMIENTOS -

A mi mentor, Federico Merke, por su dedicación, sus valiosísimos comentarios y recomendaciones, por inspirarme, y permitirme trabajar sobre el tema que era de mi más profundo interés. Gracias por el tiempo y la paciencia ante la catarata de correos.

A mi profesora, María Edo, por responder mis preguntas sobre metodología en repetidas oportunidades, por sus recomendaciones para hacer más minucioso el análisis, por sus consejos profesionales, y por la paciencia con un *outsider*.

A mi profesor, Gabriel Montes Rojas, por darme el puntapié inicial cuando aún estaba perdida entre tantos datos, y por contestar de manera instantánea todas mis consultas.

A mi mamá, Graciela, por su esfuerzo incansable para permitirme realizar mis estudios en la Universidad de San Andrés, por su paciencia infinita en cada instancia de evaluación, y por su apoyo imperecedero.

A mi abuela, Irma, que me hubiese preguntado todos los días el tema de mi tesis, y se hubiese interesado cada día como si fuera la primera vez.

A mi hermana del alma, Camila, por creer siempre en mi, por dedicarme hasta el tiempo inexistente en momentos de crisis y alegrías, por ser mi confidente y mi consejera, y por su intachable entereza.

A Axel, por confiar en mi, por escucharme y acompañarme todos los días, por su gran predisposición para ayudarme, y por su resignación afable a calendarios imposibles.

A mis amigas incondicionales, que nunca me soltaron la mano durante este largo trayecto, y que vivieron conmigo cada parcial y cada entrega de este trabajo.

A mis amigos de la universidad, que en cada etapa se tomaron el tiempo de conocerme, y hacer de mi paso por ella una instancia que jamás voy a olvidar.

Finalmente, no quisiera dejar de agradecer a la universidad y al cuerpo de profesores impecables que contiene, a quienes admiro y tengo un profundo respeto, que me permitieron crecer como profesional y como ser humano.

A todos, GRACIAS!



INTRODUCCIÓN	7
CAPÍTULO I	
Intervenciones Militares Humanitarias	14
<i>Conceptualización</i>	14
Intervenciones militares	14
El aporte humanitario a las intervenciones militares	15
“Peace-making”, “peace-keeping” y “post-conflict peace-building”	16
Intervención Militar Humanitaria	17
<i>Contexto histórico: Fases del intervencionismo de la ONU</i>	19
Primera fase	20
Segunda fase	20
Tercera fase	22
<i>Experiencia africana</i>	23
Colonialismo	23
Conflictividad y fuentes de conflicto	24
Pos-Guerra Fría	25
Por qué concentrarse sólo en África Sub-Sahariana	26
CAPÍTULO II	
Marco teórico – IMH y Democratización	29
<i>Tensión Realismo – Liberalismo</i>	29
Tensión dentro del Liberalismo	32
<i>IMH y Democratización: voces a favor y en contra</i>	34
<i>Marco conceptual y diseño de investigación</i>	37
Objetivo e hipótesis	37
Método	39
Variables	39
Variable dependiente	40
Variable independiente	43
Variables de control	43
Estudios de caso	49
CAPÍTULO III	
Una mirada global a la relación entre IMH y democratización	51
<i>Análisis empírico</i>	51

CAPÍTULO IV	
Las IMH en África Sub-Sahariana y su impacto en la democratización: el análisis	59
<i>Análisis empírico</i>	60
CAPÍTULO V	
Mozambique: 1990 – 2004	80
<i>Situación antecedente: orígenes del conflicto</i>	81
<i>La Intervención Militar Humanitaria: ONUMOZ</i>	83
<i>Transición a la democracia</i>	87
<i>Consolidación de la democracia</i>	88
CAPÍTULO VI	
Angola: 1990 – 2009	91
<i>Situación antecedente: orígenes del conflicto</i>	92
<i>La Intervención Militar Humanitaria</i>	94
UNAVEM II	94
Hacia una nueva negociación: UNAVEM III	99
Agravamiento de la crisis y una nueva oportunidad: MONUA	103
<i>Transición a la democracia y la consolidación que no fue</i>	106
CAPÍTULO VII	
Kenia: 1990 – 2006	111
<i>Situación antecedente</i>	112
<i>“Luchas étnicas” y su convivencia con la transición a la democracia</i>	114
<i>¿Hacia la consolidación de la democracia keniana?</i>	120
CAPÍTULO VIII	
Uganda: 1990 – 2006	125
<i>Situación antecedente</i>	126
Los orígenes de la Pax Musevenica y una pseudo-transición	127
<i>Guerra Civil en Uganda</i>	130
<i>La consolidación (de Museveni en el poder)</i>	135
CONCLUSIONES	139

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	143
ANEXOS	
<i>I – Descripción de las variables</i>	161
<i>II – Protocolo para el estudio de caso</i>	173
<i>III – Análisis cuantitativo: regresiones y especificaciones</i>	177



Universidad de
San Andrés

INTRODUCCIÓN

“External military intervention for human protection purposes has been controversial both when it has happened –as in Somalia, Bosnia and Kosovo– and when it has failed to happen, as in Rwanda.”

Evans et al., 2001

El fin de la Guerra Fría evidenció el desencadenamiento de un cambio sistémico que alteró reglas de la política internacional de casi medio siglo de tradición. La atmósfera de triunfalismo que deslumbró a Occidente, animó a los vencedores a depositar su confianza en la posibilidad de promover el modelo de democracia liberal. En este sentido, y con una renovada apuesta en la labor de la ONU, se le adjudicó el rol de una suerte de *noble Leviatán*, con el objeto de intervenir en los asuntos internos de aquellos Estados con el potencial para amenazar la paz y la seguridad internacional.

La cristalización de dicho rol se evidenció en el *aggiornamento* de la faceta intervencionista de la ONU. En lo que se conoció como la “segunda generación” de las misiones, el foco viró hacia el desarrollo de operaciones multidimensionales que atacaran de manera simultánea aspectos económicos, políticos, sociales y humanitarios (Berman y Sams, 2000; Adebajo y Landsberg, 2000; Ahmed, Keating, y Solinas, 2007). El corolario de este proyecto fue la promoción de la democracia, en tanto sistema integrador de los principios rectores del nuevo orden mundial. Así, nacieron diferentes tipos de misiones, entre las que se encuentra la que interesa a los efectos de la presente investigación: la intervención militar humanitaria.

En particular, este trabajo se propone llevar adelante un análisis que pondere el impacto democratizador de las intervenciones militares humanitarias como instrumentos de política de parte de la comunidad internacional, en el plano mundial en general, pero también haciendo foco en África Sub-Sahariana en particular. Los motivos por los cuales se decide hacer hincapié en dicha región son dos. En primer lugar, en términos comparados, África Sub-Sahariana fue receptora de más misiones de parte de la ONU, *vis-à-vis* el resto del mundo. En segundo lugar, las crisis africanas se han ganado la fama internacional por ser especialmente complejas; en este sentido, la región aparece como una suerte de *worst-case scenario*. De esta manera, el argumento yace en que si la política surte los efectos deseados en África, entonces su robustez adquiere mayor credibilidad. Por tanto, surge el siguiente interrogante: *¿Cuál es el impacto de las intervenciones militares humanitarias de la pos Guerra Fría en la democratización de los países intervenidos, tanto en el plano mundial, como en la región de África Sub-Sahariana?*

Con el propósito de contestar la mencionada pregunta de investigación, se llevará adelante una evaluación en dos niveles, uno de tipo global y otro regional. En lo que refiere al primero, el objetivo es observar los efectos generales de la relación propuesta en la pregunta de investigación; a su vez, este análisis se complementará con uno a nivel regional para estudiar específicamente la particularidad –y si es que existe una- de África Sub-Sahariana. En la primera parte de la investigación, se recurrirá al uso de la metodología cuantitativa, haciendo una suerte de cuasi-experimento donde se contemplen casos de intervención y casos de no intervención. Más aún, se combinará con una segunda parte de tipo cualitativa, en la cual se hará un examen con un grado de profundidad y detalle mayor sobre los casos de Mozambique, Angola, Kenia, y Uganda. La intención detrás del uso de esta metodología es poder examinar en profundidad la

relación entre las intervenciones militares humanitarias y la democratización del país destinatario –específicamente en lo que respecta al impacto en la arena política.

La riqueza teórica del mencionado interrogante surge a partir de su plausible respuesta desde dos posturas teóricas antagónicas; pues hay quienes argumentan que dicho instrumento de política es capaz, en efecto, de sembrar las semillas de la democracia en un territorio que le ha sido adverso al procesamiento de conflictos a través de instituciones inclusivas y participativas. Mas también existen quienes consideran que dicho experimento es no sólo extremadamente ambicioso, una contradicción en los términos, sino que, además, violenta la tradición westfaliana del derecho internacional en materia de soberanía estatal. Por tanto, las intervenciones militares humanitarias¹: ¿son como una bala de plata –a saber, una solución directa de eficacia extrema? ¿O es que en cambio, pecan de ambiciosas como la protagonista de la fábula de Esopo, la lechera, cuyo anhelo exagerado la llevó a construir castillos en el aire?

Al respecto, la literatura es poco sistemática: presenta incongruencias metodológicas, así como también una ausencia de consenso preocupante. En primer lugar, el debate se ha centrado meramente en intervenciones militares, explorando el fenómeno desde el fin de la Segunda Guerra Mundial (Meernik, 1996; Fortna, 2004; Bueno de Mesquita y Downs, 2006; Pickering y Kisangani, 2006; Pickering y Peceny, 2006). El motivo es que el adjetivo “humanitarias” es de reciente confección; en otras palabras, si bien las intervenciones en sí mismas no son un fenómeno nuevo, las humanitarias sí lo son; por tanto, adquiere relevancia teórica establecer un punto de quiebre y explorar la aludida “segunda generación”. En segundo lugar, presenta un exiguo tratamiento a nivel agregado, haciendo foco en estudios de caso de las misiones

¹ De ahora en adelante, IMH.

más significativas (Clarke y Herbst, 1996; Wheeler y Dunne, 2001; Gizelis y Kosek, 2005; Adebajo y Landsberg, 2000). En tercer lugar, la literatura presenta contratiempos en términos de conceptualización:

Efforts to clarify the terminology have not kept up with the rapid pace of developments on the ground. (...) The South African Department of Defense, for example, recently identified and defined nine overlapping terms: [1] peace missions; [2] peace support operations; [3] preventive diplomacy; [4] peacemaking; [5] peacekeeping operations; [6] peace enforcement; [7] peace-building; [8] humanitarian assistance; and [9] humanitarian intervention. (Berman y Sams, 2000: 23-25)

De esta manera, se vuelve difícil tratar de aunar esfuerzos en una respuesta sistemática, dado que se dirige la atención hacia diferentes fenómenos de características particulares (Parekh, 1997; Evans et al., 2001; McVey, 2003; Pickering y Kisangani, 2006). Por último, la escasez de acuerdo se vuelve manifiesta, aún desde una aproximación superficial. Pues hay quienes que consideran que las misiones orquestadas por la ONU suelen ser más exitosas que aquellas llevadas a cabo por Estados de manera unilateral (Fortna, 2004; Pickering y Peceny, 2006); y quienes, pateando el tablero, consideran exactamente lo contrario (Bueno de Mesquita y Downs, 2006; Pickering y Kisangani, 2006). Hay otros autores que agregan la necesidad de una participación conjunta entre la ONU y los actores locales u organismos regionales (Gizelis y Kosek, 2005; Adebajo y Landsberg, 2000). Y, desde la otra vereda, quienes argumentan que las organizaciones regionales, aunque suenan atractivas, no son capaces de proveer la asistencia necesaria en su calidad de socios (Weiss, 1994; Berman y Sams, 2000; Ahmed, Keating y Solinas, 2007).

Siguiendo las recomendaciones de Collier, Hoeffler y Sambanis (2005) y de Pickering y Peceny (2006), el diseño de investigación empleado para arribar a dichas

conclusiones es uno de estrategias anidadas, es decir, combina la metodología de investigación cuantitativa y cualitativa. “Quantitative and qualitative research designs are often (mistakenly) considered as substitutes rather than complements in political science” (Collier, Hoeffler y Sambanis, 2005: 2); mientras que el primero explora la covarianza entre la IMH y la democratización, el diseño cualitativo incrementa el valor de la investigación gracias a explicaciones minuciosas sobre *cómo* es que dichas intervenciones fomentan o no la democratización, y así identifican mecanismos causales. En cuanto a la primera parte cuantitativa, se han construido dos bases de datos en panel: una mundial, que comprende 165 países y observa a nivel mundial el efecto de las IMH; y otra meramente restringida al continente africano, que incluye 12 países, con el propósito de hacer foco sobre la particularidad de dicho continente. Dada la naturaleza de la investigación, se vuelve imprescindible confeccionar artesanalmente, para la segunda base de datos, una suerte de categoría base o “grupo control” de países en los que no haya tenido lugar la intervención; así, se rastrearon países que contaron con contextos vulnerables, similares a los casos donde sí se intervino, con el objeto de comparar las trayectorias con el “grupo tratamiento”.

Por otro lado, en lo que respecta a una segunda etapa cualitativa, se llevó adelante un estudio de caso comparado de Mozambique, Angola, Kenia y Uganda. El motivo de esta segunda parte radica en que la evaluación cuantitativa adolece de un *eslabón perdido*: los estudios de caso proporcionan mecanismos causales que permiten comprender de manera exhaustiva la conexión entre las IMH y la democratización. La selección de dichos casos no se hizo de manera aleatoria, sino que se hizo parcialmente sobre la variación en la variable dependiente, y parcialmente en la de la independiente. Este modo de selección se apega a los objetivos del trabajo: pues se necesitaba explorar

cuatro diferentes trayectorias². De esta manera, se seleccionaron casos en los que sí hubo IMH (Mozambique y Angola) y casos en los que no (Kenia y Uganda); a su vez, Mozambique es un caso de éxito en la promoción e instauración de la democracia, mientras que Angola es un caso desafortunado. Por otro lado, Kenia es un caso en el que, prescindiendo de una intervención, el sistema político supo progresar hacia uno de tipo democrático; mientras tanto, Uganda se une a Angola en su destino desventurado. En síntesis, la selección de los casos obedece a la necesidad de tener un grupo tratamiento (Mozambique y Angola) y un “grupo control” (Kenia y Uganda), y a la necesidad de encontrar variaciones en la variable dependiente en términos de éxito relativo (Mozambique y Kenia) y resultados desafortunados (Angola y Uganda).

Puesto de manera breve, el principal hallazgo de la primera parte es que, en el plano mundial, la IMH es capaz de mejorar la trayectoria democrática de un país, pero tiene un efecto retardado de aproximadamente cuatro años como mínimo; en otras palabras, los resultados se comienzan a observar luego de los cuatro años, independientemente de la cantidad de años que dure la intervención. En lo que refiere a África Sub-Sahariana, también se encontró que la IMH es factible de contribuir a la trayectoria democrática del país, aunque su efecto es más inmediato. Tras complementar el análisis con el estudio cualitativo, se identificó que un aspecto clave de las tareas de la IMH en el fomento de la democracia involucra la desmovilización de las fuerzas de choque previo al comienzo de la celebración de elecciones –en tanto hito de la etapa de transición. El motivo radica en que las facciones ya no poseen, de esta

² “According to King et al. (1994, 141), selecting ‘observations across a range of values of the dependent variable’ is a legitimate ‘alternative to choosing observations on the explanatory variable.’” (Collier, Hoeffler y Sambanis, 2005: 30).

manera, la capacidad militar para alterar los resultados electorales –y, por consiguiente, el período de transición.

La investigación se halla organizada en nueve capítulos. En el primer capítulo se ofrece un repaso sobre los distintos términos afluentes al concepto de interés para este estudio –intervención militar humanitaria. A su vez, se realiza un repaso sobre el impacto sistémico del fin de la Guerra Fría en la experiencia intervencionista de la Organización de Naciones Unidas; y finalmente, se ofrece una breve reseña acerca de la región de África Sub-Sahariana en lo que respecta a factores estructurales y fuentes de conflictividad. El capítulo II se ocupa del marco teórico de la investigación; en este sentido, se realiza un repaso de las distintas posturas en la literatura acerca del impacto de las IMH sobre la democratización del país intervenido. Más aún, en un esfuerzo por exponer el diseño de investigación, se presentan el objetivo, el método, las hipótesis, así como las variables y sus indicadores. En el capítulo III y IV se exponen los resultados obtenidos a partir de un análisis cuantitativo en la relación entre IMH y democratización en un nivel global y regional, respectivamente. Los capítulos V, VI, VII y VIII se ocupan de esclarecer la relación explorada en los capítulos III y IV a través de un estudio de casos comparados de Mozambique, Angola, Kenia, y Uganda. Finalmente, el capítulo IX se dedica a exponer reflexiones y conclusiones finales, en calidad de posibles recomendaciones de política, a partir de una evaluación agregada de la investigación.

INTERVENCIONES MILITARES HUMANITARIAS

CONCEPTUALIZACIÓN, CONTEXTO HISTÓRICO, Y EXPERIENCIA AFRICANA

*“Humanitarian war is an oxymoron
which may yet become a reality.”*

Adam Roberts, 1993

Conceptualización

Intervenciones militares. Las intervenciones militares son factibles de ser concebidas como el antepasado cercano de las IMH. En el marco de la confrontación bipolar, las potencias intervenían en distintos países con el único objetivo de “convertir” a los Estados en cuestión al credo comunista o capitalista. En el segundo de estos casos, la democracia era un horizonte al que se aspiraba; mas no era un determinante *sine qua non* para la intervención. Por lo tanto, adquiere relevancia teórica explorar si los atributos del término pueden resultar provechosos a los efectos de la conceptualización de las IMH.

Tanto Pickering y Peceny (2006), como Pickering y Kisangani (2006), retoman a Pearson y Baumann (1993) y explican que las intervenciones militares implican el movimiento de tropas regulares en el territorio de otro país, en el contexto de algún asunto político o disputa. Por su parte, Parekh (1997) explicita que el propósito de fondo de la intervención es influenciar los asuntos internos del país –mas no especifica en qué dirección, ni si hay una finalidad común para todas las intervenciones.

El aporte humanitario a las intervenciones militares. El adjetivo “humanitario” acarrea consigo un bagaje de nuevos propósitos y estrategias al momento de llevar adelante una misión. Involucra un contexto previo de orfandad de parte de los ciudadanos con respecto a su propio gobierno –que conlleva al padecimiento de constantes profanaciones a sus derechos en calidad de seres humanos- a partir de una desintegración del Estado como tal en sus funciones.

Siguiendo a Parekh (1997), una intervención es considerada humanitaria, en caso de que contenga los siguientes dos requisitos. Por un lado, su rumbo debe estar guiado de manera total o primordial por un sentimiento de compasión o humanitario –y en este sentido ser desinteresada³. A su vez, se halla determinada acometer contra lo que se considera una violación de lo mínimo que merece un ser humano. Específicamente, el autor propone una conceptualización pormenorizada del término:

Humanitarian intervention, as the term is used today, then, is an act of intervention in the internal affairs of another country with a view to ending the physical suffering caused by the disintegration or the gross misuse of the authority of the state, and helping create conditions in which a viable structure of civil authority can emerge. (Parekh, 1997: 55-56)

A su vez, considera que las IMH acarrean en su seno en propósito de contribuir a la creación de las condiciones para el surgimiento o refuerzo de una estructura de autoridad civil aceptable (Parekh, 1997).

De acuerdo con Evans et al. (2001), en el informe de la Comisión Internacional sobre la Intervención y la Soberanía Estatal, “The Responsibility to Protect”, una misión humanitaria contiene en su seno dos propósitos fundamentales, inescindibles e

³ Al establecer que debería ser desinteresada, Parekh (1997) no peca en su ingenuidad, sino que reconoce y explicita que las intervenciones, a menudo, poseen intereses mixtos. No obstante, considera que ganarse el título de “humanitaria”, mandaría a que la balanza se incline hacia la faceta humanitaria de la intervención.

insoslayables: la protección de los ciudadanos del Estado en riesgo y la construcción de un orden estable. Tal como lo indica su título, los autores abogan por la propagación de un nuevo concepto: la responsabilidad de proteger⁴. En este sentido, el informe hace hincapié en que el concepto de R2P debe ser considerado en términos de una tríada: la responsabilidad de prevenir, de reaccionar y de reconstruir. No obstante, la prevención escapa a los efectos de la presente investigación, pues no se halla restringida meramente al aspecto militar, sino que incluye otros tipos de accionar –como por ejemplo, la diplomacia preventiva.

Como se desprende de lo expuesto, efectivamente hay una herencia con respecto a las intervenciones militares: inmiscuirse en los asuntos internos de otro Estado con el objeto de modificar el curso de acción de éste. No obstante, la distancia se plasma en términos de los motivos que impulsan el accionar; aquello intrínseco al adjetivo “humanitario” radica en incoar una misión animada por el deseo de terminar con el sufrimiento humano.

“Peace-making”, “peace-keeping” y “post-conflict peace-building”. Estos términos fueron acuñados por la ONU a principios de la década de 1990 y remiten a tres actividades que, aunque pueden ser complementarias, no deben confundirse como sinónimos. En particular, fueron dados a luz por el entonces Secretario General, Boutros-Ghali, en sus eximios informes “An Agenda for Peace” y “Supplement to An Agenda for Peace”. En lo que respecta a “peace-making”, el ex Secretario General arguye que se fundamenta en el Capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas, que hace referencia a los medios pacíficos de resolución de controversias. De esta manera, la acción a llevar acabo no involucra la fuerza. Por otro lado, “Peace-keeping is the

⁴ En inglés el acrónimo obedece a R2P: Responsibility to Protect.

deployment of a United Nations presence in the field, hitherto with the consent of all the parties concerned, normally involving United Nations military and/or police personnel and frequently civilians as well.” (Boutros-Ghali, 1992: 5). Finalmente, de acuerdo con Boutros-Ghali, “post-conflict peace-building” refiere a proyectos relacionados con el desarrollo, ya sea social o económico, que resultan fundamentales para una paz duradera: “(...) the essential goal is the creation of structures for the institutionalization of peace” (1995: 12). Como su nombre lo indica, tiene lugar una vez ocurrido el alto al fuego e involucra actividades tales como la desmilitarización y el control de armas, la reforma institucional, el monitoreo del respeto hacia los derechos humanos, entre otras.

¿Por qué no emplear estos términos ya elaborados por la ONU, definidos por el mismo Secretario General? El motivo, lejos de ser embrollar el debate, obedece a lo siguiente; en primer lugar, “peace-making” no se adecúa a los efectos de la presente investigación, puesto que no es de mi interés observar la puesta en acción de medios pacíficos de resolución de controversias. Asimismo, en cuanto a “peace-keeping” y “post-conflict peace-building”, de acuerdo a las definiciones propuestas por Boutros-Ghali (1992, 1995), éstas aparentan ser dos etapas que pueden ser dissociadas en tiempos diferentes. No obstante, las misiones de la ONU rotuladas bajo la etiqueta de “peace-keeping”, mutan y evolucionan de tal manera que acaban por terminar incluyendo las actividades correspondientes a “post-conflict peace-building”, creando un híbrido conceptual.

Intervención Militar Humanitaria. Con el propósito de aportar mayor claridad, es que decidí escoger este concepto integrador. Debo decir que no es un término que se utilice a menudo en la literatura, mas considero que puede resultar pragmático.

Es menester aclarar que una intervención militar humanitaria no es ni una intervención militar a secas, ni tampoco una intervención humanitaria más. Como ya fue expuesto, una intervención militar dista de una IMH en sus propósitos de fondo. En lo que refiere a las intervenciones humanitarias, la literatura ha mostrado una cierta inclinación a utilizar este término. Sin embargo, remitiéndome Evans et al. (2001), no quisiera que “intervención” se halle asociado a cualquier tipo de acción –incluyendo aquellas diplomáticas o de prevención, en línea con el capítulo VI de la Carta de la ONU. Es de mi entender que una intervención humanitaria sí comparte el objetivo de fondo con las IMH, mas disiente en lo que respecta a los métodos para llevar adelante dicha meta.

De esta manera, elijo incorporar el adjetivo “militar” con la determinación de volver explícito que la investigación abordará aquellos casos en los que medió el uso de la fuerza. Más aun, el término propuesto busca mancomunar “peace-keeping” y “post-conflict peace-building” y, de esta forma, incorporar un concepto integrador, que contenga en su seno a estas dos actividades como etapas de un mismo evento.

Con lo cual, concluyo que una intervención militar humanitaria (IMH) es un acto que involucra el despliegue de fuerza militar en un territorio determinado, persiguiendo el objetivo de acabar con el sufrimiento físico de los ciudadanos en riesgo –a partir de la ausencia de la capacidad protectora del Estado. A su vez, busca alterar las condiciones internas y contribuir a la construcción de una paz estable y duradera gracias de la creación de una estructura de autoridad civil legítima⁵.

⁵ Tal como ya fue mencionado, dicha estructura de autoridad civil acarrea consigo un sesgo occidental que se plasma en intentar reproducir las instituciones democráticas liberales.

Contexto histórico

Fases del intervencionismo de la ONU

A partir de un repaso de la literatura, se puede recoger un acuerdo acerca de la existencia de tres fases en la experiencia intervencionista de la Organización de las Naciones Unidas: una correspondiente al período de Guerra Fría, otra concerniente al principio de la década de 1990, y una tercera que atañe el período desde 1995 hasta 1999, y años subsiguientes (Berman y Sams, 2000; Adebajo y Landsberg, 2000; Ahmed, Keating y Solinas, 2007; entre otros). Considerando el transcurso de alrededor de 20 años y la existencia una triple segmentación del período, una primera conclusión se orienta hacia la volatilidad e histeria en lo que refiere a esta política. Una explicación para dicha conducta errante puede radicar, probablemente, en la extrema sensibilidad de la materia, combinada con una robusta influencia de la opinión pública internacional.

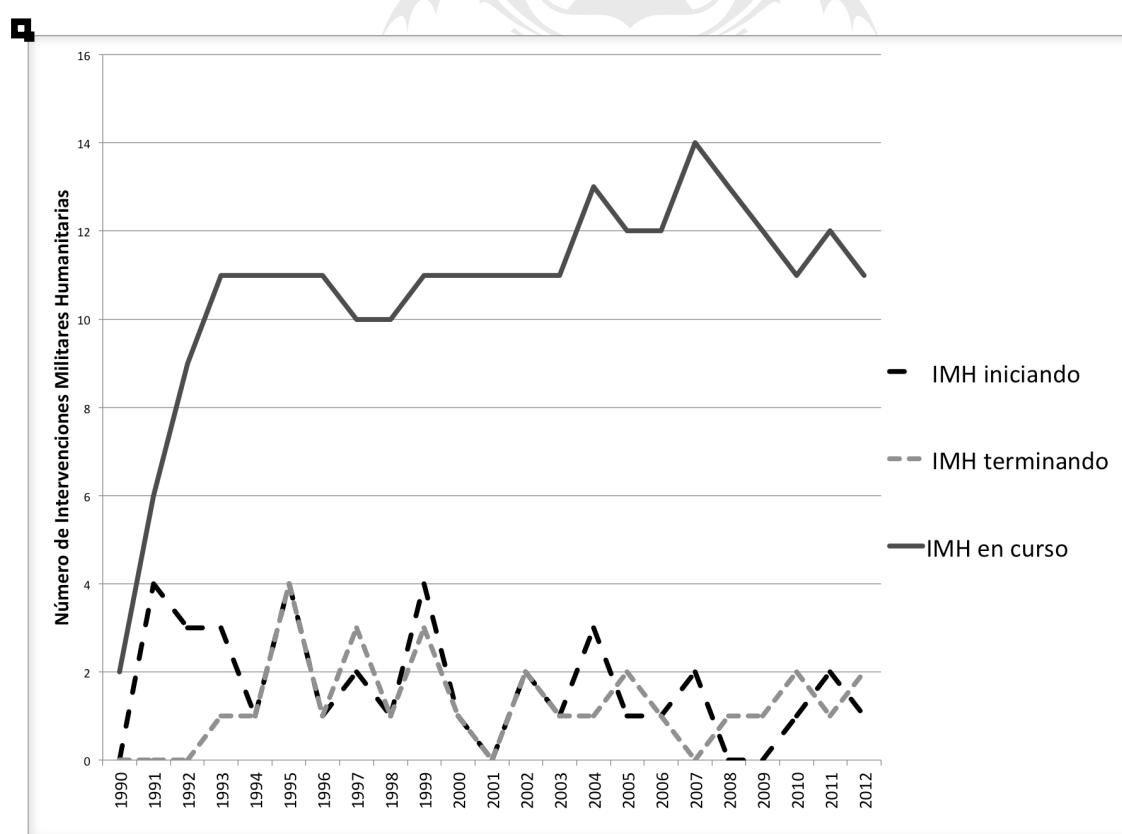


FIGURA 1. IMH iniciando, terminando y en curso.

Fuente: Elaboración propia con datos del DPKO

Primera Fase. Obedece al período de Guerra Fría, comprendido entre los años 1947 y 1989 aproximadamente. Durante este período, las intervenciones seguían el patrón del Capítulo VI de la Carta de la ONU: "(...) consent of the warring parties for UN involvement, impartiality in dealing with them, and the non-use of force except in self-defence." (Ahmed, Keating, y Solinas, 2007: 13). En este sentido, las operaciones simulaban una suerte de política de contención, en las que las fuerzas de paz actuaban como amortiguadores entre las distintas facciones en conflicto. Una particularidad de este período concierne al status del Consejo de Seguridad: los miembros se hallaban en bandos opuestos, abogando por visiones del mundo antagónicas, y haciendo un uso cotidiano del poder de veto.

Segunda Fase. También conocida como la "segunda generación" del intervencionismo de la ONU, esta fase comprende el período que abarca entre 1990 y 1994 aproximadamente. Con el fin de la Guerra Fría se evidenció una explosión de conflictos armados intra-estatales en el mundo en general y en África Sub-Sahariana en particular (Evans et al., 2001; Kalyvas y Balcels, 2010).

Una particularidad de estos conflictos es que adquirieron una mayor complejidad para su aproximación tanto teórica como empírica, dados una serie de factores: el avance en la tecnología de las comunicaciones y el excedente de armas livianas proveniente de la ex URSS (Evans et al., 2001). A su vez, las consecuencias de este tipo de enfrentamientos no son excluyentes para África; de hecho, son factibles de menoscabar la paz y la seguridad internacionales: "(...) their destabilizing effects are felt in the developed world in everything from globally interconnected terrorism to refugee flows, the export of drugs, the spread of infectious disease and organized crime" (Evans et al., 2001: 5).

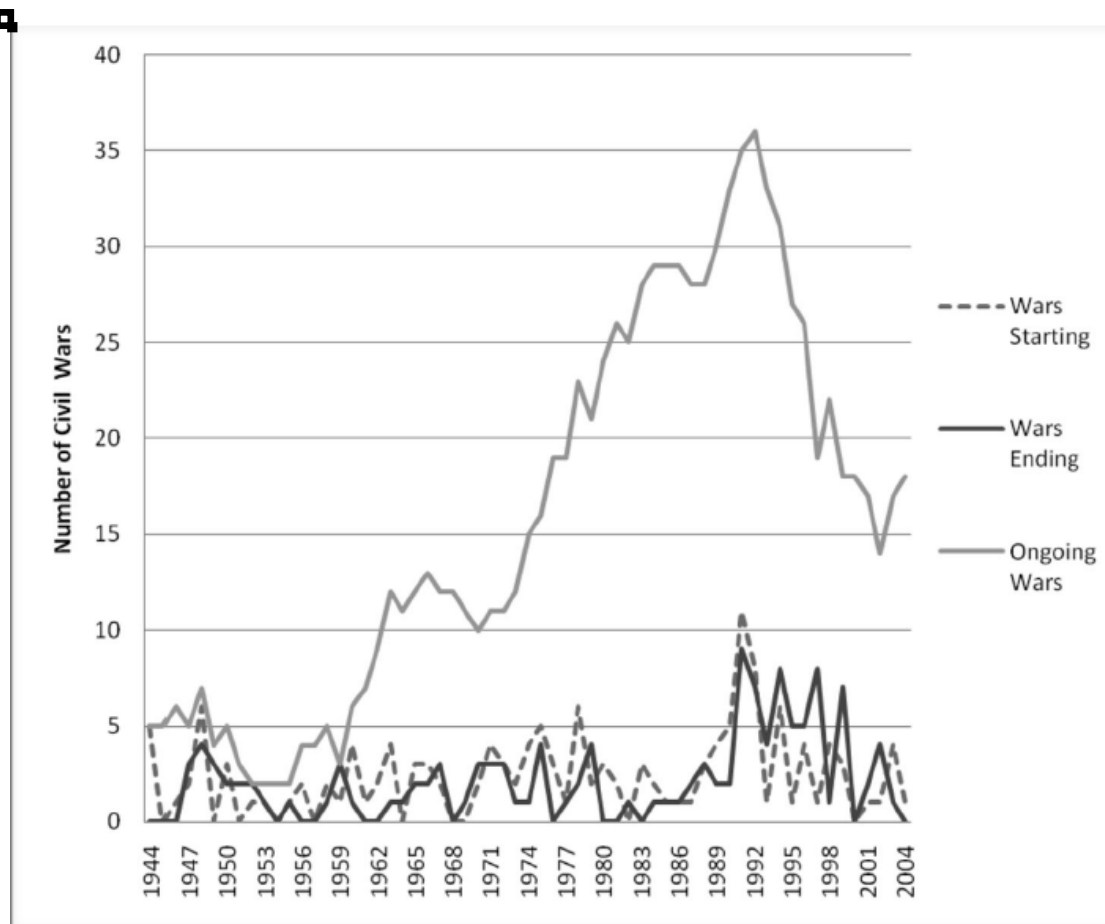


FIGURA 2. Guerras civiles iniciando, terminando y en curso.
Fuente: Kalyvas y Balcells (2010)

En respuesta a este panorama, comenzó a germinar una nueva tendencia en las Relaciones Internacionales: un aumento considerable en el intervencionismo de parte de las Naciones Unidas con el objetivo de traer alivio a las poblaciones en riesgo, así como también de implantar instituciones de autoridad civil que vuelvan anacrónicas las experiencias autoritarias. Incluso Estados Unidos, la potencia vencedora en la confrontación bipolar y la máxima influencia del curso de la política internacional, adoptó, bajo la administración Clinton, una política de promoción de la paz a partir de la promoción de la democracia (Mansfield y Snyder, 1995). Acogiendo el nombre de *Engagement and Enlargement*, ésta tenía como faro “(...) to counter the aggression and support the liberalization of states hostile to democracy, and to help democracy and

market economies take root in regions of greatest humanitarian concern.” (Brinkley, 1997: 116). Influidido entonces por este clima, y con un renovado dinamismo en su administración diaria, el Consejo de Seguridad abogó por el intervencionismo de cariz humanitario con una mayor frecuencia inusitada.

No obstante, la desafortunada intervención en Somalia y la aún peor experiencia en Ruanda atrofiaron los esfuerzos de la ONU a partir de una grave mutilación a su reputación. Con lo cual, a partir de 1994, se evidenció una reducción de la participación de la ONU en la resolución de conflictos intra-estatales.

Tercera Fase. Esta etapa es capaz de ser escindida en dos: (i) entre 1995 y 1998, y (ii) de 1999 en adelante. Retomando lo ya expuesto, las crisis en Somalia y Ruanda echaron por tierra la reputación intervencionista de la ONU y la empujaron a establecer una retirada. En particular, se creyó que la ONU debía dejarle el lugar a las organizaciones regionales o a las coaliciones ad-hoc (prueba de ello son, en África Sub-Sahariana, las intervenciones de Sierra Leona y Liberia). De esta forma, se dio paso a lo que se conoce en la literatura como una regionalización de las misiones de paz (Ahmed, Keating y Solinas, 2007), etapa en la que se consideró que dichas organizaciones o coaliciones estaban “better suited for the task” (Ahmed, Keating y Solinas, 2007: 15). Dicho atractivo encontraba su fuente en presunciones tales como que se encuentran mejor equipadas, o que tienen mayor voluntad política por sufrir las externalidades de los conflictos de manera ostensible (Weiss, 1994; Ahmed, Keating y Solinas, 2007).

No obstante, este período de luna de miel fue breve; la experiencia demostró exactamente lo contrario a lo que se creía: “African peacekeeping capabilities, however, have lagged behind their willingness to intervene. The various peacekeeping initiatives have suffered from political, financial, administrative, logistical, as well as command and

control problems.” (Berman y Sams, 2000: 7). Así, fue esta carencia de respaldo logístico y financiero que impulsó, a partir de 1999, una resurrección de la ONU como principal organismo encargado de montar las mencionadas intervenciones (prueba de ello puede ser la intervención en la República Democrática del Congo en 1999).

Experiencia africana

Colonialismo. Una de las particularidades que ofrece el continente africano radica en su historia geopolítica; víctima del colonialismo a manos de las potencias de Occidente, los países africanos evidenciaron una postergación del empoderamiento cívico de sus ciudadanos. En palabras de Berman y Sams, “Colonialism stunted Africa’s political, economic, and social development.” (2000: 13).

En términos estructurales, la administración colonial operó sobre la configuración política del territorio, así como también la estructura de la economía, con efectos de largo plazo. En cuanto a la modelación *à la carte* del territorio, “During the nineteenth century’s ‘scramble for Africa’, European powers partitioned the continent into arbitrary territorial units” (Berman y Sams, 2000: 13). El corolario fue un déficit de cohesión interna alarmante, tributario del fuerte componente étnico: “unrelated areas and peoples were just arbitrarily joined together” (Kofi Annan, 1998: 3). Los procesos de independencia se asentaron como por inercia sobre dichas divisiones políticas; mas, eso no fue lo único que heredaron, sino que, por el contrario, el bagaje incluía asimismo el desafío de lograr la unidad nacional. La empresa no era menor, pues a menudo, las instituciones coloniales estaban diseñadas para explotar las divisiones locales, en lugar de superarlas (Kofi Annan, 1998; Berman y Sams, 2000; McVey, 2003).

Por otra parte, en lo que respecta a la dimensión económica, la administración colonial se hallaba naturalmente diseñada para satisfacer las necesidades de los colonos

y de la metrópoli, en detrimento del desarrollo local. Dos de los atributos con más relevancia en el análisis de los efectos del colonialismo sobre el desarrollo económico africano son: los términos de intercambio desfavorables y la *primarización* de la economía –con secuelas sobre el desarrollo del capital humano a partir de la necesidad de mano de obra barata para el trabajo no calificado (Kofi Annan, 1998; Berman y Sams, 2000). Dicha estructura económica generaba la dependencia de parte de las colonias frente a la metrópoli, dada la inmadurez de la economía local. Siguiendo el mismo patrón que en el frente político, la estructura fue heredada por los Estados africanos independizados, perpetuando el sistema.

A su vez, desde una mirada culturalista, el régimen colonial no contribuyó exactamente a lo que se conoce como la maduración política y el empoderamiento de los pueblos. En particular, “Africans were given virtually no voice in political affairs” (Berman y Sams, 2000: 13).

Conflictividad y fuentes del conflicto. Con frecuencia se pinta un cuadro de África como un continente atravesado por la conflictividad interna extrema. En efecto, “the number and intensity of armed conflicts on the continent remained a matter of grave concern” (Kofi Annan, 1998: 3); no obstante, de acuerdo a Collier y Hoeffler (2002) –y para sorpresa del análisis inexperto-, África observa una incidencia de conflicto civil similar *vis-à-vis* otras regiones en desarrollo. Así, los autores aseveran que la tendencia de conflicto en África es consistente con los patrones globales de comportamiento; en este sentido, concluyen: “there is no mysterious ‘Africa effect’” (2002: 13). Dicho esto, los autores extraen otra conclusión de su trabajo: la estructura del riesgo de que estalle un conflicto difiere sustantivamente con respecto a otras regiones del mundo. En particular, dirigen la lente hacia la composición étnica de las sociedades y la estructura

de la economía –variables que ya fueron consideradas a partir de los efectos de largo plazo del experimento colonial. En cuanto a la variable de etnicidad, los autores se inclinan a favor de las sociedades en las que existe una etnia dominante, como más proclives a experimentar una erupción de violencia. A su vez, McVey (2003), explica que la politización del clivaje étnico es uno de los componentes más peligrosos al momento de evaluar la posibilidad de un conflicto. Por su parte, Annan arguye que “In extreme cases, rival communities may perceive that their security, perhaps their very survival, can be ensured only through control of State power” (1998: 4).

En lo que refiere a la incidencia de la estructura de la economía en la posibilidad de que emerja un conflicto intra-estatal, Collier y Hoeffler (2002) hacen hincapié en el binomio “armas-recursos naturales”. Específicamente, las organizaciones y movimientos de rebeldes son capaces de generar sus propios ingresos a partir de las rentas generadas por la tributación informal de las exportaciones de recursos naturales (Kofi Annan, 1998; Berman y Sams, 2000; Collier y Hoeffler, 2002; McVey, 2003).

Pos-Guerra Fría. Durante el período de contienda ideológico-militar bipolar, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética estuvieron dispuestos a ofrecer su apoyo a gobiernos autoritarios, corruptos y represivos, con la finalidad en mente de cooptar y conservar aliados para la construcción de esferas de influencia. De esta manera, algunas de las políticas concomitantes para dicho logro incluían el flujo de dinero y armas; dicho flujo le otorgaba cierta soltura económica al gobierno con respecto a la administración. Sin embargo, alimentaba, asimismo, la ya instalada dependencia económica con respecto a las potencias mundiales.

El colapso del experimento soviético y la lógica derivación en la victoria norteamericana trajeron aparejadas una batería de consecuencias a nivel sistémico, que no fueron para nada ajenas a la experiencia africana:

With the end of the superpower rivalry, many African leaders could not continue to rely on the accustomed backing of an outside power to lend much-needed political legitimacy and financial and military support to their regimes. The US no longer needed to coddle African leaders in exchange for their allegiance. Russia no longer had the means to provide assistance (...). (Berman y Sams, 2000: 15)

La ausencia de dicho soporte económico, legítimo y militar, comenzó a generar problemas hacia adentro de los Estados en lo que refiere a la administración cotidiana. Con la corrupción y el despilfarro a la orden del día, las tensiones étnicas latentes y la inexistencia de un monopolio legítimo de la fuerza capaz de proveer seguridad, la mayoría de los Estados africanos ingresaron en un proceso de desintegración, producto de una estructura putrefacta desde sus cimientos.

Más aun, los mencionados conflictos intra-estatales no tardaron en desbordar las fronteras nacionales, generando crisis a nivel regional. Las insurgencias, el flujo de armas livianas y el aumento en el número de refugiados no sólo afectaban la ya tenue habilidad del Estado para gobernar, sino que tenían el potencial para amenazar la seguridad regional (Berman y Sams, 2000; McVey, 2003).

Por qué concentrarse sólo en África Sub-Sahariana. La presente investigación se propone evaluar el impacto que pueden –o no– causar las intervenciones militares humanitarias en la democratización de los Estados intervenidos. Sin embargo, se ha elegido concentrar la mirada hacia una región del mundo en particular: África Sub-Sahariana.

En primer lugar, desde un punto de vista meramente metodológico y pragmático, concentrar los esfuerzos en una sola región puede verse como un as bajo la manga: permite establecer una suerte de control que, de otra manera, debería ser artificialmente construido. Si bien no es acertado concluir que África es un continente homogéneo, algunas de sus características son intrínsecas a la historia africana y, en ese sentido, inigualables en el resto del mundo⁶.

Desde una óptica teórica, es posible aseverar la singularidad del continente africano en lo que refiere al interés de parte de la ONU en el mantenimiento de la paz. Como ya fue mencionado, independientemente de los resultados, África recibió mayor atención que otras regiones.

	Cantidad de Intervenciones Militares Humanitarias (iniciadas)				
	África Sub-Sahariana	América	Asia	Europa	Medio Oriente
1990-1994	5	1	1	3	2
1995-1999	5	1	1	6	1
2000-2004	4	1	1	1	1
2005-2009	3		1	1	1
2010-2012	4			1	1

TABLA 1. Cantidad de IMH comenzadas en cada región
Fuente: Elaboración propia con datos del DPKO.

Efectivamente, la naturaleza y proliferación de las crisis fueron –y continúan siendo- de una magnitud que lo ameritó. No obstante esta disparidad a favor del continente africano, es menester señalar que las crisis de algunas regiones del mundo poseen un atractivo particular para ciertos jugadores de gran peso –atractivo que resulta extraño

⁶ Entre éstas se cuentan la experiencia colonial y sus legados de largo plazo, la existencia de una multiplicidad de grupos étnicos incomparable a nivel mundial, el menguado desarrollo económico, entre otras.

para África⁷. De esta manera, no sería justo compararlas con las misiones africanas dado el frecuente déficit de compromisos de largo plazo que éstas sufren.

Finalmente, las crisis africanas se han ganado la fama internacional por ser especialmente complejas y multidimensionales. Con lo cual, las misiones que se proponen abordarlas deberían estar a la altura de las circunstancias y ser inherentemente ambiciosas. Dicho esto, dada la multiplicidad de aristas que se deben abordar de manera simultánea al momento de intervenir una crisis africana, si la política surte los efectos deseados, entonces se podría decir que sí estamos frente a una bala de plata. Sería, en otras palabras, testear dicha política frente al *worst-case scenario*.



⁷ La resolución de algunas crisis como las de Kosovo o Timor del Este contaron con el apoyo y el interés casi incondicional de potencias mundiales, a partir de la importancia geopolítica que dicho territorio significaba en sus respectivas agendas de política exterior.

MARCO TEÓRICO

IMH Y DEMOCRATIZACIÓN

“There are many types of cancer, many paths the disease may take through time, and many points at which medical intervention may do some good. As with international conflict, the multifaceted nature of cancer makes it very hard to understand and treat.”

Stern y Druckman, 2000

Tensión Realismo - Liberalismo

El debate acerca de la posibilidad de que las IMH sean un instrumento más de política capaz de promover la democracia se ubica, en términos generales, en el corazón de la disputa teórica de las Relaciones Internacionales entre el Realismo y el Liberalismo.

De acuerdo con la tradición realista de la disciplina, el Estado-nación es la unidad básica de análisis, se halla inserto en un contexto de anarquía *vis-á-vis* el resto de los Estados, es soberano, y uno de sus objetivos máximos es la búsqueda de poder –y la consecuente lucha para alcanzar dicho poder. En este sentido, un concepto que toma absoluta relevancia es el de “interés nacional”, puesto que la dinámica de política internacional y las jugadas que dicho país encarará en la arena internacional se diagrama “puertas adentro”, considerando como faro la preeminencia de dicho interés nacional. De esta manera, el concepto puede adquirir una dimensión caprichosa y arbitraria que, lejos de estar moralmente mal, forma parte de las reglas del juego de la

política internacional desde la perspectiva realista. En línea con lo expuesto, Chesterman declara: “The capriciousness of state interest is a theme that runs throughout the troubled history of humanitarian intervention” (2003: 46). En este sentido, el realismo suele cuestionar y acusar de inoperante al derecho internacional y a las instituciones internacionales (Chesterman, 2003).

Así, los fundamentos sobre los cuales se asienta el descrédito del Realismo en lo que refiere a las intervenciones como instrumentos de política de parte de la ONU son: (i) la dicotomía entre soberanía estatal e intervención extranjera, y (ii) la contradicción entre interés nacional y cooperación interestatal.

En lo que respecta al primero, la teoría realista considera que la soberanía es una condición *sine qua non* para la existencia de un Estado como tal. En otras palabras, un Estado es, por definición, soberano. Con lo cual, una intervención extranjera –incluso aunque sea patrocinada por la ONU– representa una violación del imperio y el poder de dicho Estado, así como también sienta precedente acerca de la propia incapacidad para su conducción. En este sentido, una intervención militar humanitaria –es decir, una intervención cuyo objetivo es contrario a la adquisición de territorios o a la subyugación de un pueblo, sino que, lo que busca es la protección de la población local así como sembrar los cimientos para un gobierno autónomo y democrático– no podría ser jamás considerada como un instrumento de política legítimo, puesto que no sólo es violatorio de la condición del Estado en tanto tal, sino que, a su vez, no se enmarca bajo ningún propósito factible de ser hallado entre las motivaciones de un Estado.

Retomando la última idea, el segundo de los fundamentos se asienta sobre la tensión teórica y práctica entre el interés nacional y la cooperación interestatal. En un mundo anárquico, la cooperación no resulta una forma natural de comportamiento de los Estados. Dado que, desde esta corriente, se considera que el interés nacional es el

principio rector de las acciones de un Estado, la doctrina realista desconfía del vigor y la benevolencia de la cooperación internacional que podría surgir a partir de la institucionalización de la política internacional. Por tanto, no es que el Realismo mira hacia otro lado en casos de crisis internas alarmantes; sino que, por ejemplo, justifica la inercia en el caso del genocidio ruandés desde la carencia de una sólida voluntad de parte de los Estados. En este sentido, el caso resulta paradigmático pues, *ex-post facto* las opiniones acerca de la pasividad dañina de la comunidad internacional eran concurrentes. No obstante, al momento de actuar, cada Estado hizo caso omiso al principio cooperador y escuchó qué mandaba el interés nacional.

Por otro lado, en términos generales, se puede decir que la tradición liberal contiene tres aristas básicas para su análisis: (i) la concepción de la seguridad a través de la paz, (ii) la cooperación internacional y creación de instituciones, y (iii) la democracia.

Desde la perspectiva liberal, la paz no se define por la negativa –la ausencia de guerra- sino que se la conceptualiza de manera positiva. Es decir, la paz implica aunar esfuerzos para desmantelar las hipótesis de conflicto. En otras palabras, se trata de crear las condiciones para el progreso y el desarrollo. En este sentido, las intervenciones militares humanitarias aparecen como una de las políticas destinadas con tal fin; pues lleva en su seno una misión de *statecraft* con el propósito de traer alivio a las poblaciones en riesgo, así como crear las condiciones para la madurez gubernamental.

Por su parte, la cooperación y el institucionalismo se hallan intrínsecamente arraigados: la primera lleva al desarrollo de una concepción institucional del orden mundial, y la segunda refuerza a la primera. De esta forma, si la cooperación es el puntapié inicial para la creación de instituciones, éstas se convierten en aquél espacio

en donde tiene lugar el diálogo, se construye una confianza, y, por tanto, disminuye el impacto de la anarquía. En este sentido, las instituciones, el derecho y la cooperación tienen por objetivo una convivencia de Estados que ya no luchan constantemente por el poder, sino que sean capaces de salir en la ayuda de los que lo necesitan. El Liberalismo se distancia del Realismo desde el momento en que aboga por la cooperación como canal para alcanzar la paz –estado que permite maximizar el beneficio para los seres humanos.

Finalmente, cabe decir que la democracia es un concepto que atraviesa a la doctrina liberal en su totalidad. En primer lugar, el Liberalismo cataloga a la guerra de irracional, producto de la ignorancia y de la desatención de la voluntad del pueblo. Es decir, dadas las consecuencias nocivas de la guerra, ésta es contraria a la racionalidad del ser humano. Es por ello que, asimismo, la corriente liberal es incondicional a la democracia como forma de gobierno: si los pueblos tuviesen que elegir la guerra, no lo harían. En segundo lugar, la democracia es uno de los fundamentos para la tan anhelada paz; la teoría de la “paz perpetua” concibe una circunstancia en la que las democracias no se hacen la guerra, sino que cooperan unas con otras en pos del progreso.

Tensión dentro del Liberalismo. La escuela liberal no se halla exenta de la proliferación de corrientes en su seno. Georg Sørensen (2006) fue uno de los que identificó esta tensión y la bautizó como la necesidad de encontrar un balance entre el Liberalismo de Restricción y el Liberalismo de Imposición. En lo que respecta al primero, refiere a la idea de una esfera individual de acción que es absolutamente propia y que no involucra la interferencia de terceros actores; a esto se lo reconoce con el nombre de libertad negativa. En el plano de las Relaciones Internacionales, la extrapolación se realiza sobre la base de la autodeterminación y la soberanía de los

Estados, plasmadas en Westfalia. De esta manera, el desarrollo de instituciones es un síntoma del Liberalismo de Restricción, en el sentido en que la fuerza de los Estados que deviene de su capacidad militar se encuentra contenida por reglas. Así, uno de los aspectos del Internacionalismo Liberal fue la construcción de Liberalismo de Restricción en calidad de reglas para proteger la esencia del sistema internacional: el Estado-nación.

No obstante, según Sørensen, el Liberalismo de Restricción por sí sólo no es suficiente: “The negative liberty of non-intervention is not a guarantee that states will be successful, of course. They can fail, even miserably so; negative freedom is no guarantee of the good life. The freedom is one of choosing your course, not one of assured success” (2006: 260). Es por esto que el Internacionalismo Liberal incluye asimismo a su antónimo, el Liberalismo de Imposición, que, en el plano interno, aboga por la intervención activa de del Estado para asegurar las condiciones reales de libertad para sus ciudadanos (como por ejemplo, salud, educación, acceso a los recursos económicos, entre otros). Nuevamente, si se extrapola al plano internacional, la idea detrás del concepto es que la comunidad internacional, en lo que refiere a aquellos Estados deficitarios en materia de democracia y crecimiento económico, puede actuar con el objeto de contribuir al desarrollo de aquellas condiciones básicas. Según Sørensen:

Liberalism of Imposition is about positive liberty, about actively solving problems of underdevelopment, lack of liberty, absence of human rights and so on. Making the world safe for democracy; conducting humanitarian intervention; seeking to bring economic development through aid combined with political and economic conditionalities: in short, an active liberal policy of bringing the benefits of democracy and free markets to the world. (2006: 263)

La presente investigación examina en particular el Liberalismo de Imposición, con el objetivo de someterlo a prueba en lo que respecta a una de sus políticas más audaces: la IMH. El propósito es evaluar si es que efectivamente la democracia puede ser exportada e implantada en contextos y circunstancias que, a pesar de ser desfavorables para su madurez, pueden ser transformados a partir de dicha política.

IMH y democratización: voces a favor y en contra

El interrogante que se propone responder la investigación es, como ya fue mencionado, *¿Cuál es el impacto de las intervenciones militares humanitarias de la pos Guerra Fría en la democratización de los países destinatarios?* Sin embargo, resulta legítimo ir un paso más atrás, no asumir ningún tipo de consecuencia, y preguntarse: *¿Existe algún impacto sobre la democratización? ¿Es que acaso se puede forjar la democracia a punta de pistola?* Y en este sentido, se encuentran argumentos a favor y en contra.

Comenzando con los argumentos que se oponen a una posible conexión causal entre democracia e IMH, los autores que se inscriben dentro de esta corriente consideran que existe “an inherent contradiction between the idea of democratization and its imposition from outside by force” (Herman and Broadhead, 1984; O'Donnell, Schmitter, y Whitehead, 1986; Karl 1990; Whitehead, 1991; citados en Bueno de Mesquita y Downs, 2006). En particular, hacen foco en dos razonamientos. En primer lugar, tributario de la idea recién expuesta, algunos autores consideran que las causas para el surgimiento y florecimiento de la democracia son absolutamente internas. En este sentido, desconfían de la agencia internacional (Call y Cook, 2003; Pickering y Peceny, 2006). A su vez, muchos de los Estados que resultan candidatos para este tipo de políticas intervencionistas se hallan atestados de impedimentos domésticos para el

surgimiento de la democracia. En otras palabras, “Democracy cannot be implanted in infertile soil” (Pickering y Peceny, 2006: 540).

El segundo de los argumentos en contra de la capacidad de las IMH como promotoras de democracia se centra en la voluntad y los intereses de los agentes intervinientes. A saber, esta postura sostiene que a menudo, dichos actores, contienen una lista de prioridades particular, que no necesariamente es coincidente con las de la misión o las necesidades del Estado destinatario. En este sentido, el Secretario General de Amnistía Internacional sostiene que

(...) the selectivity of international actions proves that powerful states are not motivated by universal values. Their arms industry proves they are not motivated by a desire for peace, and their inhumane immigration/refugee policies prove they have little respect for human rights. (Mahony, 2001)

No obstante, existe otra postura en esta contienda teórica. Algunos académicos consideran que las IMH son factibles de arrojar consecuencias positivas en lo que refiere a la democratización del Estado destinatario: “The question has become not whether, but to what extent, the international community will intervene in the peace process in a given society” (Call y Cook, 2003: 238). En particular, construyen el caso alrededor de tres argumentos: (i) es capaz de generar un cambio de régimen, a partir de la remoción de tiranos o autócratas; (ii) sin ir al extremo mencionado, también puede generar incentivos para que las autocracias comiencen un proceso de liberalización; y, finalmente, (iii) algunos consideran que puede conseguir dismantelar ciertas barreras domésticas para la democracia (Pickering y Peceny, 2006).

De todas maneras, hay algunos autores que estiman que el *outcome* democratizador perseguido por las IMH es coyuntural y obedece a un “modelo de

reconstrucción liberal” que tomó fuerza a partir de la caída de la URSS y el triunfo de la democracia liberal como sistema político.

In practice, the international community is more bound and determined to create democratic political regimes in post-war settings, recreating the core institutions of state and society largely along Western lines of thought. The largest donors and international organizations have coalesced around a standard post-war political package that Marina Ottaway calls the "democratic reconstruction model," involving constitution making, elections within two years of the end of hostilities, funding for civil society, and extensive state institution building. (Call y Cook, 2003: 233)

Sin embargo, resta la pregunta: ¿por qué las intervenciones como medio para alcanzar dicho fin? Si el objetivo que se persigue es la promoción de la democracia y la implantación de dicho modelo alrededor del mundo, ¿por qué se considera, al menos desde la ONU, que uno de los instrumentos con probabilidades de éxito para hacerlo es el intervencionismo? ¿Es que el adjetivo “humanitarias” aporta algo al debate o es una diferenciación puramente semántica? Al respecto, el Director Ejecutivo de Human Rights Watch considera que esta política coercitiva, llegado el caso, puede ser la única medida razonable capaz de prevenir o detener violaciones sistemáticas a los derechos humanos, o incluso el crimen del genocidio (Mahony, 2001). Asimismo, es menester resaltar que uno de los pilares de las intervenciones militares humanitarias radica en apelar al bienestar de la población civil; en particular, son éstos quienes, una vez implantada de manera foránea la semilla de la democracia, deben nutrirla para que florezca. En línea con lo expuesto, cuando una misión define en su mandato que llevará adelante asistencia humanitaria, está haciendo alusión al abordaje del desarrollo humano –asistencia sanitaria, educativa, desarrollo económico, seguridad, entre otras.

Estas dimensiones se proponen volver a los ciudadanos menos urgidos y que, por tanto, descuenten el futuro a una tasa más baja.

Hasta aquí se ha revisado la tensión entre el realismo y el liberalismo en lo que respecta a las IMH y la promoción de la democracia; a su vez, se hizo hincapié en el distanciamiento dentro de la corriente liberal entre el Liberalismo de Restricción y el Liberalismo de Imposición. Asimismo, se exploró dicha diferencia en lo que respecta a los argumentos teóricos propuestos por cada postura. A continuación, se presentará sobre la base de la literatura revisada, el objetivo del estudio, las hipótesis, el método, y las variables de las cuales se servirá la investigación.

Marco conceptual y diseño de investigación

Objetivo e hipótesis. El objetivo de la presente investigación es estimar el posible impacto de la IMH en la democratización de un Estado. Así, la investigación se inscribe dentro de la discusión liberal y pretende observar si la democracia puede ser implantada por actores externos en un territorio determinado y ya organizado políticamente.

Con el propósito de abordar la pregunta de investigación, se llevará adelante una evaluación en dos niveles, uno de tipo global y otro regional. El análisis global tiene como objetivo observar los efectos generales de la relación propuesta en la pregunta de investigación; el testeo a nivel regional, por otro lado, busca observar si existe un “efecto africano” en dicha relación. En la primera parte de la investigación, se recurrirá al uso de la metodología cuantitativa, haciendo una suerte de cuasi-experimento entre casos de intervención y casos de no intervención. La segunda parte, por otro lado, hará uso de una metodología cualitativa, en la cual se estudiarán los casos de Mozambique,

Angola, Kenia, y Uganda. La intención detrás del uso de esta metodología es detectar los mecanismos causales que se encuentran en funcionamiento en dicha relación.

A continuación se presentarán las hipótesis de la investigación. Una de las que se propone, es la que pone a prueba la tesis del Liberalismo de Imposición. Las otras son una suerte de deducción de teoría en la que se someten a prueba dos tesis sobre la promoción y el fortalecimiento de la democracia: la teoría de la modernización y la teoría rentista. En este sentido las hipótesis principales sobre la que rondará el análisis a nivel mundial serán las siguientes:

Hipótesis 1: Es de esperar que una intervención militar humanitaria mejore la trayectoria democrática de un país.

Hipótesis 1.2: Es de esperar que una intervención militar humanitaria, en países con un PBI per cápita más alto, mejore aún más su trayectoria democrática.

Hipótesis 1.3: Es de esperar que en países exportadores de petróleo y minerales, una intervención militar humanitaria tenga un efecto mermado sobre su trayectoria democrática.

Por otro lado, las hipótesis sobre las cuales se edificará el análisis sobre la región de África Sub-Sahariana son las que siguen a continuación:

Hipótesis 2: Es de esperar que una intervención militar humanitaria mejore la trayectoria democrática del país intervenido, vis-à-vis los casos de no intervención.

Hipótesis 2.2: Es de esperar que una intervención militar humanitaria, en países con un PBI más alto, un mayor porcentaje de participación de la clase media en el ingreso, mejore aún más su trayectoria democrática, vis-à-vis los casos de no intervención.

Hipótesis 2.3: Es de esperar que una intervención militar humanitaria, en países con una estructura de la economía orientada hacia la exportación de petróleo y minerales, evidencie un efecto mermado en la evolución de la trayectoria democrática de un país, vis-à-vis los casos de no intervención.

Método. El método de investigación a partir de cuál se intentará cumplir con dicho objetivo es de estrategias anidadas: una primera etapa cuantitativa, a nivel global y regional, y una segunda etapa cualitativa de estudio de casos. Mientras que el primero explora la covarianza entre la IMH y la democratización, el diseño cualitativo incrementa el valor de la investigación gracias explicaciones minuciosas sobre *cómo* es que dichas intervenciones fomentan o no la democratización. El fundamento sobre el que se apoya la inclusión de esta segunda parte radica en que la evaluación cuantitativa adolece de un *eslabón perdido*: los estudios de caso proporcionan mecanismos causales que permiten comprender de manera exhaustiva la conexión entre las IMHs y la democratización. De esta manera, la combinación metodológica le permite a la investigación contar con una primera aproximación más general, y una segunda etapa cuya riqueza se asienta en la particularidad.

Variables. A continuación, se presentarán las variables de las cuales se va a servir la investigación.

Variable dependiente. Como ya fue mencionado, el foco de la investigación se halla centrado en la democratización de los países destinatarios de IMHs en el período de la pos Guerra Fría. De acuerdo con Robert Barro, “the democratization in Africa since 1989 has been substantial; whether it will be sustained is not yet known” (1999: 161). Sumada a la ya desarrollada preocupación de la parte de la ONU por el continente africano, y su aumento en la intromisión de los asuntos internos de los Estados africanos, resulta interesante explorar si dicho aumento sustancial en la democratización africana que sugiere Barro (1999) tiene conexión con las políticas intervencionistas.

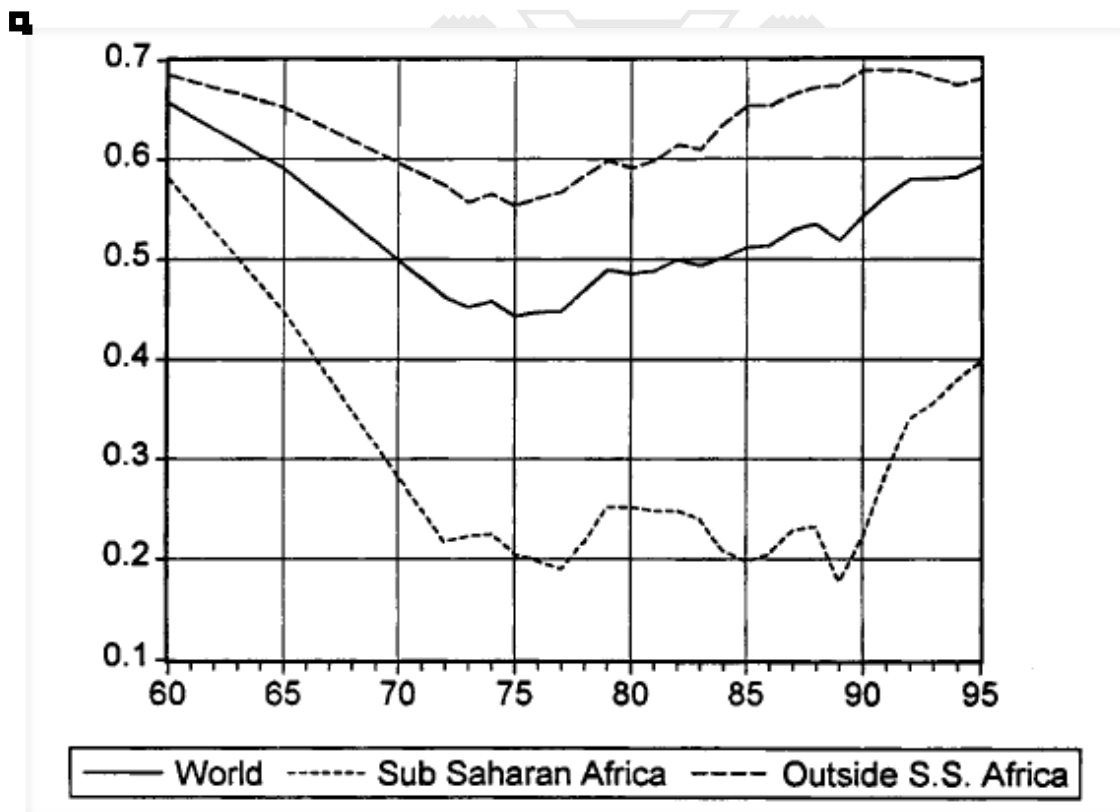


FIGURA 3. Tendencia democratizadora en el mundo, 1960-1995
Fuente: Barro (1999)

La variable dependiente que se busca explicar es la *trayectoria democrática de un Estado*. La definición de democracia que se empleará en esta investigación es una de tipo restringida, meramente institucional, que se enfoca en tres elementos: (i) la

presencia de instituciones y procedimientos a través de los cuales los ciudadanos pueden expresar de manera efectiva sus preferencias acerca de políticas y líderes alternativos; (ii) la existencia de mecanismos institucionales de constreñimiento al ejercicio del poder de parte del Poder Ejecutivo; y (iii) la garantía de libertades civiles extendida a todos los ciudadanos, en sus actividades diarias y en sus actos de participación política (Marshall, Jagers y Gurr, 2010).

Como medida de la democracia se utilizarán dos indicadores. En primer lugar, se hará uso del indicador *Polity2* del proyecto de Polity IV (Marshall, Jagers y Gurr, 2010)⁸. *Polity2* es una resta entre la puntuación *Polity* de autocracia y la de democracia, con el objeto de producir una única escala que se extienda desde -10 a 10. A su vez, trata las interrupciones (-66) como los “sistema ausente” o *missing value*; asigna a los interregnos (-77) el valor "0"; y los casos de transición (-88) se prorratean a través del ciclo de la transición (para mayor información, ver el Anexo I).

Si bien el indicador *Polity2* es el principal de la investigación, éste será complementado con los Indicadores de Gobernabilidad del Banco Mundial. A partir de éstos, se creará el Índice de Gobernabilidad, con el propósito de aunarlos bajo un mismo indicador capaz de representar la mencionada variable. Según Kaufmann, Kraay y Mastruzzi,

We draw on existing notions of governance, and seek to navigate between overly broad and narrow definitions, to define governance as the traditions and institutions by which authority in a country is exercised. (2010: 4)

⁸ “This variable modifies the combined annual POLITY score by applying a simple treatment, or “fix,” to convert instances of “standardized authority codes” (i.e., -66, -77, and -88) to conventional polity scores (i.e., within the range, -10 to +10).” (Marshall, Jagers y Gurr, 2010: 8)

Así, el proyecto incluye (i) el proceso a partir del cual es gobierno es electo por sus ciudadanos y luego reemplazado por su sucesor; (ii) la capacidad del gobierno de formular e implementar de manera efectiva políticas relevantes; y (iii) el respeto tanto de los ciudadanos como del Estado por las instituciones que gobiernan las interacciones económicas y sociales entre ellos.

Los Indicadores de Gobernabilidad son seis, y todos oscilan entre aproximadamente -2,5 (débil) y 2,5 (fuerte):

- Rendición de cuentas: refleja en qué medida los ciudadanos de un país perciben que pueden participar en la elección de su gobierno, así como disfrutan de la libertad de expresión, asociación y de prensa.
- Estabilidad política y ausencia de violencia: refleja la percepción de parte de los ciudadanos de que el gobierno sea desestabilizado o derrocado por medios inconstitucionales o violentos.
- Efectividad del gobierno: refleja la percepción de los ciudadanos acerca de la calidad de los servicios públicos, la calidad de la administración pública y su grado de independencia de las presiones políticas.
- Calidad reguladora: refleja la percepción de parte de los ciudadanos de la capacidad del gobierno para formular y aplicar políticas acertadas que permitan y promuevan el desarrollo del sector privado.
- Estado de derecho: refleja en qué medida los agentes confían y respetan las reglas de la sociedad.
- Control de la corrupción: refleja la medida en la que los ciudadanos perciben que el poder público se ejerce en beneficio privado.

Variable independiente. La variable independiente de esta investigación será la *presencia o ausencia de una intervención militar humanitaria.*

En lo que respecta a su definición, este asunto ya fue abordado en el capítulo “Intervenciones Militares Humanitarias” (páginas 14-18). Esta variable es de codificación binaria: recibe un 0 para aquellos países que no experimentaron una IMH y se le adjudica un 1 a aquél grupo de Estados que sí la experimentaron. La información para llevar adelante tal codificación fue obtenida de Departamento de Operaciones de Paz de la Organización de las Naciones Unidas⁹, así como también del servicio digital de documentación de dicho organismo, que cuenta con Resoluciones del Consejo de Seguridad, Declaraciones del presidente del Consejo de Seguridad, así como también Informes del Secretario General, entre otras¹⁰.

El criterio para la clasificación se basó en un rastreo de los mandatos para cada misión. En líneas generales, lo que se buscó fue la mención de tres cometidos: (i) la necesidad de llevar adelante asistencia humanitaria, (ii) el interés por desarrollar tareas de tipo democráticas –a saber, preparar y monitorear elecciones, proveer asistencia técnica en lo que refiere a la gobernabilidad, entre otras-, e (iii) idealmente, mas no definitorio, un número de tropas superior a 1000 (incluyendo personal militar, observadores militares, policía civil, etc.).

Variables de control. Con respecto a la primera parte cuantitativa, en el espíritu de evitar el sesgo por variables omitidas, se recurrirá al uso de variables de control (Wooldridge, 2003). Estas variables surgen a partir de la literatura acerca de los determinantes de la

⁹ Ver: <http://www.un.org/en/peacekeeping/>

¹⁰ Ver: <http://www.un.org/en/documents/>

democracia (Lipset, 1959; Huntington, 1991; Barro, 1999; La Porta et al., 1998; Acemoglu et al., 2008).

El trabajo de Barro (1999), "Determinants of Democracy", actúa en calidad de guía desde el momento en que reúne y somete a juicio distintas hipótesis existentes en la literatura. De su trabajo se extrae la recomendación de tomar variables relacionadas al desarrollo económico, la urbanización, la salud y calidad de vida, la educación, la fragmentación etnolingüística y religiosa, así como también la historia colonial.

En cuanto a la variable de desarrollo económico, se tomaron como indicadores para la base mundial, el PBI per cápita. Siguiendo la teoría de la modernización (Lipset, 1959), hay una correlación fuerte entre desarrollo económico y democracia. A su vez, para la base de datos "africana" también se incluyó el porcentaje de participación de la clase media en el ingreso total del país (medido como la razón entre la participación del primer percentil en el PBI total y la participación del quinto percentil en el ingreso total). Según Barro, "Many researchers stress a positive interaction between the size of the middle class and the extent of democracy" (Barro, 1999: 171).

Asimismo, se sumó como control la variable rentas petroleras y mineras; su indicador son los ingresos de exportaciones de petróleo y minerales como porcentaje del PBI. El uso de esta variable obedece a un intento por poner a prueba la teoría rentista. Ésta sugiere que un contexto en el que la mayoría de los ingresos provienen de rentas resulta nocivo para el florecimiento y progreso de la democracia (Karl, 1997; Ross, 2001; Shaxson, 2007).

Siguiendo a Lipset (1959) y Barro (1999), la urbanización es uno de los determinantes a tener en cuenta al momento de estudiar la democratización. Sus indicadores son el porcentaje de población urbana con respecto a la población total, así como también el porcentaje de rutas pavimentadas con respecto al total de las

carreteras. Por su parte, Barro llama la atención sobre este punto y explica: “Similarly, a rise in urbanization makes it easier for people to meet and communicate –which presumably makes them harder to suppress- but also makes it easier for an autocrat to monitor and control activities” (1999: 160).

Asimismo, Lipset (1959) esboza una hipótesis que sugiere la proximidad causal entre el acceso a los medios de comunicación y la democracia. Dicho acceso permite al ciudadano acceder a distintas fuentes de información y ser capaz de formar un juicio independiente. En este sentido, la facilidad en el acceso a los medios aumenta los costos de restringir la participación en la esfera pública y la competencia electoral. En este sentido, el indicador escogido fue el acceso a internet, por cada 100 personas.

Por otro lado, de acuerdo con Barro “The population’s degree of heterogeneity with respect to ethnicity, language, and culture may also matter for democracy. The usual idea is that more heterogeneity makes it more difficult to sustain democracy” (1999: 172). Con lo cual, se incluyeron los índices de Alesina et. al. (2003) de fragmentación étnica, lingüística y religiosa. En esta línea, Barro (1999), La Porta et al. (1998) y Acemoglu et al. (2008) incluyen en sus análisis una variable exclusivamente para religión, a partir de la cual no es que se observa la probabilidad de que dos individuos elegidos aleatoriamente no pertenezcan al mismo grupo religioso, sino que se especifica el porcentaje de la población que pertenece a cada religión. En esta investigación, por tanto, se incluyó el indicador “Población musulmana”. Según Barro: “(...) Protestant countries are nearly always highly democratic, whereas Muslim countries are usually not democratic” (1999: 176). Asimismo, Acemoglu et al. (2008: 834) retoma el argumento de Huntington (1991) que hace hincapié en la importancia del Islam como una barrera institucional en sí misma para el desarrollo económico y político.

Barro (1999) también recomienda incluir como controles adicionales algunos indicadores referidos a la salud. Para el caso de la base de datos mundial, se introdujeron dos indicadores: la esperanza de vida al nacer y la tasa de mortalidad infantil. Más aún, Barro (1999) también aconseja añadir controles relacionados a la educación; así, se incluyeron la razón entre la matriculación femenina y masculina en la escuela primaria, así como también la tasa de completitud del primario (tanto para mujeres como para varones). El argumento detrás de la correlación entre educación y democratización funcionaría de la siguiente manera: los ciudadanos más educados tienden a ser más pacientes, tienden a aceptar el hecho que puede ganar elecciones gente que no nos representa. La educación, en este sentido, predispone mejor a los ciudadanos a aceptar la frustración de que haya gente que los represente y que no han elegido.

Finalmente, también se añadió para la base de datos de África Sub-Sahariana una *dummy* con el objeto de explorar la herencia colonial. Según Barro: “Colonial heritage would be important for democracy if countries inherited tendencies for more or less political freedom from their previous rulers” (1999: 174). Pickering y Peceny (2006), basándose en Huntington (1991), Przeworski et. al. (2000), y Colaresi y Thompson (2003), utilizan esta variable en calidad de variable de control, bajo el supuesto de que existe una correlación positiva entre un ex gobierno colonial de origen británico en el pasado y la democracia en el presente.

Hipótesis	Variables			Indicadores		
	Nivel global	Dependiente	Independiente	De Control	De la variable dependiente	De la variable independiente
Es de esperar que una intervención militar humanitaria mejore la trayectoria democrática de un país.	Trayectoria democrática de un Estado	Presencia o ausencia de una IMH	Grado de desarrollo económico. Rentas petroleras y mineras. Fragmentación étnica. Fragmentación lingüística. Fragmentación religiosa. Calidad de vida. Alfabetización. Región del mundo.	Polity 2	Codificación binaria: 0 para aquellos países que no experimentaron una IMH y 1 para aquellos que sí.	PBI per cápita. Ingresos de exportaciones de petróleo y minerales como % del PBI. Índice de fragmentación étnica. Índice de fragmentación lingüística. Índice de fragmentación religiosa. Tasa de mortalidad infantil. Esperanza de vida al nacer. Tasa de finalización del primario. Razón entre matriculación femenina y masculina. Codificación binaria para las regiones del mundo: África, Sudeste Asiático, América Latina y el Caribe, Medio Oriente y Norte de África, Europa del Este y Asia Central, y Asia (variable omitida: América del Norte y Europa Occidental)
Es de esperar que una intervención militar humanitaria, en países con un PBI per cápita más alto, mejore aún más su trayectoria democrática.	Trayectoria democrática de un Estado	Presencia o ausencia de una IMH*Grado de desarrollo económico	Rentas petroleras y mineras. Fragmentación étnica. Fragmentación lingüística. Fragmentación religiosa. Calidad de vida. Alfabetización. Región del mundo.	Polity 2	Codificación binaria: 0 para aquellos países que no experimentaron una IMH y 1 para aquellos que sí. PBI per cápita	Ingresos de exportaciones de petróleo y minerales como % del PBI. Índice de fragmentación étnica. Índice de fragmentación lingüística. Índice de fragmentación religiosa. Tasa de mortalidad infantil. Esperanza de vida al nacer. Tasa de finalización del primario. Razón entre matriculación femenina y masculina. Codificación binaria para las regiones del mundo: África, Sudeste Asiático, América Latina y el Caribe, Medio Oriente y Norte de África, Europa del Este y Asia Central, y Asia (variable omitida: América del Norte y Europa Occidental)
Es de esperar que en países exportadores de petróleo y minerales, una intervención militar humanitaria tenga un efecto mermado sobre su trayectoria democrática.	Trayectoria democrática de un Estado	Presencia o ausencia de una IMH*Rentas petroleras y mineras	Grado de desarrollo económico. Fragmentación étnica. Fragmentación lingüística. Fragmentación Religiosa. Calidad de vida. Alfabetización. Región del mundo	Polity 2	Codificación binaria: 0 para aquellos países que no experimentaron una IMH y 1 para aquellos que sí. Ingresos de exportaciones de petróleo y minerales, como % del PBI	PBI per cápita. Índice de fragmentación étnica. Índice de fragmentación lingüística. Índice de fragmentación religiosa. Tasa de mortalidad infantil. Esperanza de vida al nacer. Tasa de finalización del primario. Razón entre matriculación femenina y masculina. Codificación binaria para las regiones del mundo: África, Sudeste Asiático, América Latina y el Caribe, Medio Oriente y Norte de África, Europa del Este y Asia Central, y Asia (variable omitida: América del Norte y Europa Occidental)

TABLA 2. Resumen de hipótesis, variables e indicadores para el análisis de nivel global.

Hipótesis	Variables			Indicadores		
	Nivel regional	Dependiente	Independiente	De Control	Para la variable dependiente	Para la variable independiente
Es de esperar que una intervención militar humanitaria mejore la trayectoria democrática del país intervenido, vis-à-vis los casos de no intervención.	Trayectoria democrática de un Estado	Presencia o ausencia de una IMH	Grado de desarrollo económico. Rentas petroleras y mineras. Urbanización. Acceso a la comunicación. Calidad de vida. Alfabetización. Fragmentación étnica. Fragmentación lingüística. Fragmentación religiosa. Historia colonial.	Polity 2 Índice de Gobernabilidad	Codificación binaria: 0 para aquellos países que no experimentaron una IMH y 1 para aquellos que sí.	PBI. Razón entre la participación del 1er y el 5to percentil en el ingreso total. Ingresos de exportaciones de petróleo y minerales como % del PBI. Población urbana (% del total). Rutas pavimentadas (% del total). Usuarios de Internet (cada 100 personas). Tasa de mortalidad infantil. Esperanza de vida al nacer. Prevalencia de HIV Tasa de finalización del primario. Razón entre matriculación femenina y masculina. Índice de fragmentación étnica. Índice de fragmentación lingüística. Índice de fragmentación religiosa. Población musulmana Codificación binaria para historia colonial: 0 para aquellos países que no fueron colonia británica y 1 para aquellos que sí.
Es de esperar que una intervención militar humanitaria, en países con un PBI más alto, un mayor porcentaje de participación de la clase media en el ingreso, mejore aún más su trayectoria democrática, vis-à-vis los casos de no intervención.	Trayectoria democrática de un Estado	Presencia o ausencia de una IMH*Grado de desarrollo económico	Rentas petroleras y mineras. Urbanización. Acceso a la comunicación. Calidad de vida. Alfabetización. Fragmentación étnica. Fragmentación lingüística. Fragmentación religiosa. Historia colonial.	Polity 2 Índice de Gobernabilidad	Codificación binaria: 0 para aquellos países que no experimentaron una IMH y 1 para aquellos que sí. PBI de la población. Razón entre la participación del primer percentil en el PBI total y la participación del quinto percentil en el ingreso total.	Ingresos de exportaciones de petróleo como porcentaje del PBI. Población urbana (% del total). Rutas pavimentadas (% del total). Usuarios de Internet (cada 100 personas). Tasa de mortalidad infantil. Esperanza de vida al nacer. Prevalencia de HIV Tasa de finalización del primario. Razón entre matriculación femenina y masculina. Índice de fragmentación étnica. Índice de fragmentación lingüística. Índice de fragmentación religiosa. Población musulmana Codificación binaria para historia colonial: 0 para aquellos países que no fueron colonia británica y 1 para aquellos que sí.
Es de esperar que una intervención militar humanitaria, en países con una estructura de la economía orientada hacia la exportación de petróleo y minerales, evidencie un efecto mermado en la evolución de la trayectoria democrática de un país, vis-à-vis los casos de no intervención.	Trayectoria democrática de un Estado	Presencia o ausencia de una IMH*Rentas petroleras y mineras	Grado de desarrollo económico. Urbanización. Acceso a la comunicación. Calidad de vida. Alfabetización. Fragmentación étnica. Fragmentación lingüística. Fragmentación religiosa. Historia colonial.	Polity 2 Índice de Gobernabilidad	Codificación binaria: 0 para aquellos países que no experimentaron una IMH y 1 para aquellos que sí. Ingresos de exportaciones de petróleo y minerales, como porcentaje del PBI	PBI. Razón entre la participación del primer percentil en el PBI total y la participación del quinto percentil en el ingreso total. Población urbana (% del total). Rutas pavimentadas (% del total). Usuarios de Internet (cada 100 personas). Tasa de mortalidad infantil. Esperanza de vida al nacer. Prevalencia de HIV Tasa de finalización del primario. Razón entre matriculación femenina y masculina. Índice de fragmentación étnica. Índice de fragmentación lingüística. Índice de fragmentación religiosa. Población musulmana Codificación binaria para historia colonial: 0 para aquellos países que no fueron colonia británica y 1 para aquellos que sí.

TABLA 3. Resumen de hipótesis, variables e indicadores para el nivel regional.

Estudios de caso. Una vez evaluada la relación a nivel global y regional, se llevarán acabo cuatro estudios de caso. Tal como fue mencionado, la intención en el empleo de esta metodología radica en dilucidar el *eslabón perdido* que conecta a la variable independiente y a la variable dependiente. Si bien el análisis cuantitativo permite aseverar con confianza estadística la dirección de esta relación –y si ésta efectivamente existe-, el estudio de cada caso permitirá “uncover the micro-foundations (...) that connect hypothesized causes and outcomes and to reduce the difficulties associated with unobserved contextual variables” (Falleti, 2010: 1).

Los casos sobre los cuales se trabajará son Mozambique, Angola, Kenia, y Uganda. La selección de dichos casos no se hizo de manera aleatoria, sino que se hizo parcialmente sobre la variación en la variable dependiente, y parcialmente en la de la independiente. Este modo de selección se apega a los objetivos del trabajo: pues se necesitaba explorar cuatro diferentes trayectorias. Así, se intenta superar el sesgo de selección desde el momento en que se ofrece una variedad de escenarios a evaluar –lo cual no permitiría ni sobreestimar, ni subestimar los resultados obtenidos (King, Keohane y Verba, 1994; Collier y Mahoney, 1996; Mahoney y Goertz, 2004). De esta manera, se seleccionaron casos en los que sí hubo IMH (Mozambique y Angola) y casos en los que no (Kenia y Uganda); a su vez, Mozambique es considerado un caso en el que la IMH fue exitosa en su faceta democratizadora, mientras que Angola se suma a la lista de los casos desafortunados. Por otro lado, Kenia es un caso en el que, prescindiendo de una intervención, el sistema político supo enfocar su trayectoria política con la democratización como faro; mientras tanto, Uganda se une a Angola en su destino desventurado. En este sentido, se observa la variación tanto en el *outcome* como en la variable explicativa, tal como sugiere la literatura al respecto.

La técnica que se empleará para cada uno de los estudios de caso es el rastreo de procesos con base en el análisis de fuentes históricas. La fortaleza del *process-tracing* yace en desenmarañar el suceso, observarlo en detalle e identificar los micro-procesos, en calidad de pasos intermedios, que hacen que los cambios en la variable independiente tengan un impacto en la variable dependiente (Falleti, 2010; Collier, 2011). Así se podrá ofrecer una respuesta pormenorizada del impacto que tienen las IMHs en la democratización del país intervenido, a partir del descubrimiento de los mecanismos causales que operan en dicha relación¹¹. Siguiendo a Beach y Pedersen, se llevará adelante un trabajo cuya finalidad es la construcción de teoría. En particular, los autores deslindan la técnica de *process-tracing* en una tipología de tres componentes – en la cual uno de ellos es la construcción de teoría. Así, definen que “theory-building PT starts with empirical material and uses a structured analysis of this material to induce a plausible hypothetical causal mechanism whereby X is linked with Y” (2011: 16). Según los autores, los pasos a seguir para llevar adelante dicha empresa se resumen en los siguientes: luego de haber conceptualizado las variables a emplear, esta técnica requiere una investigación puntillosa y detectivesca del material empírico. Así, se utiliza la evidencia para inferir posibles manifestaciones empíricas en calidad de mecanismos causales subyacentes entre las variables a estudiar.

Hasta aquí se especificó el objetivo de la investigación, el método y las variables a partir de las cuales se llevará adelante el análisis. También se incluyó un apartado precisando cómo se procederá en la evaluación cualitativa (ver Anexo II) para mayor detalle). A continuación, se expondrán los resultados obtenidos del análisis empírico cuantitativo, para luego pasar al estudio de casos.

¹¹ El rastreo de procesos se hará teniendo en cuenta el aspecto meramente político –a saber, no se estudiará la faceta económica o socio-cultural.

UNA MIRADA GLOBAL A LA RELACIÓN ENTRE IMH Y DEMOCRATIZACIÓN

*“When decision-makers plan interventions
in international conflicts, they attempt
to change the course of history.”*

Stern y Druckman, 2000

El propósito de este capítulo se basa en obtener una tendencia mundial –y por tanto agregada- del efecto democratizador de las intervenciones militares humanitarias. Si bien el objetivo principal de este trabajo es observar la dinámica en África Sub-Sahariana, se considera útil poder contrastar también a la región con el resto del mundo, para identificar si existe un “efecto africano”.

Análisis empírico

Con el objeto de poder dar una respuesta a las hipótesis planteadas, se confeccionó una base de datos en panel para 165 países en 6 grupos de períodos de 4 años: 1990-1993, 1994-1997, 1998-2001, 2002-2005, 2006-2009, 2010-2013 –así, las observaciones son país-período. La razón por la cual la base se organizó alrededor de períodos obedeció a la necesidad lógica de que, dado que son empresas complejas y multidimensionales, se considera acertado captar el impacto de una IMH en un período de tiempo mayor que un año; caso contrario, sería ingenuo creer que el impacto de una iniciativa de semejante tamaño puede visualizarse de un año a otro.

Con respecto al testeo de las hipótesis, para cada una se emplearon distintos controles metodológicos. En particular, se construyeron cinco modelos diferentes según

la metodología empleada. Dado que la base está organizada en panel, el primero de los modelos (Modelo I) es el que controla por efectos aleatorios. El motivo por el cual se escoge esta metodología es que la regresión de mínimos cuadrados ordinarios posee un inconveniente: se debería asumir que los factores o efectos no observados (μ_i) no se hallan correlacionados con la variable independiente. Este supuesto puede arrojar consecuencias graves, pues se asocia al sesgo por variables omitidas (Wooldridge, 2003). No obstante, la metodología de efectos aleatorios acarrea un supuesto muy fuerte y restrictivo: la covarianza entre la variable explicativa y el efecto no observado es cero (Wooldridge, 2003). Puesto que dicho supuesto puede resultar caprichoso, se decidió emplear la técnica de efectos fijos (Modelo II). La ventaja en el empleo de esta técnica yace en permitir que el efecto no observado (μ_i) se encuentre correlacionado con la variable explicativa; pues el modelo de efectos fijos permite que el estimador (β) sea insesgado a partir de que captura todos los factores que están fijos en el tiempo para cada país y que afectan a la variable dependiente (Wooldridge, 2003)¹².

Asimismo, se decidió correr dos modelos retrasados –uno con efectos aleatorios (Modelo III) y otro con efectos fijos (Modelo IV)-, puesto que adquiere sentido controlar por el *lagged value* de la variable independiente (Wooldridge, 2003; Baum, 2006). Siendo que es factible suponer que el efecto de una IMH en $t-1$ impacta en el período t , el objetivo detrás de la utilización de esta técnica radica en poder extraer y separar dichos efectos.

¹² El estimador (β) que arroja la metodología con efectos fijos siempre es insesgado. Pero el estimador (β) de efectos aleatorios puede ser eficiente –pues tiene menor varianza- e insesgado, si es que efectivamente la covarianza entre el error y la variable explicativa es nulo. Para probar dicho supuesto se empleó el Test de Hausman (1978): “Since FE is consistent when μ_i and x_{it} are correlated, but RE is inconsistent, a statistically significant difference is interpreted as evidence against the random effects assumption” (Wooldridge, 2002: 288).

Finalmente, se llevó a cabo un último test, cuyo control se basa en contemplar la relación entre el nivel de democracia en $t-1$ y en t –a sabiendas de que uno impacta en el otro (Modelo V). Efectivamente, resulta prudente considerar que la democracia es un régimen sobre el cual se va “edificando”. En este sentido, los propios ciudadanos de una democracia no le exigen lo mismo a ésta en su nacimiento, que lo que le pueden exigir 10 años más tarde. En este sentido, es factible que la sociedad civil se vuelva más demandante con lo que espera de la democracia de su país, una vez que ésta ya ha echado sus raíces. De esta manera, sería acertado incluir el retraso de la variable dependiente como un regresor más. No obstante, dicha inclusión importaría un problema de endogeneidad, dado que el regresor retrasado estaría correlacionado con el error. Por tanto, haciendo empleo de la metodología Arellano-Bond, se introducirán valores de Polity2 retrasados dos o más períodos como variables instrumentales (Arellano y Bond, 1991).

En lo que refiere a la hipótesis 1 –aquella que supone que una intervención militar humanitaria mejorará la trayectoria democrática de un país-, los resultados obtenidos son los que se presentan en la Tabla 4. Como se observa, el coeficiente de la variable IMH sólo es significativo en el Modelo III –es decir, el de efectos aleatorios con la variable independiente retrasada. En particular, el coeficiente es positivo y significativo al 5%. Así, en presencia de una IMH en $t-1$, el nivel de Polity2 en t aumenta 1,45 puntos, controlando por los demás factores. Siguiendo la advertencia que se realizó previamente acerca de la metodología de efectos aleatorios (ver nota al pie 12), se llevó a cabo el Test de Hausman y éste confirmó que el estimador de efectos aleatorios es no sólo eficiente, sino también insesgado (ver Anexo III). Con excepción del PBI per cápita, los coeficientes correspondientes a las variables de Rentas petroleras y mineras, Calidad de vida y Alfabetización, observan la dirección esperada.

TABLA 4
Modelos para el testeo de la hipótesis 1

	(Modelo I) Polity2	(Modelo II) Polity2	(Modelo III) Polity2	(Modelo IV) Polity2	(Modelo V) Polity2
IMH	-0.0385 (0.717)	-0.0286 (0.689)			0.168 (0.686)
PBI per cápita	-4.73e-05** (1.98e-05)	-5.89e-05*** (2.13e-05)	-3.06e-05 (1.88e-05)	-3.64e-05* (2.03e-05)	-1.83e-05 (2.56e-05)
Rentas petroleras y mineras	-2.625** (1.087)	-0.915 (1.173)	-2.538** (1.061)	-0.813 (1.142)	-0.392 (1.175)
Calidad de vida	1.617*** (0.527)	1.201** (0.576)	1.949*** (0.592)	1.445** (0.636)	0.599 (0.710)
Alfabetización	0.520* (0.273)	0.562** (0.282)	0.442 (0.282)	0.520* (0.291)	0.0965 (0.357)
Fragmentación étnica	-3.625 (2.252)		-3.560 (2.374)		
Fragmentación lingüística	1.934 (2.109)		1.844 (2.221)		
Fragmentación religiosa	0.273 (1.627)		0.793 (1.714)		
África Sub-Sahariana	-4.713*** (1.805)		-3.111 (1.955)		
Sudeste Asiático	-5.951*** (1.572)		-5.115*** (1.653)		
América Latina y el Caribe	-1.350 (1.558)		-0.544 (1.639)		
Medio Oriente y Norte de África	-13.16*** (1.494)		-12.53*** (1.568)		
Europa del Este y Asia Central	-4.530*** (1.381)		-3.945*** (1.450)		
Asia (Sur)	-5.482** (2.164)		-4.826** (2.291)		
L.IMH			1.452** (0.690)	0.942 (0.669)	
L.Polity2					0.482*** (0.0880)
Constante	8.556*** (1.403)	2.833*** (0.253)	8.753*** (1.660)	4.278*** (0.397)	2.190*** (0.318)
Observaciones	783	822	655	688	543
R-cuadrado		0.159		0.129	
Número de países	135	143	134	142	140

Error estándar entre paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

En cuanto a la hipótesis 1.2, cuya predicción se orientaba a esperar que una intervención militar humanitaria, en países con un PBI per cápita más alto, mejore aún más su trayectoria democrática, se confeccionó una variable de interacción entre IMH y PBI per cápita. Los resultados obtenidos se observan los que se observan en la Tabla 5.

TABLA 5
Modelos para el testeo de la hipótesis 1.2

	(Modelo I) Polity2	(Modelo II) Polity2	(Modelo III) Polity2	(Modelo IV) Polity2	(Modelo V) Polity2
IMH	0.0683 (0.732)	0.0555 (0.697)	-0.301 (0.680)	-0.560 (0.651)	0.235 (0.692)
IMH*PBI per cápita	-8.87e-05 (0.000121)	-9.40e-05 (0.000136)			-0.000127 (0.000162)
Rentas petroleras y mineras	-2.752** (1.090)	-1.023 (1.179)	-2.171** (1.090)	-0.456 (1.187)	-0.406 (1.179)
Calidad de vida	1.704*** (0.528)	1.540*** (0.565)	1.720*** (0.606)	1.389** (0.640)	0.695 (0.694)
Alfabetización	0.606** (0.272)	0.668** (0.281)	0.536* (0.288)	0.619** (0.298)	0.121 (0.355)
Fragmentación étnica	-3.735 (2.271)		-3.982* (2.407)		
Fragmentación lingüística	2.287 (2.124)		2.173 (2.248)		
Fragmentación religiosa	0.0239 (1.634)		0.882 (1.731)		
África Sub-Sahariana	-3.120* (1.676)		-2.523 (1.841)		
Sudeste Asiático	-4.757*** (1.491)		-4.586*** (1.583)		
América Latina y el Caribe	-0.0341 (1.460)		0.186 (1.551)		
Medio Oriente y Norte de África	-12.20*** (1.443)		-11.93*** (1.532)		
Europa del Este y Asia Central	-3.306*** (1.281)		-3.225** (1.360)		
Asia (Sur)	-3.989* (2.076)		-4.168* (2.216)		
LIMH*PBI per cápita			-4.00e-05 (0.000154)	-4.73e-05 (0.000178)	
L.Polity2					0.488*** (0.0867)
Constante	7.243*** (1.288)	2.682*** (0.248)	7.957*** (1.494)	3.860*** (0.282)	2.117*** (0.291)
Observaciones	783	822	654	688	543
R-cuadrado		0.151		0.110	
Número de países	135	143	134	142	140

Error estándar entre paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

De acuerdo con los resultados expuestos en la Tabla 5, desafortunadamente no se pueden extraer conclusiones acerca de esta hipótesis, pues ninguno de los coeficientes de la interacción entre IMH y PBI per cápita son significativos en términos estadísticos.

Por su parte, la hipótesis 1.3 postulaba que era de esperar que en países exportadores de petróleo y minerales, una intervención militar humanitaria tenga un efecto mermado sobre su trayectoria democrática. En este sentido, se fabricó una variable de interacción entre IMH y el indicador de Rentas petroleras y mineras (ingresos por exportaciones de petróleo como porcentaje del PBI). Los resultados a los que se llegó son los que se presentan en la Tabla 6.

TABLA 6
Modelos para el testeo de la hipótesis 1.3

	(Modelo I) Polity2	(Modelo II) Polity2	(Modelo III) Polity2	(Modelo IV) Polity2	(Modelo V) Polity2
IMH	-0.0641 (0.806)	-0.0315 (0.772)	-0.442 (0.646)	-0.625 (0.627)	0.413 (0.755)
IMH*Rentas petroleras y mineras	1.988 (1.977)	2.082 (1.964)			-0.895 (2.039)
PBI per cápita	-5.02e-05** (1.98e-05)	-5.89e-05*** (2.13e-05)	-3.23e-05* (1.88e-05)	-3.56e-05* (2.04e-05)	-1.84e-05 (2.55e-05)
Calidad de vida	1.750*** (0.536)	1.287** (0.578)	1.942*** (0.603)	1.470** (0.642)	0.602 (0.712)
Alfabetización	0.455* (0.274)	0.528* (0.283)	0.450 (0.282)	0.529* (0.291)	0.104 (0.356)
Fragmentación étnica	-3.919* (2.361)		-3.825 (2.535)		
Fragmentación lingüística	1.858 (2.214)		2.012 (2.381)		
Fragmentación religiosa	0.0947 (1.706)		0.492 (1.827)		
África Sub-Sahariana	-4.594** (1.871)		-3.304 (2.031)		
Sudeste Asiático	-5.996*** (1.641)		-5.362*** (1.756)		
América Latina y el Caribe	-1.414 (1.625)		-0.730 (1.739)		
Medio Oriente y Norte de África	-13.64*** (1.548)		-13.02*** (1.657)		
Europa del Este y Asia Central	-4.631*** (1.439)		-4.108*** (1.537)		
Asia (Sur)	-5.313** (2.259)		-4.954** (2.421)		
L.IMH*Rentas petroleras y mineras			2.686* (1.557)	2.982* (1.573)	
L.Polity2					0.476*** (0.0879)
Constante	8.668*** (1.457)	2.770*** (0.237)	8.917*** (1.738)	4.184*** (0.378)	2.172*** (0.307)
Observaciones	783	822	655	688	543
R-cuadrado		0.160		0.128	
Número de países	135	143	135	143	140

Error estándar entre paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Como se observa, el coeficiente de interacción es significativo estadísticamente sólo cuando se retrasa la variable independiente (Modelo III y Modelo IV). Al contrario de lo esperado, los coeficientes son positivos. Así, en presencia de una IMH en $t-1$, en países exportadores de petróleo y minerales, el nivel de Polity2 en t aumenta 2,68 puntos para el Modelo III y 2,98 puntos para el Modelo IV, controlando por los demás factores. Una vez más, siguiendo la advertencia que se realizó previamente acerca de la metodología de efectos aleatorios (ver nota al pie 12), se llevó a cabo el Test de Hausman y éste no confirmó que el estimador de efectos aleatorios sea insesgado (ver Anexo III).

Una explicación tentativa para el distanciamiento de los resultados con respecto a la hipótesis proviene del siguiente argumento: es probable que aquellos países exportadores de petróleo y minerales sean candidatos más factibles para una IMH más robusta. Principalmente en África Sub-Sahariana es ya conocido el conflicto existente por la explotación de recursos naturales mineros y petroleros, su control por facciones militares o caudillos de grupos insurgentes (mejor conocidos en inglés como *warlords*). En particular, los grupos rebeldes buscan poder controlar la explotación de dichos recursos onerosos en el mercado internacional, con el objeto de poder financiar sus actividades bélicas (Kofi Annan, 1998; Berman y Sams, 2000; Collier y Hoeffler, 2002; McVey, 2003, *Diamonds for Development*, 2006). En este sentido, la hipótesis de conflicto logra su autoabastecimiento y se retroalimenta: las poblaciones siguen bajo el control atroz de la insurgencia (o de las facciones del ejército que han optado por la defección), éstos tienen los recursos para seguir financiando su campaña y el Estado continúa su empresa militarista en contra de éstos con el propósito de recuperar el control de dichas áreas.

A continuación, se presenta una tabla, a modo de resumen, de los resultados obtenidos en el análisis empírico.

Hipótesis	¿Se confirma la hipótesis?
Es de esperar que una intervención militar humanitaria mejore la trayectoria democrática de un país.	Sí, cuando se retrasa la variable independiente
Es de esperar que una intervención militar humanitaria, en países con un PBI per cápita más alto, mejore aún más su trayectoria democrática.	No se puede confirmar o rechazar
Es de esperar que en países exportadores de petróleo y minerales, una intervención militar humanitaria tenga un efecto mermado sobre su trayectoria democrática.	No, el impacto es inverso y cuando se retrasa la variable independiente

TABLA 7. Resumen de hipótesis y resultados para el nivel mundial

Una conclusión preliminar general que puede ser extraída a partir de lo expuesto es que las intervenciones militares humanitarias tienen un impacto sobre la democratización, pero dicho impacto no es inmediato. En particular, este estudio a nivel global se llevó a cabo organizando la información en períodos de cuatro años, independientemente del tiempo que dura la intervención. Con lo cual, si el impacto *democratizador* de una IMH se observa en el período siguiente, es menester dejar transcurrir cuatro años como mínimo, desde el inicio de la intervención, para poder contemplar los efectos de dicha política –independientemente de la duración de la IMH. Y esto no debería sorprender. Una IMH es una política multidimensional, compleja y ambiciosa; en este sentido, desplegar una empresa de semejante tamaño y coordinar su funcionamiento son tareas que requieren no sólo del compromiso político ya mencionado, sino también de tiempo.

LAS IMHs EN ÁFRICA SUB-SAHARIANA Y SU IMPACTO EN LA DEMOCRATIZACIÓN:**EL ANÁLISIS**

*“Africa has been a giant laboratory
for UN peacekeeping”*

Adebajo y Landsberg, 2000

El objetivo de esta sección yace en tratar de ofrecer una aproximación agregada del efecto de las IMHs en el proceso de democratización de un país, en la región de África Sub-Sahariana.

Tal como fue mencionado previamente, la ventaja de desagregar el fenómeno y enfocarse en África proviene de poder identificar si efectivamente existe un “efecto africano” en lo que respecta a la materia. En el capítulo I se hizo hincapié en el intrincado panorama con el que se enfrentan las misiones en África; retomando una idea de dicho capítulo, testear los potenciales efectos de las IMHs en África sería como someterla al *worst-case scenario*. Los resultados de la sección anterior arrojaron que, a nivel mundial, una IMH en $t-1$ tiene un efecto positivo y significativo en la democratización de un Estado en el tiempo t –es decir, en el período posterior. Sin embargo, hay algunos casos, como las crisis en los Balcanes, o el movimiento separatista que impulsó la independencia de Timor Oriental, que pertenecen a regiones de importancia geopolítica para algunas potencias mundiales. De esta forma, es factible aseverar que dichos casos se distancian de los africanos, en el sentido en que se hallan mejor dotados en términos de personal militar y técnico, así como en términos de fondos para solventar la misión. Más aún, y no menos importante, los compromisos

políticos de parte de la comunidad internacional aparecen como de más largo plazo en dichas zonas. Con lo cual, resulta sensato someter a juicio por separado a África Sub-Sahariana.

Análisis empírico

Para poder abordar la problemática específicamente africana se confeccionó una segunda base de datos en panel para 12 países en 8 grupos de períodos de 3 años: 1990-1992, 1993-1995, 1996-1998, 1999-2001, 2002-2004, 2004-2006, 2007-2009, 2010-2012 –nuevamente, las observaciones son país-período. Tal como se arguyó en la sección anterior, organizar la base alrededor de períodos permite poder captar el impacto de una IMH en un período de tiempo mayor que un año –en sintonía con la envergadura de la empresa.

Los dos grupos de países que conforman la muestra están compuestos por 6 casos de intervención y 6 casos de no intervención –con la intención de conformar una suerte de grupo tratamiento y grupo control. En lo que refiere a los casos de intervención, es menester resaltar que no todas las intervenciones que tuvieron lugar en África lograron entrar en la muestra. El motivo es doble: en primer lugar, con el propósito de poder rastrear una trayectoria relevante *ex post facto*, se necesitaba contar con casos que terminasen como máximo en 2006 (y así poder observar el efecto en, al menos, 6 años). Definitivamente, esta no es una situación ideal; así que, en los casos en los que se pudo, se intentó estirar las observaciones hasta 10 años después de finalizada la intervención y retiradas las tropas. A su vez, la razón por la cual no se contempló desde que finalizó la intervención hasta el presente es que, algunas de las IMHs que ocurrieron a principios de los 90 y terminaron antes de 1995 iban a contar con un período *ex-post facto* de, aproximadamente, 17 años. Así, podría ser una posible

objeción el hecho de que, en tanto tiempo, el efecto de la IMH se confunde con otros factores y, por tanto, no se puede apreciar su singularidad. En segundo lugar, los casos seleccionados fueron IMHs que comenzaron en la década de los 90. El fundamento para dicha preferencia se basa en poder controlar metodológicamente por el “clima de época”, desarrollado con anterioridad. De esta manera, los casos de intervención que se cuentan son: Angola, República Democrática de Congo¹³, Liberia, Mozambique, Sierra Leona y Somalia.

¹³ La segunda intervención que se llevó a cabo en Congo DR se denominó MONUC. El 30 de noviembre de 1999, el Consejo de Seguridad autorizó la misión bajo la resolución 1279. El 30 de junio de 2010, a partir de la resolución 1925 del 28 de mayo de dicho año, el Consejo de Seguridad dio por finalizada MONUC y autorizó MONUSCO, como una suerte de continuidad.

De acuerdo a los dos criterios de selección establecidos previamente, MONUC sólo cumpliría uno: comenzó en los 90. Mas, no pasa la prueba en lo que refiere al otro supuesto. Y es importante resaltar que no es un problema menor, puesto que, observar las consecuencias de MONUC desde 2010 hasta 2012 no sería fructífero para el análisis.

Sin embargo, dada la longitud de MONUC, es menester mencionar que no hubo una continuidad en cómo se pensó y se actuó en Congo RD.

MONUC comienza en 1999 gracias a la firma del Acuerdo de Lusaka entre Angola, Congo DR, Namibia, Uganda, Ruanda, Zambia y Zimbabue, y así se da comienzo a la primera fase de transición en Congo RD (Kibasomba, 2005). No obstante, el acuerdo adolecía de capital político que lo sustentara, y las sospechas entre las distintas partes firmantes acerca del curso de acción de cada una eran notables y perjudiciales. En particular, el presidente de Congo RD, Laurent-Désiré Kabila, mantenía sus recelos frente a la ONU y se mostraba reticente a cooperar (Rogier, 2003).

Tras la muerte de su padre en 2001, Joseph Kabila cambió radicalmente la actitud del gobierno congolés frente a la negociación (Rogier, 2003); de esta manera, se dio comienzo a la segunda etapa de transición (Kibasomba, 2005). En el año 2002, tras el fracaso de una ronda de negociación, se firmaron los Acuerdos de Pretoria y Luanda con Ruanda y Uganda respectivamente, con el propósito de conseguir la repatriación de ex combatientes en territorio congolés (Rogier, 2003). Más aún, en diciembre de 2002 se firmó el Acuerdo Global e Inclusivo de Pretoria, “which spelt out the modalities for sharing power during a 24-month transition period” (Rogier, 2003: 33).

En el año 2003 se firmó el Acta Final, “which endorsed all agreements reached until then, including the transitional constitution and the memorandum on military and security issues” (Rogier, 2003: 33).

Finalmente, tras la firma del Acta Final, comenzó la tercer y última fase de transición en Congo RD, -que se extendió hasta el 2005- “during which the transitional government [of Joseph Kabila], under international supervision/guidance (by the Comité International d’Accompagnement de la Transition – CIAT), prepares and organizes general elections that should lead the country to democracy” (Kibasomba, 2005: 1).

Efectivamente, en el año 2006 se llevaron a cabo elecciones presidenciales. Por lo tanto, dado el avance en términos de democratización, se tomará a ese año, por motivos meramente pragmáticos, como el fin de la IMH en Congo RD.

Por “casos de no intervención” se alude a países que, si bien no experimentaron una intervención como su rótulo lo indica, sí atravesaron conflictos de la magnitud de los que padecieron los países que sí fueron intervenidos, aunque con un resultado opuesto en lo que respecta a la respuesta de la ONU. El caso paradigmático y más ilustrativo es el de Ruanda, con un saldo de 800.000 muertos y aún así no intervención; no obstante, hay otros cinco países que se suman a la muestra y que han experimentado conflictos de similar naturaleza –aunque no siempre de semejante escala. Estos países son: Burundi, Kenia, Nigeria, Sudán, y Uganda. Es fundamental hacer una aclaración concerniente a Burundi y a Sudán. Ambos casos son tomados como casos de no intervención, a pesar de que sí experimentaron una IMH. En el caso de Burundi, ésta comenzó en el año 2004; y en el caso de Sudán, en 2005. No obstante, ya durante principios de la década de los 90 los conflictos y el saldo de muertos en ambos países eran alarmantes¹⁴. En este sentido, es prudente aseverar que, a pesar de que a mediados de los 2000 tuvieron lugar las IMHs, éstas no se hicieron a tiempo¹⁵.

A continuación, se puede observar, a partir de tres indicadores, la semejanza de las trayectorias en lo que respecta a su situación político-social de cada país, tanto de los del grupo “tratamiento”, como de los del grupo “control”. Como se observa, los valores obtenidos para ambos grupos son similares en los tres casos, indicando la similitud conjeturada. El primero de los indicadores, es la Escala de Terror Político, exhibido en la Figura 4; ésta es una escala que mide los niveles de violencia política y terror que experimenta el país en un año determinado desde el 1 (bajo) al 5 (alto) (Gibney, Cornett, y Wood, 2011). El segundo indicador se denomina Índice de Integridad Física;

¹⁴ Ver UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset en http://www.pcr.uu.se/research/ucdp/datasets/ucdp_prio_armed_conflict_dataset/

¹⁵ Al respecto, McVey (2003) hace hincapié en la importancia de que una intervención se despliegue a tiempo –incluso, capaz, antes de que comience el conflicto- para que sus resultados sean más exitosos.

éste se expone en la Figura 5. Es un índice aditivo construido a partir de los indicadores de tortura, ejecuciones extrajudiciales, encarcelamientos políticos, y desapariciones. Varía entre 0 (ningún respeto del gobierno para estos cuatro derechos) a 8 (respeto total) (Cingranelli y Richards, 2008). Finalmente, el tercer indicador es el Índice de Empoderamiento. También tomado del proyecto CIRI, es un índice aditivo construido a partir de los indicadores de libertad de movimiento extranjero, libertad de movimiento interno, libertad de Expresión, libertad de asociación, los derechos de los trabajadores, autodeterminación electoral y libertad de Culto. El índice varía entre el 0 –ningún respeto de parte del gobierno- y el 14 –respeto total de parte del gobierno a estos 7 derechos (Cingranelli y Richards, 2008). Éste se muestra en la Figura 6 (ver Anexo I para mayor detalle).



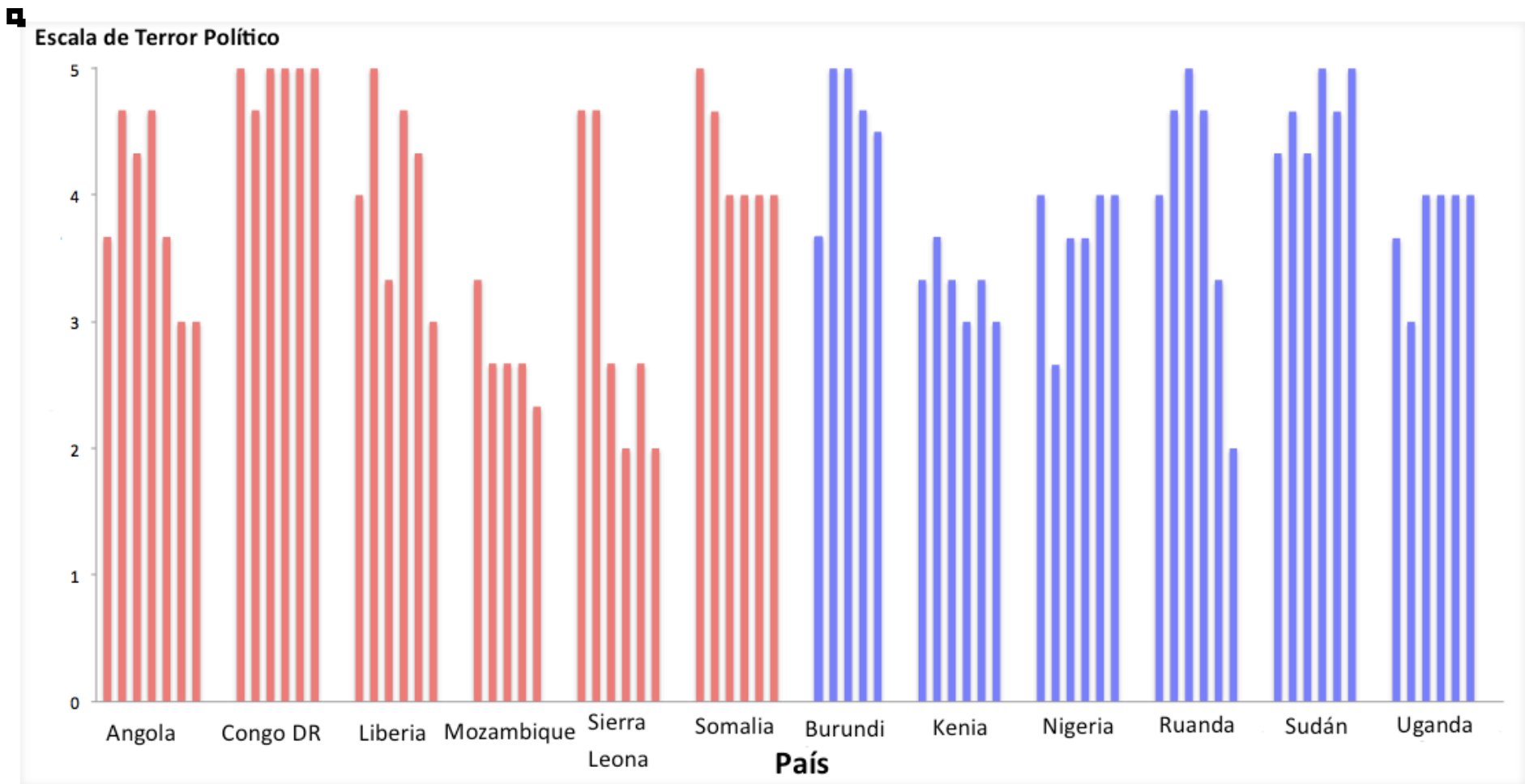


FIGURA 4. Situación político-social: Escala de Terror Político (rojo: intervenidos; azul: no intervenidos)
 Fuente: Elaboración propia con datos de Gibney, Cornett y Wood (2011).

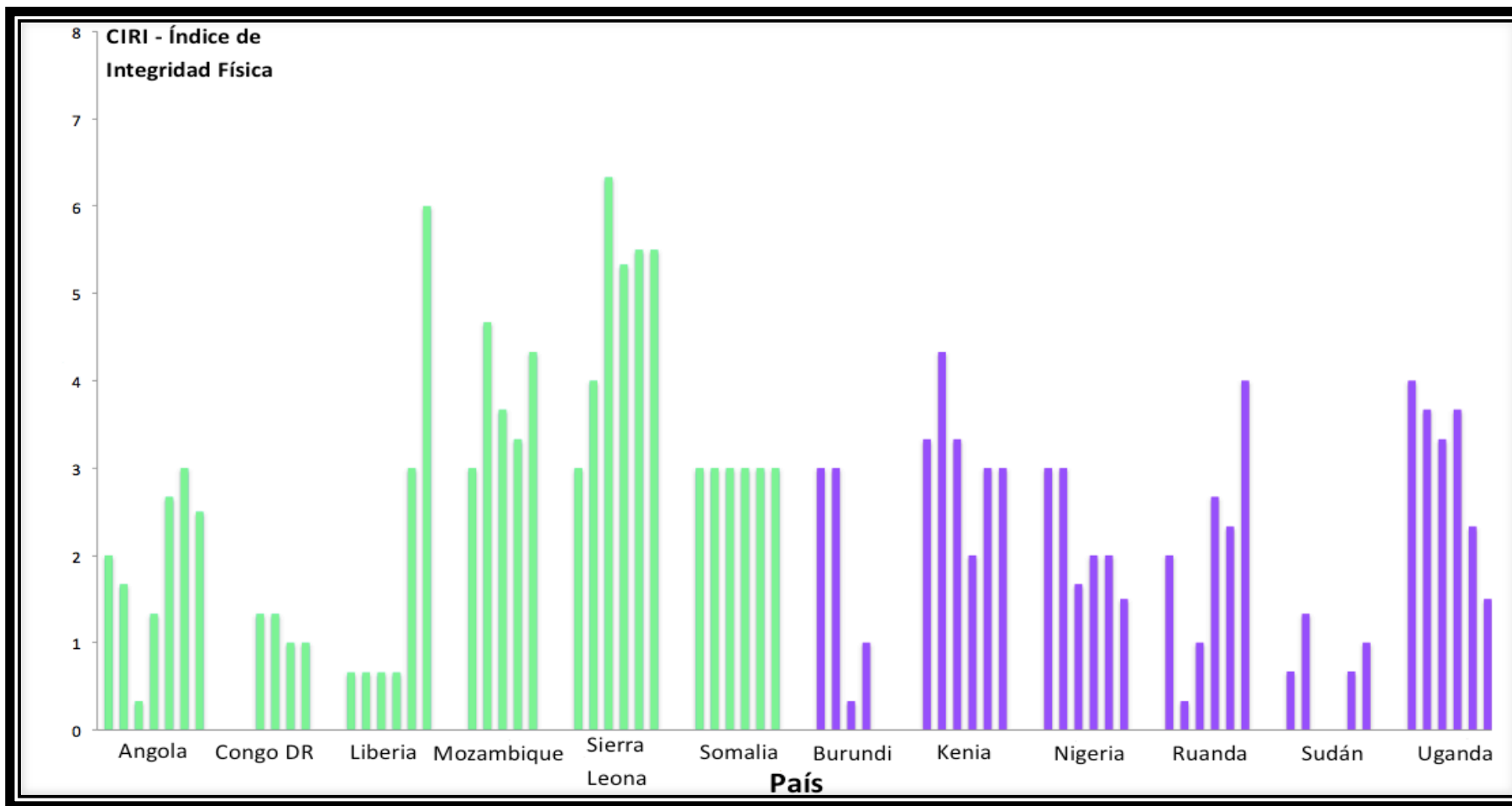


FIGURA 5. Situación político-social: Índice de Integridad Física (verde: intervenidos; violeta: no intervenidos)
 Fuente: Elaboración Propia con datos de Cingranelli y Richards (2008).

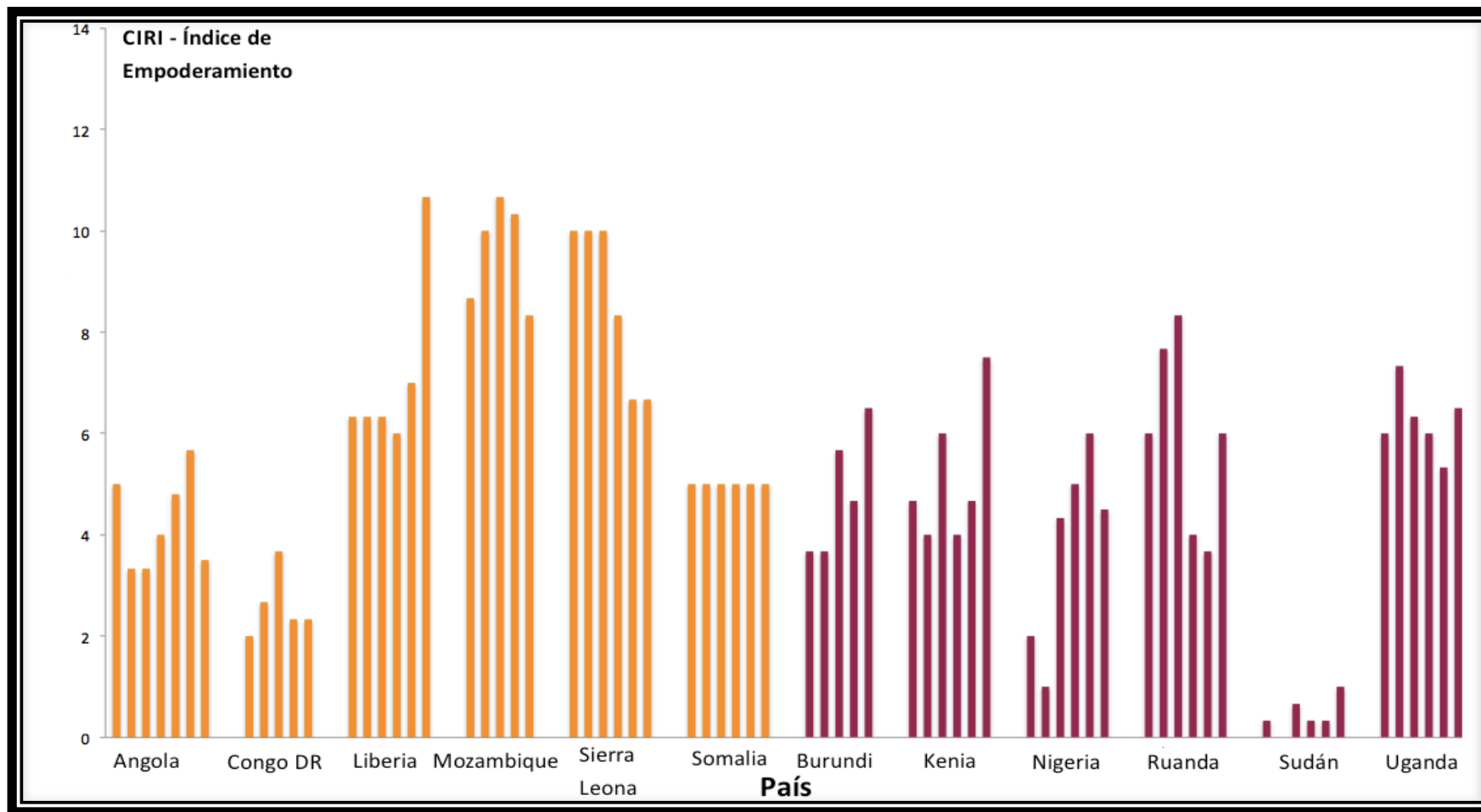


FIGURA 6. Situación político-social: Índice de Empoderamiento (naranja: intervenidos; bordó: no intervenidos)
 Fuente: Elaboración propia con datos de Cingranelli y Richards (2008).

Antes de explorar las hipótesis correspondientes a esta sección, vale la pena volver a utilizar la base de datos del capítulo anterior y examinar qué ocurre si se crea un término de interacción entre la variable IMH y la *dummy* de región para África Sub-Sahariana. Los resultados obtenidos son los expuestos en la Tabla 8.

Cabe señalar que no sólo en este caso, sino también para el testeo de las tres hipótesis correspondientes a la región de la cual se ocupa este capítulo, se siguió la misma metodología que en la sección anterior. En primer lugar, se corrió un modelo con efectos aleatorios, incluyendo todas las variables de control expuestas en el capítulo II (Modelo I). Sin embargo, dado el supuesto restrictivo de dicha metodología, se decidió también emplear la técnica de efectos fijos (Modelo II) –que arroja estimadores insesgados a partir de que captura todos los factores que están fijos en el tiempo para cada país y que afectan a la variable dependiente (Wooldridge, 2003). Más aun, se corrieron dos modelos retrasados de la variable independiente, tanto con efectos aleatorios (Modelo III), como con efectos fijos (Modelo IV). Y, por último, se corrió un modelo retrasado de la variable dependiente (Modelo V).

TABLA 8
Modelos para el testeo de la interacción entre IMH y África Sub-Sahariana

	(Modelo I) Polity2	(Modelo II) Polity2	(Modelo III) Polity2	(Modelo IV) Polity2	(Modelo V) Polity2
IMH	-1.423 (1.263)	-1.524 (1.127)	-0.700 (0.683)	-0.918 (0.650)	0.224 (1.265)
IMH*África Sub-Sahariana	2.202 (1.531)	2.392* (1.427)			-0.0841 (1.519)
PBI per cápita	-2.71e-05 (1.83e-05)	-5.88e-05*** (2.13e-05)	-1.72e-05 (1.74e-05)	-3.57e-05* (2.03e-05)	-1.83e-05 (2.56e-05)
Rentas petroleras y mineras	-2.625** (1.091)	-0.998 (1.172)	-2.597** (1.073)	-1.016 (1.156)	-0.392 (1.177)
Calidad de vida	2.389*** (0.454)	1.308** (0.578)	2.473*** (0.492)	1.432** (0.637)	0.593 (0.717)
Alfabetización	0.482* (0.274)	0.525* (0.283)	0.412 (0.282)	0.488* (0.291)	0.0956 (0.357)
Fragmentación étnica	-4.774** (2.233)		-4.456* (2.334)		
Fragmentación lingüística	1.782 (2.123)		1.875 (2.220)		
Fragmentación religiosa	-0.141 (1.630)		0.605 (1.710)		
Sudeste Asiático	-3.509*** (1.263)		-3.575*** (1.321)		
América Latina y el Caribe	1.129 (1.247)		1.080 (1.304)		
Medio Oriente y Norte de África	-10.90*** (1.223)		-11.13*** (1.301)		
Europa del Este y Asia Central	-2.084** (1.042)		-2.296** (1.091)		
Asia (Sur)	-2.037 (1.726)		-2.631 (1.807)		
LIMH*África Sub-Sahariana			2.185** (0.868)	1.898** (0.862)	
L.Polity2					0.483*** (0.0891)
Constante	6.626*** (1.200)	2.858*** (0.253)	7.139*** (1.318)	4.333*** (0.397)	2.184*** (0.328)
Observaciones	783	822	655	688	543
R-cuadrado		0.163		0.135	
Número de países	135	143	134	142	140

Error estándar entre paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Como se observa en la Tabla 8, el coeficiente de interacción es estadísticamente significativo para el Modelo II y para los Modelos III y IV. En lo que refiere al Modelo II, éste es positivo y significativo al 10%; en particular, si una IMH tiene lugar en África Sub-Sahariana, el puntaje de Polity2 aumenta en 2,39 puntos en el mismo período, controlando por otros factores. Este resultado es de capital relevancia; pues en la sección anterior se había llegado a la conclusión de que las IMHs sí tienen un impacto

sobre la democracia del país intervenido; mas este impacto resulta posible de ser observado en un período posterior –para esta investigación, el tiempo es de cuatro años. Sin embargo, lo que sugiere el coeficiente obtenido para el Modelo II –contrariamente a las sospechas comunes- es que, en África Sub-Sahariana, el efecto democratizador de la IMH es más inmediato. A su vez, en los Modelos III y IV, el coeficiente de interacción resultó ser asimismo positivo y significativo al 5% –y de similar magnitud. De esta manera, una IMH en África Sub-Sahariana en $t-1$ logra aumentar el nivel de Polity2 en t en 2,19 puntos, y en 1,90 puntos para el Modelo III y IV respectivamente. Dada la indicación acerca de la metodología de efectos aleatorios (ver nota al pie 12), se llevó acabo el Test de Hausman y éste confirmó que el estimador de efectos aleatorios es no sólo eficiente, sino también insesgado (ver Anexo III).

A continuación, se expondrán los resultados obtenidos para las tres hipótesis propuestas para esta región. Es importante señalar que, como se expuso en el capítulo II, se utilizaron dos indicadores para medir la trayectoria democrática de un Estado particular: Polity2 y el Índice de Gobernabilidad (a partir de los indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial)¹⁶. En cuanto a la hipótesis 2, que supone que una IMH mejorará la trayectoria democrática del país intervenido, *vis-à-vis* los casos de no intervención, los resultados obtenidos utilizando el indicador de Polity2 son los que exhiben en la Tabla 9.

¹⁶ Con el propósito de hacer más específico y detallado el análisis, se sumaron nuevos indicadores, relacionados a la infraestructura y la comunicación. Desafortunadamente, aquellos concernientes a la calidad de vida y la alfabetización no pudieron emplearse por falta de datos para la muestra.

TABLA 9
Modelos para el testeo de la hipótesis 2 (indicador Polity2)

	(Modelo I) Polity2	(Modelo II) Polity2	(Modelo III) Polity2	(Modelo IV) Polity2	(Modelo V) Polity2
IMH	2.511* (1.482)	-0.0318 (1.750)			1.485 (1.560)
Log PBI	-1.455*** (0.481)	-1.207 (1.780)	-1.571*** (0.456)	-1.648 (1.568)	-0.348 (1.580)
Razón entre la participación del 1 ^{er} percentil y el 5 ^o percentil en el PBI	-0.297 (0.185)	-0.366 (0.285)	-0.235 (0.171)	-0.775 (0.509)	-1.256*** (0.441)
Rentas petroleras y mineras	-0.875 (1.924)	-0.491 (2.782)	-1.827 (1.821)	-2.264 (2.542)	-0.526 (2.156)
Población urbana	0.199* (0.120)	-0.0298 (0.272)	0.174 (0.109)	-0.180 (0.260)	-0.303 (0.236)
Usuarios de Internet	-0.0568 (0.201)	0.218 (0.222)	-0.0904 (0.167)	0.130 (0.186)	0.158 (0.190)
Rutas pavimentadas	0.171 (0.142)	0.992 (0.848)	0.208 (0.128)	1.751* (0.886)	1.230 (0.830)
Fragmentación étnica	-31.36*** (7.828)		-45.48*** (7.435)		
Fragmentación lingüística	27.25*** (9.315)		40.59*** (9.112)		
Fragmentación religiosa					
Población musulmana	-0.213** (0.0924)		-0.224*** (0.0817)		
Colonia GB	4.528** (1.894)		4.569*** (1.608)		
L.IMH			3.865*** (1.352)	1.898 (1.473)	
L.Polity2					0.188 (0.197)
Constante	26.86*** (9.673)	13.70 (40.76)	42.83*** (9.847)	34.53 (40.29)	10.91 (38.89)
Observaciones	58	64	49	54	43
R-cuadrado		0.585		0.643	
Número de países	10	11	10	11	11

Error estándar entre paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Según los resultados presentados en la Tabla 9, la hipótesis se puede confirmar para dos de los modelos: el I y el III. El cuanto al Modelo I, de efectos aleatorios, el coeficiente para la variable IMH es positivo y significativo al 10%. En este sentido, en presencia de una IMH, el puntaje de Polity2 aumenta en 2,5 puntos, controlando por otros factores. Nuevamente, el Test de Hausman permitió confirmar que el estimador de

efectos aleatorios es eficiente e insesgado (ver Anexo III). En coincidencia con las conclusiones a las cuales se arribó con los resultados de la Tabla 8, los resultados de la hipótesis 2 –utilizando el indicador de Polity2- parecieran continuar en la misma línea. Es decir, pareciera que el efecto de la IMH sobre la democratización del país intervenido en África Sub-Sahariana es más inmediato. Por otro lado el coeficiente del Modelo III es también positivo y significativo al 1%. Por lo tanto, una IMH en África Sub-Sahariana en $t-1$ logra aumentar el nivel de Polity2 en t en 3,87 puntos, controlando por los demás factores. En lo que refiere a este modelo, el Test de Hausman también permitió confirmar que el estimador eficiente e insesgado (ver Anexo III). Este resultado se puede interpretar en línea con el obtenido en el Modelo I: si bien el efecto *democratizador* parece ser inmediato (es decir, en un período menor a tres años), cuando se observa dicho efecto en un período mayor a tres años, el impacto es aún superior. Para terminar, los coeficientes correspondientes a las variables de población urbana, fragmentación étnica, población musulmana y colonia británica observan la dirección esperada. Llama la atención el coeficiente positivo de la variable de fragmentación lingüística.

Tal como fue mencionado, la hipótesis 2 se testeó asimismo con el Índice de Gobernabilidad como indicador para la variable trayectoria democrática del Estado. Los resultados obtenidos utilizando dicho indicador son los que exhiben en la Tabla 10. De acuerdo con los resultados expuestos en la Tabla 10, desafortunadamente no se pueden extraer conclusiones para la hipótesis testeada con este indicador, pues ninguno de los coeficientes para la variable IMH son significativos en términos estadísticos. Esto probablemente obedezca a la ambición detrás de este índice, pues sus indicadores son muy estrictos. Por lo tanto, no se procederá a testear el resto de las hipótesis con este indicador.

TABLA 10
Modelos para el testeo de la hipótesis 2 (indicador Índice de Gobernabilidad)

	(Modelo I) Índice de Gobernabilidad	(Modelo II) Índice de Gobernabilidad	(Modelo III) Índice de Gobernabilidad	(Modelo IV) Índice de Gobernabilidad	(Modelo V) Índice de Gobernabilidad
IMH	0.181 (0.207)	0.0625 (0.188)			0.198 (0.269)
Log PBI	-0.486*** (0.0673)	-0.269 (0.191)	-0.442*** (0.0761)	-0.272 (0.229)	-0.0852 (0.254)
Razón entre la participación del 1 ^{er} percentil y el 5 ^{to} percentil en el PBI	0.0586** (0.0258)	0.000458 (0.0305)	0.0752*** (0.0286)	-0.0267 (0.0742)	-0.0140 (0.0704)
Rentas petroleras y mineras	-0.850*** (0.269)	-0.423 (0.298)	-1.122*** (0.303)	-0.578 (0.371)	-0.486 (0.335)
Población urbana	-0.0137 (0.0168)	0.0489 (0.0292)	-0.0192 (0.0182)	0.0545 (0.0379)	0.0511 (0.0376)
Usuarios de Internet	-0.0774*** (0.0281)	-0.0588** (0.0238)	-0.0723*** (0.0278)	-0.0478* (0.0271)	-0.0264 (0.0324)
Rutas pavimentadas	0.113*** (0.0199)	-0.0541 (0.0910)	0.102*** (0.0214)	-0.0377 (0.129)	-0.00243 (0.127)
Fragmentación étnica	-12.15*** (1.095)		-11.96*** (1.239)		
Fragmentación lingüística	13.61*** (1.303)		13.70*** (1.519)		
Fragmentación religiosa					
Población musulmana	-0.0458*** (0.0129)		-0.0413*** (0.0136)		
Colonia GB	1.185*** (0.265)		1.101*** (0.268)		
L.IMH			0.289 (0.225)	0.147 (0.215)	
L.Gobernabilidad					0.504 (0.346)
Constante	7.759*** (1.353)	5.300 (4.373)	8.864*** (1.641)	6.410 (5.873)	1.014 (6.568)
Observaciones	58	64	49	54	43
R-cuadrado		0.655		0.609	
Número de países	10	11	10	11	11

Error estándar entre paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Con respecto a la hipótesis 2.2, ésta suponía que una IMH, en países con un PBI más alto y un mayor porcentaje de participación de la clase media en el ingreso, mejore aún más su trayectoria democrática, *vis-à-vis* los casos de no intervención. En este sentido, para explorar la relación entre el grado de desarrollo de un país y su nivel de

democracia en la región, se llevaron a cabo dos correlaciones –una para el indicador PBI y otra para el de Razón entre la participación del primer percentil y el quinto percentil en el PBI. La Figura 7 expone la correlación entre el nivel de Polity2 y el PBI. Según se observa, no parece haber una correlación fuerte entre ambos –incluso, luce cercana a 0 (el coeficiente de Pearson es -0,0299).

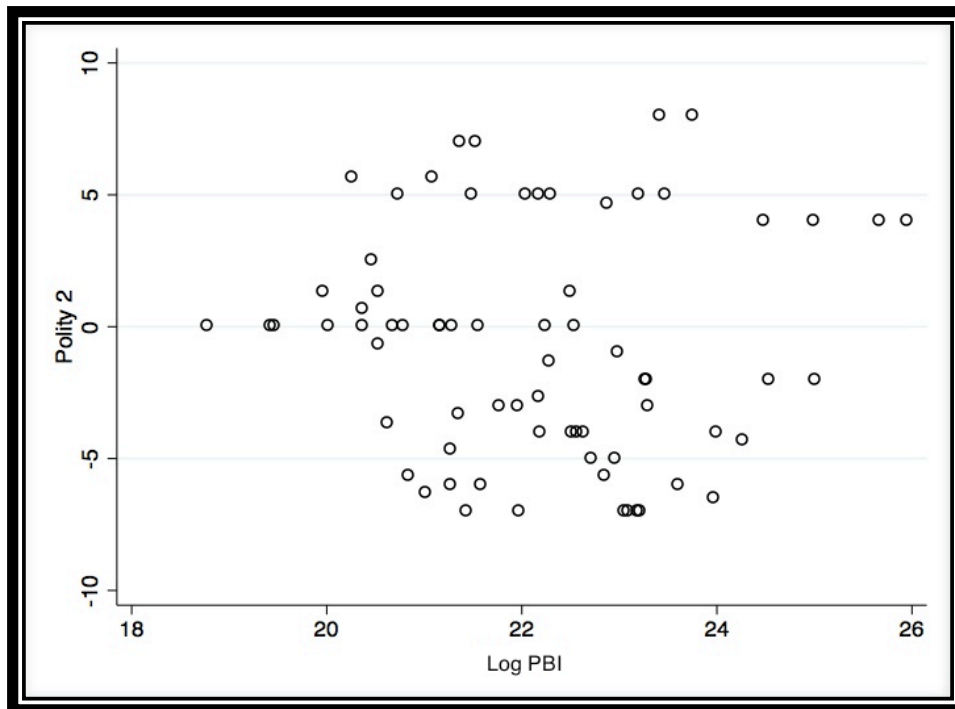


FIGURA 7. Correlación entre Polity2 y el PBI para la región de África Sub-Sahariana
Fuente: Elaboración propia con datos de Marshall, Jagers y Gurr (2010) y el Banco Mundial

Por su parte, la Figura 8 da cuenta de la correlación entre Polity2 y la participación de la clase media en la economía. Como se observa, la correlación es también muy débil, cercana al cero, aunque ligeramente negativa (el coeficiente de Pearson es -0,0967).

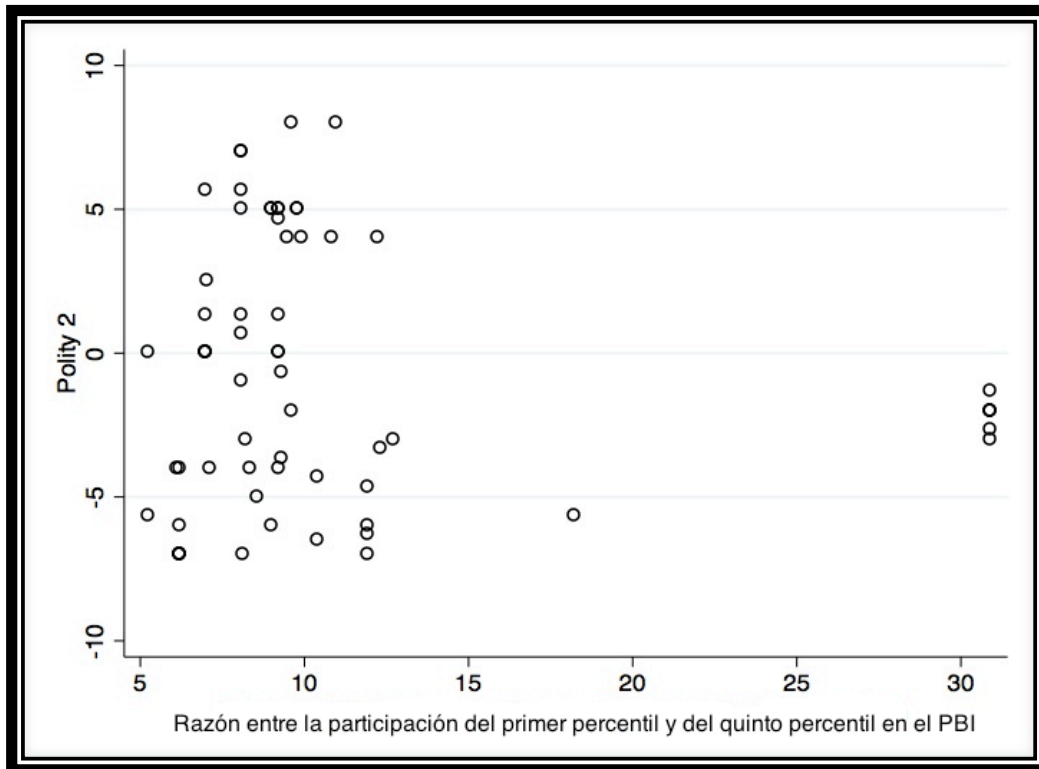


FIGURA 8. Correlación entre Polity 2 y la participación de la clase media en la economía
Fuente: Elaboración propia con datos de Marshall, Jaggers y Gurr (2010) y el Banco Mundial

En este sentido, luego de explorar la flaqueza de las correlaciones, se esperaría que los resultados obtenidos para la hipótesis 2.2, aquellos que se observa en la Tabla 11, la rechacen. Efectivamente, como se observa en la Tabla 11, los Modelos II, III y IV son significativos estadísticamente al 10%, 1% y 10% respectivamente¹⁷. Sin embargo, a diferencia de lo esperado en una primera etapa teórica mas en coincidencia con lo recién expuesto, el coeficiente de la interacción es cero –controlando por los demás factores. Es decir, el hecho de que el país intervenido tenga o no un PBI más alto, o que la participación de la clase media en el ingreso sea mayor o menor no tiene ningún efecto en lo que respecta a su democratización. En este sentido, parecería que para que la IMH surta los efectos democratizadores que se propone, su la esfera económica no le es de gran ayuda.

¹⁷ En lo que respecta al Modelo III, el Test de Hausman no permitió confirmar que el estimador sea insesgado (ver Anexo III).

TABLA 11
Modelos para el testeo de la hipótesis 2.2 (indicador Polity2)

	(Modelo I) Polity2	(Modelo II) Polity2	(Modelo III) Polity2	(Modelo IV) Polity2	(Modelo V) Polity2
IMH	-1.183 (2.125)	-1.906 (1.945)	-3.800* (1.975)	0.621 (1.662)	0.00544 (1.877)
IMH*PBI*Razón entre la participación del 1 ^{er} percentil y el 5 ^{to} percentil en el PBI	0 (0)	0* (0)			0 (0)
Rentas petroleras y mineras	-5.646*** (1.852)	0.411 (2.104)	-12.58*** (3.124)	-5.837 (5.271)	-0.408 (1.708)
Población urbana	0.0972* (0.0505)	0.200 (0.290)	0.146*** (0.0565)	0.0802 (0.306)	-0.0703 (0.327)
Usuarios de Internet	0.212 (0.213)	0.157 (0.204)	0.440** (0.214)	-0.0535 (0.190)	-0.0487 (0.193)
Rutas pavimentadas	-0.244*** (0.0901)	0.677 (0.805)	-0.318*** (0.104)	1.942** (0.881)	1.203 (0.896)
Fragmentación étnica					
Fragmentación lingüística					
Fragmentación religiosa	23.28*** (8.735)		36.10*** (9.998)		
Población musulmana	0.0108 (0.0496)		0.0285 (0.0552)		
Colonia GB	-3.214 (2.302)		-5.361** (2.582)		
L.IMH*PBI* Razón entre la participación del 1 ^{er} percentil y el 5 ^{to} percentil en el PBI			1.11e-10***	6.78e-11*	
L.Polity2			(0)	(0)	0.166 (0.218)
Constante	-17.10*** (4.657)	-19.08 (12.60)	-19.25*** (6.714)	-22.89 (16.67)	-10.79 (17.47)
Observaciones	64	64	53	53	43
R-cuadrado		0.602		0.647	
Número de países	11	11	11	11	11

Error estándar entre paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

La hipótesis 2.3 aseveraba que una IMH, en países con una estructura de la economía orientada hacia la exportación de petróleo y minerales, iba a evidenciar un efecto mermado en la evolución de la trayectoria democrática de un país, *vis-à-vis* los casos de no intervención. Al igual que con la hipótesis anterior, se llevó adelante una correlación entre la variable Rentas petroleras y mineras y el nivel de Polity2 como

indicador para la variable Trayectoria democrática de un Estado. Dicha correlación se expone en la figura 9.

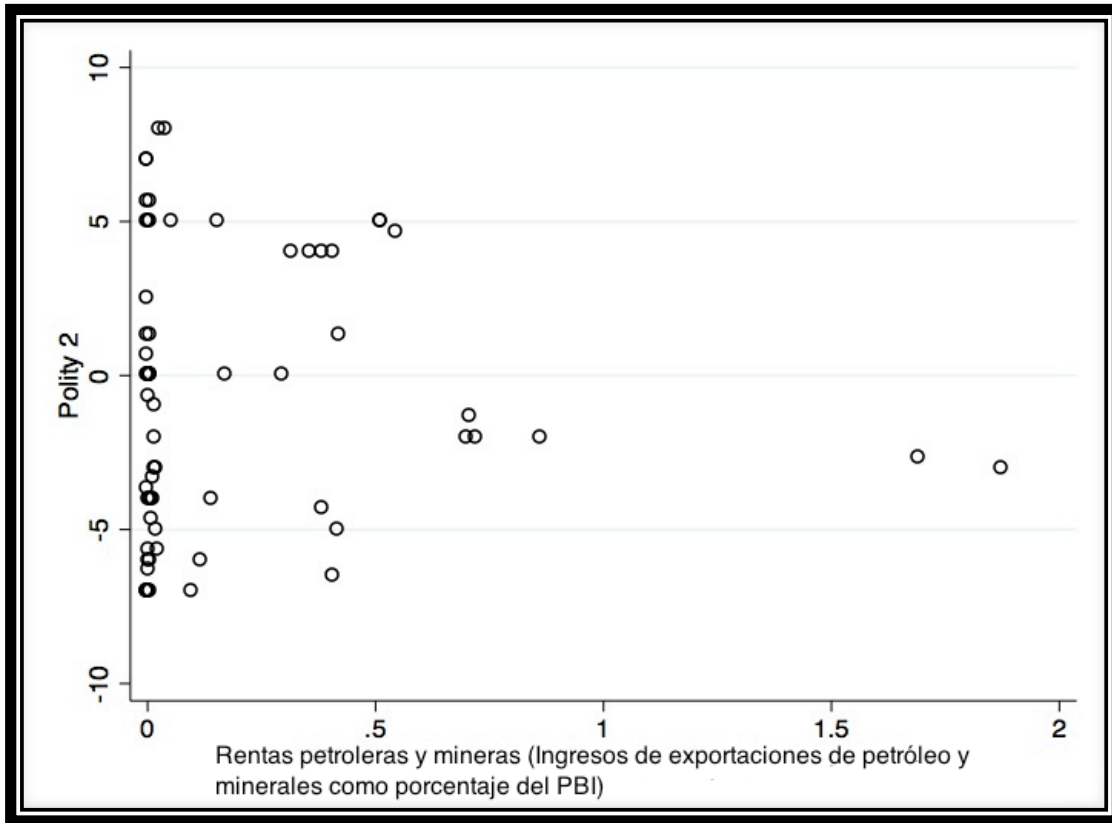


FIGURA 9. Correlación entre Polity 2 y Rentas petroleras y mineras
Fuente: Elaboración propia con datos de Marshall, Jaggers y Gurr (2010), el Banco Mundial y la OMC.

Según se observa en la Figura 9, la correlación entre las dos variables es sumamente endeble, aunque tiene una inclinación negativa (el coeficiente de Pearson es $-0,0034$). En apoyo a la conjetura propuesta, hay más observaciones en el sector que corresponde a los valores negativos de Polity2. A su vez, en detrimento de la muestra, hay algunos *outliers* distribuidos de manera no uniforme; con lo cual, puede ocurrir que el estimador sobre-pondere estos valores anómalos, afectando tanto los parámetros estimados, como el modelo en su totalidad. La Tabla 12 expone los resultados para el testeo de la hipótesis 2.3.

TABLA 12
Modelos para el testeo de la hipótesis 2.3 (indicador Polity2)

	(Modelo I) Polity2	(Modelo II) Polity2	(Modelo III) Polity2	(Modelo IV) Polity2	(Modelo V) Polity2
IMH	1.929 (1.678)	-0.854 (1.884)	3.930*** (1.445)	1.181 (2.177)	1.310 (1.676)
IMH*Rentas petroleras y mineras	1.060 (2.118)	2.601 (2.367)			0.458 (1.853)
Log PBI	-1.549*** (0.450)	-0.468 (1.453)	-1.909*** (0.417)	-0.784 (2.110)	0.0927 (1.173)
Razón entre la participación del 1 ^{er} percentil y el 5 ^{to} percentil en el PBI	-0.348** (0.177)	-0.330 (0.276)	-0.394** (0.184)	-0.723 (0.520)	-1.255*** (0.441)
Población urbana	0.201* (0.120)	0.0456 (0.277)	0.249** (0.123)	-0.222 (0.267)	-0.307 (0.247)
Usuarios de Internet	-0.0381 (0.199)	0.204 (0.218)	-0.223 (0.172)	0.0794 (0.245)	0.142 (0.190)
Rutas pavimentadas	0.177 (0.141)	0.909 (0.836)	0.348** (0.154)	1.846* (0.947)	1.371* (0.825)
Fragmentación étnica	-31.38*** (7.824)		-48.84*** (7.585)		
Fragmentación lingüística	27.42*** (9.309)		41.12*** (9.183)		
Fragmentación religiosa					
Población musulmana	-0.218** (0.0920)		-0.301*** (0.0950)		
Colonia GB	4.798*** (1.853)		6.016*** (1.734)		
L.IMH*Rentas petroleras y mineras			0.431 (1.541)	0.315 (2.505)	
L.Polity2					0.205 (0.204)
Constante	29.14*** (8.857)	-3.889 (34.26)	51.19*** (9.149)	13.16 (53.35)	-0.413 (30.08)
Observaciones	58	64	49	54	43
R-cuadrado		0.597		0.625	
Número de países	10	11	10	11	11

Error estándar entre paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

De acuerdo a lo expuesto en la Tabla 12, los resultados obtenidos son poco afortunados, puesto que no se pueden extraer conclusiones acerca de esta hipótesis. Ninguno de los coeficientes de la interacción entre IMH y Rentas petroleras y mineras son significativos en términos estadísticos.

A continuación, se presentan a modo de resumen, los resultados obtenidos en el análisis empírico.

Hipótesis	¿Se confirma la hipótesis?
Nivel regional	
Es de esperar que una intervención militar humanitaria mejore la trayectoria democrática del país intervenido, vis-à-vis los casos de no intervención.	Sí, pero sólo para el indicador de Polity2
Es de esperar que una intervención militar humanitaria, en países con un PBI más alto, un mayor porcentaje de participación de la clase media en el ingreso, mejore aún más su trayectoria democrática, vis-à-vis los casos de no intervención.	No. El impacto de la interacción es nulo.
Es de esperar que una intervención militar humanitaria, en países con una estructura de la economía orientada hacia la exportación de petróleo y minerales, evidencie un efecto mermado en la evolución de la trayectoria democrática de un país, vis-à-vis los casos de no intervención.	No se puede confirmar o rechazar

TABLA 13. Resumen de hipótesis y resultados para el nivel regional

A partir de lo expuesto en la sección se pueden extraer una serie de conclusiones. En primer lugar, el efecto de la IMH sobre la democratización existe y es positivo. En segundo lugar, a diferencia de lo que ocurre a nivel mundial, este efecto es más inmediato, es decir, se puede evidenciar en un período de tres años o menos, a partir de que se inició la intervención (e independientemente de su duración). En tercer lugar, el hecho de que una IMH se despliegue en un país con un PBI más alto o con una mayor participación de la clase media en el ingreso total, no tiene ningún efecto sobre la democratización de dicho país. Una posible explicación para este resultado contradictorio con las conjeturas iniciales puede ser que, en lo que respecta a los países intervenidos en esta región, su PBI ya es bajo de por sí bajo, en comparación con el resto

del mundo. Con lo cual, no se puede contar con esta variable como una aliada de la IMH. Así, es posible conjeturar que las socias de la IMH son las variables de corte político.

Para finalizar esta sección, se presenta, a modo ilustrativo, la trayectoria democrática para los doce países de la muestra¹⁸.

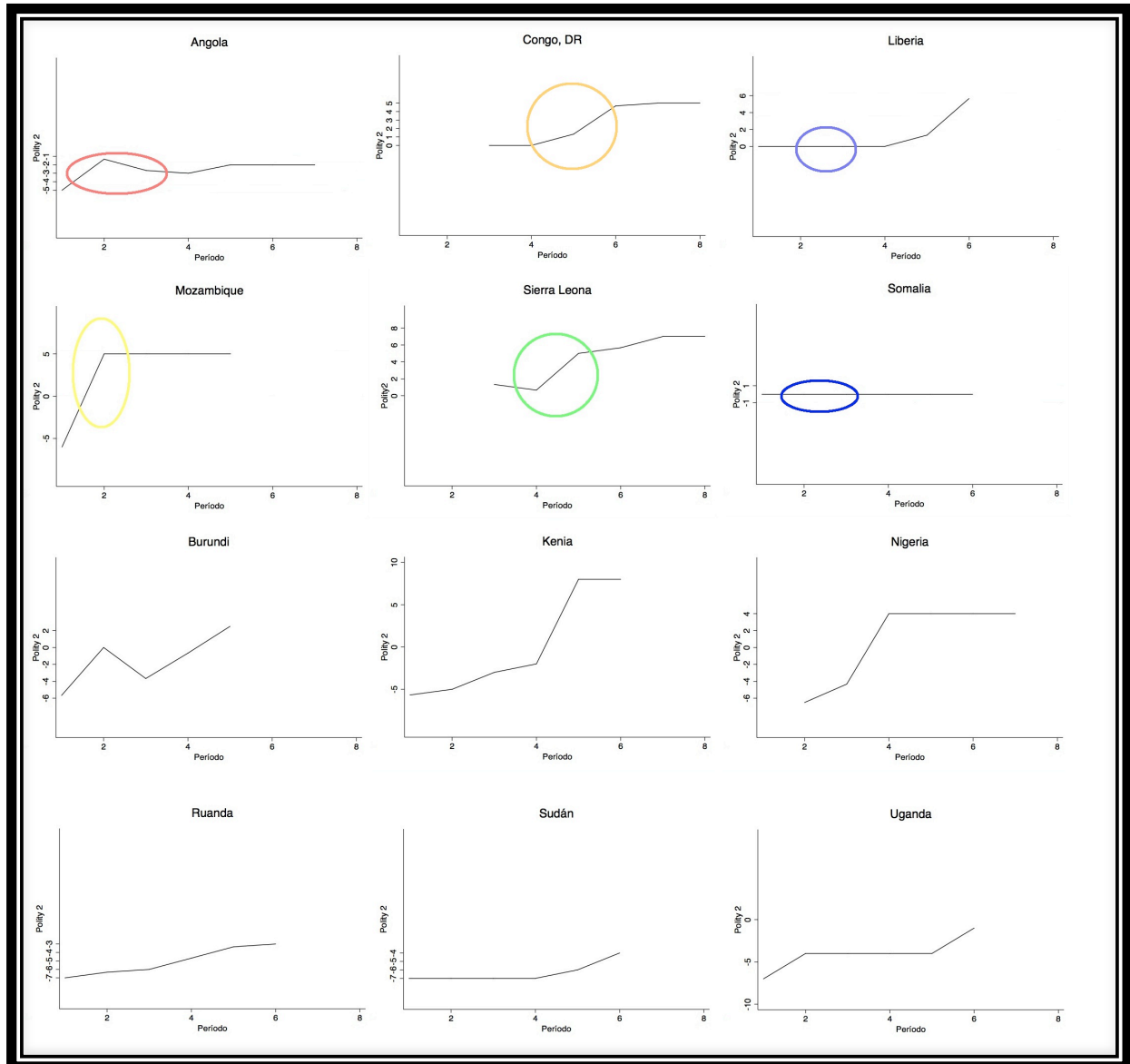


FIGURA 10. Trayectoria democrática para los países de la muestra regional (indicador: Polity2). Fuente: Elaboración propia con datos de Marshall, Jagers y Gurr (2010).

¹⁸ Los círculos en color ilustran el período en el que se llevó acabo la IMH

MOZAMBIQUE: 1990-2004

*"(...) a leadership committed to peace
is a necessary ingredient for any
successful peace process."*

Bartoli, 1999

A partir de los resultados obtenidos en las secciones precedentes, el objetivo de este capítulo yace en poder desmenuzar la conexión existente entre la presencia de una intervención militar humanitaria y una trayectoria democrática favorable, así como también explicar cómo opera dicho vínculo.

Mozambique puede ser concebido como miembro de un selecto club de países africanos, cuyo denominador común radica en una trayectoria acentuada hacia la consolidación de las instituciones democráticas de sus socios (Rakner, Menocal y Fritz, 2007). Durante la década de 1980, dicha consolidación era un escenario impensado tanto para las fuerzas políticas locales como para la comunidad internacional (IISS, 1994; Bekoe, 2008). Así, una de las condiciones necesarias –mas no suficientes– para el mencionado fortalecimiento, residió en el logro de la paz y la reconciliación del pueblo mozambiqueño. En lo que respecta a esta tarea, la ONU jugó un papel protagónico: "The UN operation in Mozambique (...) of December 16, 1992, was one of the most ambitious, multifaceted missions undertaken by the UN up to that time" (Ajello y Wittmann, 2004: 437). Dicho cometido resultó de una robustez inusitada: casi dos décadas después de firmado el acuerdo de paz y retiradas las tropas de Naciones Unidas, Mozambique observa una cotidianeidad dominada por la ausencia de guerra. Más aún, en cuanto a su

progreso en materia política, “The regularity of the political process also points to signs of stability” (Bekoe, 2008: 25). Con lo cual, resulta interesante preguntarse: ¿cómo es que la IMH en Mozambique sirvió como plataforma para la transición y posterior consolidación democrática del país? Con el propósito de poder proporcionar una respuesta a este interrogante, se hará un recorrido de la historia del país entre fines de la década de 1980 y mediados de los 2000, poniendo el foco en la dimensión política.

Situación antecedente: orígenes del conflicto

En el año 1975, Mozambique logró su independencia de Portugal. El gobierno portugués le entregó el poder a la fuerza política Frelimo (Frente de Liberación de Mozambique), obviando la celebración de elecciones libres y justas como requisito para la legitimidad de la transición hacia la autonomía del país africano. El proyecto político de Frelimo se orientaba a la creación de un Estado socialista, al mismo tiempo que buscaba distanciarse de la posterior administración colonial, mostrándose especialmente severo con a las ex autoridades. Frente a este panorama, no se hizo esperar el surgimiento del grupo Renamo (Resistencia Nacional Mozambiqueña), liderado por Alfonso Dhlakama, que intentó explotar el descontento de dicho sector político (Bartoli, 1999). Entre 1975 y 1990, ambas fuerzas se enfrentaron en una guerra civil de naturaleza política con consecuencias devastadoras (Bartoli, 1999; Fritzsche, 2010; Reibel, 2010): “The ongoing war in Mozambique, which was already one of the world’s poorest nations, had tragic consequences for its civilian population and led to a deepening humanitarian tragedy” (Fritzsche, 2010: 8).

Hacia finales de la década de 1980, la guerra civil mozambiqueña alcanzó un *impasse* militar: ni el gobierno ni Renamo eran capaces de alcanzar la victoria a partir del uso de la fuerza. Frente a este panorama, la posibilidad de una solución de cariz

político comenzó a ganar fuerza (Lundin, 2004; Manning y Malbrough, 2009; Fritzsche, 2010)¹⁹. El arzobispo Gonçalves, junto con las iglesias católicas de Mozambique, fueron los primeros en intentar acercar al diálogo a Joaquim Chissano, líder de Frelimo, y a su rival Alfonso Dhlakama. Gracias a la relación del arzobispo con la comunidad católica romana Sant'Egido, fue ésta la que afrontó el desafío de llevar adelante una negociación entre las partes (Bartoli, 1999; Adebajo y Landsberg, 2000; Lundin, 2004). La estrategia –exitosa– de la comunidad de Sant'Egido se basó en la ardua labor de construir confianza entre ambas partes, para que pueda tener lugar el diálogo: “It was very important to build trust, not only as a psychological feeling, but also as a political and social dimension (...). Interpersonal relations are crucial to the Sant'Egido strategy of conflict resolution” (Bartoli, 1999: 263). Tras dos años de negociaciones, en 1992, los delegados de Frelimo y Renamo, firmaron, en Roma, el Acuerdo General de Paz:

The key stipulations were that (i) all armed forces were to be demobilised under United Nations supervision and a small portion of them incorporated into the new 30,000 strong armed forces; and (ii) presidential and parliamentary elections were to be held before 4 October, also under UN supervision. (Lundin, 2004: 12)

La relevancia de esta primera etapa, anterior al despliegue y montaje de la IMH en Mozambique es notable. Principalmente, porque evidencia un grado de compromiso de largo plazo significativo, tanto con la paz, como con la democracia, de parte de las fuerzas políticas de relevancia local, y de la comunidad extranjera. Como se verá más

¹⁹ “In Mozambique the most surprising thing about its war was the way it ended. (...) Renamo began as a guerrilla force without social or political ideology, but it generated murderous chaos with gangs of outlaws living by the gun, killing, stealing and destroying as they went. Millions became hungry and destitute and large areas of Mozambique returned to the Iron Age without schools, clinics or roads. However, when the cease-fire was announced, Renamo stopped fighting and the war stopped. The gangs had not been out of control, and the savagery and chaos had been directed and controlled.” (IISS, 1994: 205)

adelante, dicha voluntad política estuvo presente no sólo en la etapa antecedente a la IMH, sino también durante ésta, y fue capitalizada por los principales actores.

La Intervención Militar Humanitaria: ONUMOZ.

El Acuerdo General llamaba a la participación de la ONU en Mozambique. Si bien ésta no había sido un partícipe activo del proceso de negociación, “(...) it quickly became involved when its technical expertise and political legitimacy were needed to move the Rome process forward” (Fritzsche, 2010: 13-14). A través de la resolución 797 del 16 de diciembre de 1992, el Consejo de Seguridad autorizó el establecimiento de ONUMOZ (Operación de Naciones Unidas en Mozambique). Su mandato, que se basó en el Acuerdo General de Paz, incluía cuestiones de índole política, electoral, militar y humanitaria. Con respecto al primero y el segundo, la misión pretendía actuar en calidad de guía en la transición a la democracia –en particular, el cumplimiento con la celebración de las elecciones como mecanismo para elegir a los representantes. En lo que respecta a la cuestión militar, ONUMOZ se proponía monitorear y verificar el alto al fuego, proveer seguridad a la población civil, almacenar y destruir las armas, verificar la retirada de fuerzas armadas extranjeras, y desmovilizar y reintegrar a las milicias de Frelimo y Renamo. Finalmente, en lo que refiere al aspecto humanitario del mandato, éste estaba íntimamente relacionado con la faceta militar anteriormente expuesta: “Without sufficient humanitarian aid, and especially food supplies, the security situation in the country might deteriorate and the demobilization process might stall” (UNDPI-DPKO, 2001c). En particular, este aspecto tenía un doble propósito: en primer lugar, proveer aquello que sea necesario para los soldados desmovilizados; y en segundo lugar, asistir el regreso de los refugiados y poder suplir el déficit alimentario de la población mozambiqueña tras 15 años de guerra civil (UNDPI-DPKO, 2001c).

En general, hay acuerdo en la literatura acerca del éxito de ONUMOZ como consecuencia del rol proactivo que tomó la ONU en el caso de Mozambique. (Adebajo y Landsberg, 2000; Ajello y Wittmann, 2004; Lundin, 2004; Doyle y Sambanis, 2006; Manning y Malbrough, 2009; Fritzsche, 2010). En este sentido, Doyle y Sambanis declaran:

In Mozambique, ONUMOZ appears to have stepped in to play an active, quasi-sovereign, implementing role through a variety of commissions for disarmament, elections, and humanitarian activities. ONUMOZ actually helped to organize a political party as well as to employ demobilized soldiers in building roads: a true capacity infrastructure-building effort. (2006: 325)

Esta actitud pujante se puede ver plasmada en cuatro hechos: el armado y administración de una estructura política fuerte que fuera capaz de administrar el proceso de paz; la desmovilización de las fuerzas de choque previo a las elecciones; la existencia de recursos; y la figura de Aldo Ajello, en calidad de Representante Especial del Secretario General.

En lo que respecta a la primera, la ONU creó la Comisión de Supervisión y Monitoreo (CSM). Si bien se hallaba presidida por el organismo internacional, contaba entre sus miembros a: Frelimo, Renamo, Italia, Francia, Portugal, Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos y a la Organización para la Unidad Africana. La CSM estaba encargada, en líneas generales, de la aplicación del Acuerdo, de la resolución de las posibles controversias que pudieran surgir entre las partes, y de la orientación y coordinación de las actividades de las comisiones subsidiarias. Entre éstas últimas se encontraban la Comisión de Cese al Fuego, la Comisión para la Desmovilización y Reintegración del Personal Militar, y la Comisión Conjunta para la Formación de las Fuerzas Armadas Mozambiqueñas (UNDPI-DPKO, 2001c). La importancia de la CSM es

triple para el presente análisis. Pues en primer lugar, según explica Ajello, “While the government [continued] its normal activity, the political structure [drove] and [monitored] the entire process (...)” (1999: 630). A su vez, continúa Ajello, esta estructura política contribuyó al fomento de la cooperación de las fuerzas políticas internas: “The existence of such a structure [was] essential to the confidence-building process. It [gave] parties an equal role in the decision-making process, reducing the advantage of the ruling party” (1999: 640). Finalmente, promovía el involucramiento y la colaboración de terceros partidos para la resolución del conflicto y la transición a la democracia –en calidad de un ejercicio de presión sobre Frelimo y Renamo.

Por su parte, la desmovilización de las fuerzas de choque previa a las elecciones es una de las piedras de toque al momento de explicar el éxito de la transición a la democracia a manos de ONUMOZ. Si bien en un principio el inicio de esta empresa se demoró por cuestiones de logística, el 12 de enero de 1994 se dio comienzo al proceso de desmovilización de las milicias tanto de Frelimo como de Renamo. Este proceso logró ser completado con éxito antes de las elecciones (Adebajo y Landsberg, 2000; UNDP-IPKO, 2001c; Lundin, 2004; Bekoe, 2008). Según explica Bekoe, “Both disarmament and demobilization entail the surrendering of the insurgents’ single most important bargaining chip—the armed threat. For Renamo, demobilization removed the most important weapon it had against the government” (2008: 37). Es menester comprender que, a pesar de que el desarme es uno de los objetivos estructurales de las IMH, no siempre puede llevarse a cabo. Si bien el hecho de que la ONU se encuentre en el territorio y presente una amenaza creíble en el uso de la fuerza en caso de que alguna de las partes en conflicto se niegue o incumpla con el desarme (como mencionan Walter, 1997 y Manning y Malbrough, 2009), esta asociación no debería pensarse como inmediata e infalible. En este sentido, la experiencia mozambiqueña adquiere el carácter

de prototipo, pues la actividad de desmovilización estuvo acompañada de una compensación económica para los ex combatientes, con el doble propósito de asistir a su reinserción, y de ofrecerle incentivos para que suelten las armas (Ajello, 1999).

En línea con lo anterior, ONUMOZ fue uno de los casos en los que los recursos económicos no presentaron una limitación para la consecución de la IMH: “Financial support for the peace operation in Mozambique was extensive and set precedents in the pattern of international aid for war termination” (Manning y Malbrough, 2009: 83). En primer lugar, en lo que refiere al aspecto humanitario, “Donor response to the updated humanitarian programme for 1993-1994 resulted in firm donor commitments” (UNDPI-DPKO, 2001c). Asimismo, tal como fue mencionado, se otorgaron incentivos financieros para la desmovilización y la reinserción de los soldados –con el objetivo de evitar la defeción de alguna de las partes. Y, finalmente, el dinero también se utilizó con el objetivo de reorganizar las fuerzas políticas locales. Con el propósito de institucionalizar a Renamo y ubicarlo dentro de la arena política como un competidor dentro del sistema, se creó un fondo fiduciario a su nombre para asistir a la fuerza política en su transición hacia un partido político formal (Manning y Malbrough, 2009).

Finalmente, un factor contingente en las condiciones de éxito de ONUMOZ para la democratización de Mozambique fue la figura de Aldo Ajello, Representante Especial del Secretario General (Adebajo y Landsberg, 2000; UNDP-DPKO, 2001c; Ajello y Wittmann, 2004; Morjé-Howard, 2008). El diplomático de origen italiano hizo del cumplimiento del mandato de la ONU una empresa personal; su dinamismo, su compromiso con la misión y su actitud proactiva contribuyeron notablemente a la resolución del conflicto. Ajello cultivó sus relaciones interpersonales tanto con Frelimo

como con Renamo²⁰. A su vez, Ajello “tirelessly lobbied donors to provide funds for implementing the agreement” (Adebajo y Landsberg, 2000: 168). En este sentido, había una suerte de árbitro en Mozambique funcionando a diario, conteniendo a las partes en conflicto y evitando, así, un resurgimiento de la violencia.

Transición a la democracia

El 27 de octubre de 1994 fue de gran relevancia para la historia política de Mozambique, pues fue la fecha en que se culminó de manera simbólica el trabajo realizado por parte de la IMH en cuanto a la desmovilización de las fuerzas de choque y la reorganización de las fuerzas políticas locales. Ese día abrieron los comicios en Mozambique. El evento se llevó adelante bajo la supervisión tanto de ONUMOZ, como de observadores electorales de la comunidad internacional²¹. Sin embargo, el proceso electoral no estuvo ausente de sobresaltos: el mismo 27, Dhlakama anunció su retirada de las elecciones luego de elevar acusaciones sobre irregularidades de dicho proceso. Gracias al rol mediador Aldo Ajello y Boutros-Ghali, al día siguiente revirtió su decisión. Finalmente, el 29 de octubre cerraron las urnas luego de la participación de casi el 88% de la población registrada para votar. Los resultados arrojaron la victoria del partido de Chissano con el 53.3% de los votos; por su parte, Renamo obtuvo el 33.7% de los votos. “On behalf of the United Nations, the Special Representative declared that the elections held in Mozambique from 27 to 29 October 1994 were free and fair” (UNDPI-DPKO,

²⁰ Por ejemplo, en el marco de las elecciones de 1994, Dhlakama amenazó con querer boicotear las mismas. Ajello, junto con el Secretario General, contribuyeron para revertir dicha actitud (Adebajo y Landsberg, 2000; UNDP-DPKO, 2001).

²¹ “On the eve of the elections, the international community deployed approximately 2,300 electoral observers (...). Several organizations, including OAU, the European Union and the Association of European Parliamentarians for Southern Africa, sent teams of their own electoral observers.” (UNDPI-DPKO, 2001)

2001c). Así, la elección del nuevo presidente y el establecimiento del nuevo Parlamento fueron los dos hechos que hicieron culminar ONUMOZ. La transición había ocurrido.

Consolidación de la democracia

En lo que respecta a la posterior consolidación de la democracia, si bien Mozambique es uno de los países de la región que presenta un mejor diagnóstico, esto no significa que sea una democracia que funciona de manera aceptada. Mozambique es un sistema democrático semi-presidencial; el pueblo elige directamente al presidente y éste luego designa un Primer Ministro, así como también al gabinete. El Parlamento es electo según la regla de representación proporcional. Si bien hay más de doce partidos que compiten en las elecciones, en la práctica Mozambique es un sistema bipartidista, dominado por Frelimo y Renamo (Manning, 2005). No obstante, al momento de juzgar el sistema político, se vuelve imperioso adquirir perspectiva y contemplar el corto plazo que tuvo lugar desde finalizada la guerra civil en 1990.

La próxima prueba que debió afrontar la democracia mozambiqueña fueron las elecciones de 1999. A diferencia de la holgada mayoría que había obtenido Chissano en 1994, en esta oportunidad hubo una oportunidad real para Dhlakama de acceder al poder (Manning, 2005). Sin embargo, la turbulencia alrededor del proceso electoral fue mayor: Renamo volvió a denunciar fraude, pero esta vez lanzó amenazas de separatismo, advirtiendo sus pretensiones de formar su propio gobierno con las provincias que controlaba (Freedom House, 2004). En el año 2004, se volvió a cumplir con el calendario electoral. Se llevaron a cabo las elecciones, y Frelimo nuevamente resultó victorioso –esta vez bajo la dirección de Armando Guebuza. En esta oportunidad, también hubo denuncias de fraude de parte de Renamo, pero éstas fueron “reconocidas” por la Comisión Nacional Electoral –que le ofreció al partido de Dhlakama la

transferencia de una banca de Frelimo en el parlamento a modo de compensación (Freedom House, 2004). A partir de los resultados de las subsiguientes elecciones, adquiere relevancia el interrogante que propone Manning: "Could the current state of democratic development in Mozambique support and electoral turn-over?" (2005: 243). No obstante, Morjé-Howard aboga por la estabilidad del sistema político: "Since the presidential elections monitored by ONUMOZ in 1994, there have been two subsequent rounds, in 1999 and 2004. In these presidential and parliamentary elections, the electoral machinery that had been set in place by ONUMOZ continued to function" (Morjé-Howard, 2008: 219).

Por otra parte, uno de los males que azota a la naciente democracia mozambiqueña, dificultando su florecimiento, es la corrupción y su efecto sobre el Poder Judicial: "Corruption is pervasive. [Mozambique's attorney general] cited incompetence, corruption, and abuse of power at all levels of the administration of justice, including police, attorneys, judges, lawyers, and prison personnel." (Freedom House, 2004). En lo que refiere al respeto y garantía de las libertades civiles, éstas se ven parcialmente respetadas. Si bien la libertad de prensa se encuentra garantizada por la Constitución Nacional, en la práctica el Estado controla casi todos los medios de comunicación. Por otro lado, la libertad de asociación presenta el mismo diagnóstico: se halla garantizada por la Carta Orgánica, pero limitada en la práctica. Por último, la libertad de culto se ve ampliamente respetada (Freedom House, 2004).

Para concluir, se puede extraer una reflexión general acerca de la relación entre IMH y democratización, y el funcionamiento del vínculo. La desmovilización y el desarme de las fuerzas de choque previo al inicio del proceso de transición hacia la democracia constituyen un importante mecanismo que opera en la relación entre las

dos variables. En este sentido, se le quita la capacidad militar para alterar mediante el recurso de las armas los resultados obtenidos en las urnas. Pero para que la desmovilización sea efectiva y exitosa, se requiere de la comunión de tres elementos. En primer lugar, debe existir y ser manifiesto el compromiso político de largo plazo de parte de las facciones locales en guerra. Naturalmente, la cooperación y el activismo de parte de la comunidad internacional es también necesario; sin embargo, sin la primera, la segunda es factible de tornarse irrelevante. En segundo lugar, la disponibilidad de recursos resulta crucial para poder llevar adelante la tarea de desmovilización y desarme. La conexión proviene de otorgar una compensación económica a aquellos soldados que hayan elegido dejar las armas, con el doble propósito de alterar su esquema de preferencias y evitar su defección. Finalmente, se requiere del montaje de una estructura política, administrada por la ONU pero que integre a las partes en conflicto, cuyo organigrama sea el reflejo de las principales actividades que debe cumplir la misión según su mandato –teniendo presente que la desmovilización es la prioridad. El motivo es que permite una división de tareas hacia adentro de la misión que permite volver más eficaz el trabajo. A su vez, al incorporar a las facciones protagonistas del conflicto, fomenta y retroalimenta el diálogo entre ellas.

ANGOLA: 1990 – 2009

“In politics there is no such thing as reconciliation.”

Operario de Luanda; en: Manning, 1998

Luego de examinar un caso de promoción exitosa de la democracia a partir de la presencia de una IMH, el propósito del presente capítulo consiste en identificar cuáles son los mecanismos que operan cuando la relación entre IMH y democracia es la inversa a la esperada.

El caso de Angola puede ser ubicado como una de los fracasos más rotundos de la ONU en su empresa por la promoción de paz y democracia. Lejos de haber logrado erigirse como la plataforma sobre la cual edificar la transición y la posterior consolidación de la democracia, las tres intervenciones militares humanitarias en Angola desnudaron las carencias del organismo internacional, erosionando su credibilidad. Angola es, hoy en día, uno más de los tantos países africanos que se halla en una suerte de limbo entre el autoritarismo y la democracia –regímenes que han sido llamados “híbridos”, oscureciendo aún más el debate. No obstante, antes de cargar las tintas en contra de la ONU, es menester observar la naturaleza de las fallas experimentadas, así como también someter a juicio a todos los actores involucrados en el proceso de paz que no fue. En este sentido, se han elaborado los siguientes interrogantes: ¿por qué las IMHs en Angola no lograron promover la democracia?, ¿qué lecciones se pueden extraer?, y más importante aún, ¿se identifican patrones comunes que sirvan a los efectos de recomendaciones de política estructurales? Con el objetivo de poder proporcionar una respuesta a estos interrogantes, se hará un recorrido de la

historia del país entre fines de la década de 1980 y fines de los 2000, haciendo énfasis en la dimensión política del conflicto.

Situación antecedente: orígenes del conflicto

En el año 1975, al igual que Mozambique, Angola se independizó de su metrópoli, Portugal. A diferencia del proceso mozambiqueño, en Angola no se identificaba ningún grupo con la suficiente preponderancia como para tomar el poder y hacerse cargo de la conducción autónoma del Estado. Así fue como se firmaron los Acuerdos de Alvor; éstos no sólo otorgaban la independencia a Angola, sino que también procuraron integrar a las tres fuerzas político-militares más relevantes con el objetivo de que trabajasen juntas en pos de la transición del país. Éstas eran el Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA), de orientación marxista, cuyo líder era, en sus comienzos, Agostinho Neto –quien luego le cedió el poder a José Eduardo dos Santos; la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA), fundado por Jonas Savimbi; y el Frente Nacional de Liberación de Angola (FNLA), liderado por Holden Roberto. Mas el pacto experimentó una corta vida: un mes después de su firma, las tres fuerzas se embarcaron en una larga guerra civil (Pazzanita, 1991). Rápidamente, “Angola's war became one of the prime Cold War proxy battlefields in Africa” (Manning, 1998: 164). Mientras que la ex USSR y Cuba financiaban y asistían militarmente al MPLA, Sudáfrica y Estados Unidos respaldaban a UNITA ²². De acuerdo con Morjé-Howard, la magnitud de las consecuencias del enfrentamiento fueron catastróficas:

More than 500,000 people had been killed out of a population of some 11 million; 3.5 million people were internally displaced, 300,000 were refugees, over 70,000 had become amputees (the highest per capita in the world at the time), and upwards of 10

²² El FNLA sufrió una pronta desaparición a partir de su pérdida de recursos y de apoyo diplomático. (Pazzanita, 1991; Knudsen y Zartman, 1995).

million land mines littered the country. What infrastructure had been developed under colonial rule was all but destroyed. (2008: 36-7)

Así como la dinámica de la Guerra Fría estimuló y permitió la perpetuación de la guerra civil en Angola, su fin en 1989 también generó consecuencias en el país africano, que derivaron en una alteración de las configuraciones de poder internas (Knudsen y Zartman, 1995). En primer lugar, los virajes en materia de política interna y exterior en la Unión Soviética significaron la pérdida de apoyo para el MPLA (Pycroft, 1994). En este sentido, el movimiento de dos Santos, comenzó a orientar su ideología política hacia Occidente. En segundo lugar, luego de una seguidilla de batallas entre UNITA y el MPLA sin ganadores evidentes, ambos líderes contemplaron la posibilidad de una solución política (Knudsen y Zartman, 1995: 135). El desenlace fue la inauguración de la primera ronda de negociaciones que dio lugar a los Acuerdos de Nueva York y el despliegue de UNAVEM I²³. El objetivo de esta intervención –de resultado exitoso- se reducía a la verificación de la retirada de las tropas cubanas del territorio angoleño, que habían asistido al MPLA desde 1975 (MacQueen, 1998; UNDPI-DPKO, 2000a; Paulo, 2004). No obstante, su éxito vino acompañado de una sensación de triunfalismo *express*, que tendría consecuencias en la dinámica posterior del proceso de paz. Según denuncia MacQueen,

Its success contributed to a perception of the Angolan conflict as one created and sustained essentially by external forces. Angola was seen as a 'Cold War conflict' which with the passing of the Cold War would be largely self-resolving - or resolvable with minimal external input. (1998: 401).

²³ La primera Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Angola no es considerada en este estudio como una IMH. El motivo es doble: por un lado, no sólo no se propone entre sus objetivos proveer asistencia humanitaria; y por otro lado, tampoco cuenta entre sus tareas la de promover la democracia. Por lo tanto, UNAVEM I forma parte de la etapa antecedente al despliegue de las IMHs en Angola.

La Intervención Militar Humanitaria

UNAVEM II. Con las fuerzas cubanas fuera de Angola, la comunidad internacional vislumbró una ventana de oportunidad para resolver el conflicto; Estados Unidos, Rusia, y Portugal asumieron el rol de mediadores en la negociación. En mayo de 1991, bajo los auspicios de la Troika, UNITA y el MPLA firmaron los Acuerdos de Bicesse. Éstos incluían una serie de concesiones, tanto de parte del gobierno (MPLA), como de UNITA. En particular, el acuerdo comprendía el cese del apoyo militar para ambos bandos; el desarme y la desmovilización de las tropas de MPLA y UNITA; la creación de la Fuerza Armada Nacional; la institucionalización de un sistema multipartidario; así como también disponía la creación de una Comisión Político-Militar Conjunta. A su vez, fijó el calendario para los próximos comicios, a realizarse entre septiembre y noviembre de 1992 (Knudsen y Zartman, 1995; Adebajo y Landsberg, 2000; Bekoe, 2008). No obstante la firma del pacto y el cese al fuego, los Acuerdos de Bicesse observaban una serie de vicios alarmantes que, para un país con la historia política de Angola, podían tornarse futuras fuentes de conflictividad. En primer lugar, era poco realista en los tiempos que establecía, específicamente en relación al calendario electoral (Pycroft, 1994; MacQueen, 1998). Tal como asevera Pycroft, “The election schedule left limited time for the transition from 30 years of war to peace and democracy” (1994: 249). En segundo lugar, la esencia de los acuerdos era un sistema de *winner-take-all*, a partir del cual necesariamente se crean perdedores (Knudsen y Zartman, 1995; MacQueen, 1998; Fritzsche, 2010).

Tras el cese de las hostilidades y la firma del pacto, el 30 de mayo de 1991, a través de la resolución 696, el Consejo de Seguridad estableció UNAVEM II (Segunda Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Angola). Si bien su mandato estaba

originalmente previsto para finalizar entre septiembre y noviembre de 1992, fue luego extendido hasta 1995. Entre sus objetivos y tareas se encontraban verificar el cumplimiento del acuerdo de cese al fuego firmado en Bicesse, monitorear el carácter neutral de la policía en su accionar diario, ofrecer asistencia humanitaria, y, finalmente, observar que el proceso electoral este despojado de irregularidades²⁴ (UNDPI-DPKO, 2000a). En lo que refiere al número de tropas y el financiamiento con los que contaba la misión, hay acuerdo en la literatura acerca de la carencia que experimentó UNAVEM II en términos de capital humano y financiero (Pycroft, 1994; Knudsen y Zartman, 1995; Anstee, 1996; Adebajo y Landsberg, 2000; Morjé-Howard, 2008; Fritzsche, 2010). Incluso, la Representante Especial de Secretario General, Margaret Anstee, describió su gestión en los siguientes términos: “[it was like] flying a 747 with only enough fuel for a DC3” (Paulo, 2004: 29). A su vez, UNAVEM II carecía de respaldo no material: ni las fuerzas internas ni la comunidad internacional ofrecían una cooperación robusta que contribuya a la solución del conflicto. Por un lado, ni UNITA ni MPLA cumplieron con la promesa de la desmovilización previa a las elecciones (McVey, 2003; Greenhill y Major, 2006-7; Bekoe, 2008; Fritzsche, 2010). Por el otro lado, Angola padeció la falta de interés de parte de la comunidad internacional; según sentencia Anstee: “The more influential members of the international community wanted to be shot of it as quickly and cheaply as possible” (Anstee, 1996: 190).

Entre el 29 y el 30 de septiembre de 1992 se llevaron acabo las elecciones presidenciales y legislativas. La ONU, lejos de ser la organizadora de los comicios, tenía la tarea de observar y verificar que el proceso se halle ausente de mayores irregularidades. Finalizadas las elecciones, Margaret Anstee reportó que éstas habían

²⁴ Esta última tarea fue encomendada bajo la resolución 747, que significó una extensión del mandato original.

sido libres y justas en general. Los resultados fueron los siguientes: MPLA había ganado las elecciones legislativas con el 53,74% de los votos, contra un 34,1% de UNITA. En la elección presidencial, dos Santos recibió el 49,57%, frente al 40,07% de los votos que le fueron otorgados a Savimbi. Dado que ninguno había obtenido más del 50%, una segunda ronda electoral debía ser programada (UNDPI-DPKO, 2000a). No obstante, bajo alegaciones de fraude, Jonas Savimbi anunció que desconocería los resultados de las elecciones de fines de septiembre. Así, Angola volvió a experimentar la crudeza de la guerra civil entre UNITA y el MPLA: “It has been estimated that more than 120,000 people have been killed in the 18 months of renewed fighting, almost half the number killed in the 16 years of civil war preceding the Bicesse Accords” (Knudsen y Zartman, 1995: 136).

Naturalmente, la renovación de la lucha armada convirtió a UNAVEM II en un fracaso, pues no logró verificar el mantenimiento de la paz, ni la violación de los Acuerdos de Bicesse. Por tanto, se vuelve relevante interrogarse qué fue lo que falló, a la luz de lo analizado en el caso de Mozambique. Previamente, se había llegado a la conclusión de que la desmovilización de las fuerzas de choque previo al comienzo del período de transición hacia la democracia es la piedra de toque para un resultado exitoso. Dicha actividad requiere de la conjunción de tres componentes. En primera, la ratificación de compromisos políticos de largo plazo, tanto de parte de los bandos en conflicto, así como de la comunidad internacional (a pesar de que la segunda sin la primera se vuelve irrelevante). En segundo lugar, la disponibilidad de recursos (y que éstos estén bien asignados). Y, finalmente, el montaje de una estructura política, administrada por la ONU, pero que integre a las partes en conflicto, cuyo organigrama sea el reflejo de las principales actividades que debe cumplir la misión según su mandato –teniendo presente que la desmovilización es la prioridad.

Los compromisos políticos de largo plazo, tanto de parte de la comunidad internacional como de las partes en conflicto, estuvieron ausentes en Angola. En lo que refiere a la primera, ya se hizo hincapié sobre la falta de trascendencia que se le otorgó al conflicto angoleño tanto en el Consejo de Seguridad como por las principales potencias mundiales (Anstee, 1996; Fritzsche, 2010). Pero más importante aún, ni UNITA ni el MPLA estaban interesados en la reconciliación nacional o la democratización de Angola; en particular, veían a la resolución del conflicto como un juego de suma cero, en el que las apuestas eran verdaderamente altas (Messiant, 2004). Un corolario necesario de una configuración de prioridades semejante estaba asociado a no perder la capacidad militar –que era la que, en definitiva, permitiría la victoria total. En este sentido, los compromisos político-militares de José Eduardo dos Santos y de Jonas Savimbi se caracterizaban por ser endebles. En línea con lo expuesto, “Diplomatic initiatives were always dependent upon the military balance of power” (Pycroft, 1994: 255). El motivo obedecía que ambos sabían que tenían la capacidad financiera para rearmarse –o incluso mantenerse armados- y alterar así aquellos resultados considerados displicentes. Dicha capacidad financiera provenía de la explotación de los recursos naturales: en el caso de UNITA, del control de las reservas de diamantes²⁵; en el caso del MPLA, de los ingresos en calidad de rentas petroleras. Por lo tanto, ambos grupos contaban con “independent sources of revenue for waging the war” (Fritzsche, 2010: 16). De esta manera, si sentarse a la mesa de negociación incluye como condición necesaria el balance de poder entre los dos bandos en calidad de un *impasse* militar, esta situación era de intrincada realización, puesto que cada uno contaba con fuentes de recursos rentables, con una demanda internacional alta y constante.

²⁵ “[...] just before the accords were signed, UNITA seized key diamond mines in the north, thus ensuring its capacity to continue funding the war effort if it suffered defeat at the polls” (Greenhill y Major, 2006-7: 19).

Por otro lado, resulta imprescindible hacer hincapié sobre la carencia de recursos para el despliegue de UNAVEM II. Ya se expuso la coincidencia existente en la literatura acerca de la falta de capital humano y financiero para dicha misión. Mas, ¿cuál es la importancia de este déficit? De acuerdo con Fritzsche, el problema fundamental proviene de no estar técnica y militarmente preparados para observar y hacer efectiva la desmovilización de las tropas.

It is agreed now that the limited troops sent to Angola were a bad misjudgement –one that made it too easy for Jonas Savimbi, leader of Angola’s UNITA rebels, to flout the demobilization deadlines and keep his best men and material hidden away in the bush, so they were ready to return to war when Angola’s first democratic election did not go his way. (2010: 13)

Por último, en cuanto a la edificación de una estructura política de parte de la ONU, ésta también se hallaba ausente. Siguiendo a Fritzsche, los Acuerdos de Bicesse le habían otorgado a la ONU un rol periférico, de observador: “The UN was not given a formal and institutional place in the nerve center of the entire transition, the Joint Political Military Commission (CCPM), which was responsible for overall supervision of the ceasefire” (2010: 12). De esta manera, el mandato de UNAVEM II no le dejaba poder de maniobra, ni tampoco le otorgaba un lugar en el proceso de toma de decisiones. Mas quienes sí contaban con este poder eran Estados Unidos, Rusia y Portugal –o la Troika. “The Troika installed itself in the driving seat of the process, the CCPM (Joint Political and Military Commission), and thus the interests of the three member countries and even more the balance of power between them, greatly in the US’s favour, prevailed over the UN” (Messiant, 2004: 18). Por lo tanto, no solo las tareas a realizar se hallaban

atravesadas por los intereses de los miembros de la Troika²⁶, sino que, además, este modelo de estructura política fallaba al momento de generar diálogo entre las partes en conflicto, con el propósito de animar la confianza y la cooperación.

Hacia una nueva negociación: UNAVEM III. En noviembre de 1992, se renovaron los intentos para alcanzar la paz en Angola. Margaret Anstee logró coordinar una reunión en Namibe, una provincia angoleña, con delegaciones de UNITA y el MPLA. Si bien se evidenció un progreso relacionado al cumplimiento del pacto preexistente, el acuerdo fue sumamente endeble y para fines de mes, la guerra había reanudado. En enero de 1993, en una nueva tentativa por lograr el alto al fuego, Anstee organizó un encuentro en Addis Ababa, Etiopía. Sin embargo, su desenlace fue también poco afortunado. Entre abril y mayo del mismo año, se llevó a cabo una ronda de negociaciones en Abiyán, Costa de Marfil –las cuales serían las últimas de Anstee como Representante Especial del Secretario General (UNDPI-DPKO, 2000a). Según Anstee, las negociaciones de Abiyán estuvieron cerca de producir un acuerdo; mas, nuevamente, lo que estuvo ausente fue la fuerza de policía de la ONU para poder hacer efectiva la seguridad de los presentes (Anstee, 1996; MacQueen, 1998). En junio de 1993, bajo presiones de diversos grupos involucrados –entre ellos, UNITA-, Margaret Anstee fue relevada de su cargo y reemplazada por Alioune Blondin Beye. En septiembre de 1993 ocurrió algo peculiar; a través de la resolución 864 –en la cual se extendía el mandato de UNAVEM II- el Consejo de Seguridad condenó a UNITA por su actividad militar y le impuso un embargo en el suministro de armas y productos derivados del petróleo (UNDPI-DPKO, 2000a). Finalmente, en octubre de 1993 se inauguró la cuarta –y última-

²⁶ De acuerdo con Messiant (2004), en esta primera etapa de la resolución del conflicto, Estados Unidos se hallaba interesado en la victoria de UNITA, alterando su calidad de árbitro imparcial.

ronda de negociaciones en Lusaka. “Significantly, the talks began a month after the Security Council had imposed sanctions against UNITA in exasperation at its temporising” (MacQueen, 1998: 405).

A fines de 1994, el canciller Venancio de Moura –representando al MPLA- y el secretario general de UNITA, Eugenio Manuvakola, firmaron el Protocolo de Lusaka bajo los auspicios de la ONU. José Eduardo dos Santos estuvo presente durante la firma, mientras que su homólogo Jonas Savimbi se ausentó. El Protocolo reconocía la legitimidad de los Acuerdos de Bicesse de 1992, así como también la validez de las elecciones de septiembre del mismo año. En cuanto al aspecto militar, se había acordado la desmovilización de los soldados, y la formación de las Fuerzas Armadas Angoleñas y la policía –las cuales incluirían miembros de UNITA. Por otro lado, en lo que respecta al costado político, Lusaka había aprendido la lección de Bicesse: el formato tenía que ser de *power-sharing*. Así es como se definió la formación de un gobierno de coalición bajo la sigla GURN (Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional) en donde se incluiría a representantes de UNITA en todos los niveles de gobierno. Por último, a diferencia de Bicesse, esta edición se concentró en delinear un rol específico para la ONU en lo que refería a la implementación del acuerdo. En primer lugar, la ONU, representada en la figura de Blondin Beye, estaría encargada de presidir la Comisión Conjunta Política y Militar, y ésta sumaría representantes de UNITA, el MPLA y los miembros de la Troika. A su vez, a la ONU se le había encomendado supervisar y verificar el cese al fuego, así como también la responsabilidad de la desmovilización y entrega de armamentos de UNITA (Knudsen y Zartman, 1995; MacQueen, 1998: 406-7; Paulo, 2004; Bekoe, 2008).

A pesar de que los negociadores en Lusaka se habían propuesto enmendar los errores cometidos con los Acuerdos de Bicesse, “(...) there were few willing to offer

good odds on its success” (MacQueen, 1998: 407). El motivo era triple: en primer lugar, la experiencia no ofrecía un buen pronóstico. Luego de que se frustrase la primera iniciativa de paz y que la guerra entre 1992 y 1994 sea incluso más atroz, el Protocolo de Lusaka corría con la desventaja de ser tomado con precaución. Según Anstee, “The old suspicions and mistrust have deepened, and the positions of those who never believed in the process, or wanted to use it for their own purposes, have hardened” (Anstee, 1996: 191). En segundo lugar, en términos prácticos, el Protocolo no abordaba la cuestión del financiamiento de UNITA a partir de la venta de diamantes (Greenhill y Major, 2006-7). Y, finalmente, si bien se había conciliado sobre la formación de un gobierno de coalición, el Protocolo ignoraba la cuestión política del futuro del mismo Savimbi (Greenhill y Major, 2006-7: 21). Es decir, a pesar de que se le había otorgado a UNITA un lugar en el GURN, dado que Savimbi había actuado como un *spoiler*, era de capital importancia no desmerecer la necesidad de asignarle un lugar especial en la transición –con el objeto de que perciba que sus demandas políticas habían sido tenidas en consideración.

En febrero de 1995, tras la recomendación del Secretario General, el Consejo de Seguridad aprobó el despliegue de UNAVEM III, a través de la resolución 976. El mandato de la nueva misión se extendía hasta febrero de 1997, momento para el cual los términos del Protocolo de Lusaka debían estar ultimados. Entre sus objetivos y tareas se encontraban, de manera general, la implementación del reciente Protocolo; y en particular, oficiar de mediador entre las partes en conflicto, vigilar el cese al fuego, hacer efectiva la desmovilización y el desarme de las fuerzas de UNITA, controlar la formación de las Fuerzas Armadas Angoleñas y la Policía Nacional, verificar la extensión de la administración nacional en todo el territorio angoleño, así como también proveer asistencia humanitaria a la población de Angola (UNDPI-DPKO, 2000b; McVey, 2003).

En lo que respecta a su fortaleza, ésta también había sido una lección aprendida del período anterior; UNAVEM III contó con 7.000 soldados, 350 observadores militares y 260 observadores policiales. A su vez, llegó a tener un presupuesto de casi un millón de dólares por día (UNDPI-DPKO, 2000b; MacQueen, 1998). Finalmente, en cuanto a la cooperación de parte de las facciones en conflicto, “neither side was serious about implementing the agreement” (Adebajo y Landsberg, 2000: 170)²⁷, lo cual desencadenó, necesariamente, problemas en la implementación del Protocolo de Lusaka de parte de la ONU.

Dichos inconvenientes al momento de la implementación y el desarrollo de las tareas de UNAVEM III se plasmaron tanto en el aspecto militar como en el político. En cuanto al primero, como ya se mencionó, el compromiso de las facciones locales para poder completar esta fase con éxito fue muy débil. Por el lado de UNITA, Savimbi burlaba el programa de desmilitarización y desmovilización: “(...) as became abundantly evident later, he did not canton his elite forces and did not surrender most of UNITA’s best weapons” (Morjé-Howard, 2008: 40). Asimismo, el gobierno también se encargó de traicionar los acuerdos. Por ejemplo, constantemente evitaba difundir públicamente la fortaleza de la Policía Nacional (generando la desconfianza de Savimbi); además, si bien el gobierno había anunciado el retiro de las fuerzas mercenarias de origen sudafricano (Executive Outcomes), “accounts (...) indicated that, in fact, Executive Outcomes simply turned into another form of private security for the government” (Bekoe, 2008: 82). Así, en palabras de un oficial de la ONU: “UNITA violated the agreement by day, the government by night” (citado en Messiant 2004: 21). Por su parte, la comunidad internacional falló al momento de probar su compromiso con Angola, en esta segunda

²⁷ Esta opinión también se halla expuesta en el Perfil de UNAVEM III (2000), y en los trabajos de McVey (2003) y Messiant (2004).

edición del proceso de paz. Pues mientras el Consejo de Seguridad aprobaba el despliegue de UNAVEM III, al mismo tiempo que imponía embargos en el suministro de armas,

(...) Russia and China continued to supply arms to the Angolan government; the United States sold military aircraft and bought (and continues to buy) massive quantities of oil, also from the government; and many European and African countries continued to buy diamonds from UNITA in exchange for weapons. (Morjé-Howard, 2008: 38).

A su vez, si bien el capital financiero con el que se contó en UNAVEM III fue cuantioso, no existieron, a diferencia de la experiencia mozambiqueña, paquetes monetarios concretos y atractivos que operen como incentivos para dejar las armas (Bekoe, 2008).

En lo que respecta a la arista política del mandato de UNAVEM III, es menester mencionar que el gobierno de coalición, conformado bajo la sigla GURN, arrojó resultados bastante positivos. Efectivamente, en abril de 1997, GURN prestó juramento y comenzó a funcionar integrando al personal de UNITA. No obstante, la extensión de la administración estatal a la totalidad del territorio angoleño no pudo desarrollarse con éxito. En particular, UNITA fue incapaz de renunciar y entregar sus cuarteles en dos de las provincias ubicadas en el centro geográfico de Angola (Bekoe, 2008).

Agravamiento de la crisis y una última oportunidad: MONUA. El panorama empeoró para mediados de 1997, puesto que el conflicto armado cruzó la frontera y se combinó con la crisis política de Zaire (República Democrática del Congo); UNITA apoyaba al ex dictador Mobutu Sese Seko, que había sufrido un derrocamiento de parte de la oposición. A su vez, el gobierno de Angola vislumbró una ventana de oportunidad para recuperar territorios ricos en reservas de diamantes bajo el control de Savimbi. Finalmente, en junio de 1997, se reincidió en la lucha armada, tanto entre Zaire y

UNITA, como entre el gobierno y la guerrilla de Savimbi (Morjé-Howard, 2008). Junio también fue un mes de capital importancia por otro motivo; mientras que el mandato de UNAVEM III llegaba a su fin, el Consejo de Seguridad decidió dar por terminada la misión y reemplazarla con una nueva: MONUA (McVey, 2003; Paulo, 2004; Morjé-Howard, 2008). Así fue como, por medio de la resolución 1118, se estableció la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Angola. Su mandato no distaba mucho de su antecesora; las tareas que debía realizar esta misión estaban relacionadas al monitoreo del cese al fuego, el desarme y la desmovilización de UNITA, la implementación del Protocolo de Lusaka y la asistencia técnica en la democratización de Angola (McVey, 2003). No obstante la similitud, MONUA contó con menor personal militar y técnico: aproximadamente 1.000 efectivos, en promedio, durante la totalidad del mandato.

De todas formas, la situación en Angola en materia de seguridad ya era crítica. Con los estallidos de los combates con Zaire, y entre UNITA y el gobierno, ésta se deterioró notablemente. Las poblaciones eran constantemente atacadas por UNITA e intimidadas en cuanto a su afiliación política; las autoridades estatales locales y de la ONU también sufrían agresiones de parte del grupo de Savimbi. Naturalmente, la crisis humanitaria angoleña se agravó de manera escandalosa, evidenciando un número de refugiados prominente. Finalmente, la desaparición de un vuelo de la ONU sobre el territorio controlado por UNITA y el derribo de un segundo avión fletado por la organización, culminaron la presencia de las Naciones Unidas en Angola (UNDPI-DPKO, 2001a; Morjé-Howard, 2008). Para diciembre de 1998, el conflicto angoleño había reincidido, pero esta vez en una escala aún mayor. "In February 1999, the UN terminated its observer mission, since there was 'no longer peace to keep in Angola'" (Morjé-Howard, 2008: 41). Según cuenta Paulo (2004), la retirada de la ONU también obedeció a reiterados pedidos de parte de UNITA y del MPLA.

Lo que se desprende del relato es un fracaso rotundo de parte de las misiones llevadas a cabo en Angola. No sólo no pudieron promover la democratización del país africano, sino que ni siquiera se pudo mantener la paz, como condición necesaria sobre la cual edificar. Una vez más, adquiere relevancia preguntarse: ¿qué fue lo que falló en Angola? Al igual que con la evaluación de los Acuerdos de Bicesse, el período bajo la influencia del Protocolo de Lusaka se analizará a la luz de las conclusiones a las que se arribó en el caso de estudio de Mozambique.

Desafortunadamente, en lo que refiere a la existencia de compromisos políticos de largo plazo tanto de las partes en guerra, como de la comunidad internacional, la conclusión es la misma que para el desenlace de los Acuerdos de Bicesse. Uno de los corolarios a los que se había arribado estaba relacionado con la capacidad de financiamiento propio de parte de las facciones de Angola, como condición para su reticencia a la negociación y el desarme. A pesar de que el Consejo de Seguridad aprobó una serie de resoluciones en dirección a abordar este problema, la comunidad internacional no actuó de manera unificada. Según relataba Morjé-Howard (2008), tanto el gobierno como UNITA no tuvieron mayores inconvenientes en encontrar compradores que permitieran seguir financiando su esfuerzo bélico.

Por otra parte, en cuanto a la disponibilidad de recursos y el despliegue del andamiaje de infraestructura política para el cumplimiento del desarme, una crítica usual a UNAVEM III y MONUA radica en que ambos elementos estaban presentes – especialmente en la primera. En otras palabras, en el diseño de la misión, se habían aprendido las lecciones de UNAVEM II. Por tanto, la crítica hacia el pobre desempeño es aún más severa. No obstante, recogiendo la opinión de Anstee (1996), es importante comprender que las dos situaciones no son análogas. No es factible extrapolarlas y criticar sobre la base de dicho ejercicio analítico. Entonces, ¿por qué la Comisión

Conjunta Política y Militar no puedo completar sus tareas?, ¿por qué los recursos tampoco fueron suficientes? En respuesta a la segunda pregunta, los trabajos de Morjé-Howard (2008) y Bekoe (2008) delinear una posible respuesta: estuvieron mal administrados. Según Morjé-Howard, si se analiza la naturaleza de las tareas a desarrollar y la composición de la fuerza desplegada en el territorio, "(...) while there were many peacekeeping troops, the civilian affairs division was comparatively very small, given the tasks it was supposed to fulfill" (2008: 39). A su vez, Bekoe (2008) sentencia que una de las falencias fue la incapacidad para proveer un paquete de reintegración adecuado, en calidad de incentivo para que los soldados suelten las armas. En lo que respecta a la primera pregunta, la literatura no se detiene en este punto. Sin embargo, se considera que para ofrecer una respuesta, es necesario apelar a un argumento de dependencia de la trayectoria. Esto no implica aseverar que el ambiente ya estaba deteriorado y que por tanto era imposible trabajar -otorgando una suerte de amnistía. Sino que implica que, muy probablemente, dado el desempeño de la misión anterior, los actores no la hayan tomado con la seriedad que se merecía y no la hayan considerado una institución con autoridad suficiente como para ser contemplada en su esquema de preferencias.

Transición a la democracia y la consolidación que no fue

Lo que resta es la historia política de un país atravesado por cuarenta años de guerra; es una historia de estancamiento político y social. En el año 2002, las fuerzas del gobierno asesinaron a Jonas Savimbi, y su muerte significó el fin de la guerra civil. En abril del mismo año, se firmó el Memorando de Entendimiento de Luena. Éste incluyó leyes de amnistía para los crímenes de guerra cometidos durante el conflicto, la integración de los soldados de UNITA en las Fuerzas Armadas Angoleñas, y un

calendario para la desmovilización de las fuerzas restantes de UNITA (Roque, 2009). En otras palabras, se estaba comenzando a transitar el camino de la reconciliación nacional. Sin embargo, ¿cuál es la postal de Angola tras diez años de haberse dado por concluida MONUA?

“Angola has a political system that is authoritarian, exclusive, and hegemonic, but that operates under the guise of multiparty electoral politics” (Roque, 2009: 147). En el año 2008, después de haber sido pospuestas por once años, se llevaron a cabo elecciones legislativas; y éstas fueron la segunda experiencia electoral del pueblo angolés, contando las elecciones de 1992. Para el año 2009 estaban programadas las elecciones presidenciales, mas éstas se postergaron. Los resultados obtenidos en 2008 son los que se muestran en la Tabla 15. Como se observa, la ventaja alcanzada por el MPLA *vis-à-vis* el resto de los partidos es notable y alarmante. Según Roque, las elecciones de 2008 han tenido un efecto paradójico: “(...) they secured the ruling party’s hegemony, the virtual elimination of the opposition, and the consolidation of a highly securitized regime” (2009: 137). Asimismo, éstas distaron de ser libres y justas. Se registraron irregularidades en relación a registros de violencia política, malversación de fondos para las campañas electorales, así como también un abuso de la propaganda política oficialista en los medios de comunicación.

Party	1992 LEGISLATIVE ELECTIONS		2008 LEGISLATIVE ELECTIONS	
	Votes	Seats ¹	Votes	Seats
MPLA	1,976,940	129	5,266,112	191
UNITA	1,258,103	70	670,197	16
PRS	77,605	6	204,478	8
FNLA	84,110	5	71,600	3
Nova Democracia	0	0	77,405	2

1. The National Assembly, a unicameral parliament with a four-year term, has 220 seats elected by proportional representation: 130 members are elected nationally and 90 are elected regionally.

TABLA 14. Resultados de las elecciones legislativas en 1992 y 2008.
Fuente: Roque (2009)

En cuanto a los partidos políticos, UNITA fue tradicionalmente el centro opositor al gobierno por excelencia. Sin embargo, desde la muerte de Savimbi, UNITA se ha vuelto políticamente débil y ha sufrido la defección y faccionalización. Si bien existen otros partidos registrados, su importancia es verdaderamente marginal. “The opposition’s lack of cohesiveness, its inability to create a perception of capable leadership, and its inexperience in governing inevitably would have provided the MPLA with a win, even without any fraudulent maneuverings” (Roque, 2009: 144-5). Más aún, a través de la violencia política, la cooptación y la persecución, el MPLA logró neutralizar cualquier forma de oposición seria (Roque, 2009; Freedom House, 2009). El gobierno también logró anular a las asociaciones civiles como instituciones que permitan expresar las preferencias de los ciudadanos. Para el año 2002, a través de un decreto presidencial, se introdujo un nuevo marco regulatorio para la actividad de las ONGs; éste promovía su asociación con el gobierno en lugar de su papel como actores independientes (Roque, 2009)²⁸.

²⁸ El reporte de Freedom House (2009) ofrece también ejemplos sobre ONGs que fueron expulsadas de Angola bajo la demanda del Poder Ejecutivo.

En lo que refiere a la existencia de constreñimientos institucionales al ejercicio de poder, Angola es un país semi-presidencialista en la teoría, aunque híper-presidencialista en la práctica. José Eduardo dos Santos es, al mismo tiempo que jefe de Estado, presidente de su partido, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Angoleñas, y el encargado de nominar y remover de su cargo al primer ministro, al gabinete y a los gobernadores provinciales (Roque, 2009). A su vez, dos Santos es también quien designa a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, sin requerir de la aprobación legislativa (Freedom House, 2009). Asimismo, la Asamblea Nacional carece de poder de facto, y los miembros de Poder Judicial están sujetos a una amplia influencia del Poder Ejecutivo (Freedom House, 2009). Por último, la corrupción es uno de los males que asecha a Angola, y atraviesa de manera vertical el esquema de poder, corroyéndolo desde sus bases.

Angola no es un país en el que se respeten las libertades civiles, con excepción de la libertad de culto. Tanto la radio como el periódico diario son de propiedad estatal. La censura es menos estricta desde el año 2002; sin embargo, por ejemplo, la difamación del presidente o de los miembros del gobierno está penada por la ley (Freedom House, 2009).

Como se observa, Angola es un país que hoy en día se encuentra o bien estancado en su transición hacia la democracia, o bien evidenciando el recorrido del camino contrario. El próximo desafío que debe afrontar el país en 2009 es la fijación del calendario para la elección presidencial. Según expresa Roque,

It is possible to view [the 2008 legislative elections] optimistically as a “test-run” for multiparty politics and perhaps the beginning of the end of the MPLA’s veiled autocracy. The road to real democracy in Angola will indeed be long and tortuous, but it may in one way or another have begun. (2009: 149)

Para concluir, el impacto que puede tener una IMH en la trayectoria democrática del Estado intervenido proviene de la capacidad de desmovilizar las fuerzas de choque previo al período de comienzo de la transición democrática (tome la forma de elecciones, o cualquier otra). Dicha actividad requiere de la conjunción de los tres componentes mencionados: la ratificación de compromisos políticos de largo plazo, la disponibilidad de recursos, y, finalmente, el montaje de una estructura política, administrada por la ONU. En Angola la desmovilización no pudo ser llevada adelante por la ONU; no es casualidad que la trayectoria del país diez años después de la terminación de MONUA haya derivado en la incapacidad para crear un sistema democrático en la práctica.

KENIA: 1990 – 2006

“(...) democratic transitions are often protracted struggles requiring more than one election to complete.”

Barkan, 2004

En los Capítulos V y VI se exploró en profundidad la conexión existente entre la presencia de una IMH y la democratización (o no) del país intervenido, en calidad de eslabón perdido, para completar la explicación de esta investigación. A continuación, el objetivo del presente capítulo se basa en analizar el proceso de democratización de un país que, a pesar de presentar una crisis humanitaria, no presencié una IMH. En este sentido, se someterá a juicio la validez del argumento presentado para los otros dos casos de estudio, con el propósito de examinar cómo ajusta al caso de Kenia.

Kenia fue, durante el período de Guerra Fría, uno de los “niños mimados” de Occidente. Dada su aparente estabilidad política, fruto de una dinámica autoritaria de poder, el bloque occidental lo consideró el modelo a imitar por los demás Estados africanos –consumidos por la inestabilidad política en el mejor de los casos, y la guerra en el peor. Sin embargo, hoy en día Kenia se encuentra aún en el camino de la consolidación de su sistema político democrático²⁹. El motivo para esta lenta trayectoria obedeció a otro tipo de consolidación en el juego de poder. La era de Daniel arap Moi estructuró su larga estadía en el poder a partir de la repetición de la estrategia del uso de la fuerza y de la politización de los clivajes étnicos. Mas, en el año 2002, tuvo lugar un

²⁹ Incluso Rakner, Menocal y Fritz (2007) lo catalogan como un régimen híbrido, siendo más críticos con Kenia.

traspaso de poder, en el contexto de elecciones libres y justas. Por tanto, se vuelve trascendente cuestionarse: ¿cuál fue el motivo por el cual Moi y su partido político, KANU, no recurrieron al uso de la fuerza y la desestabilización social para alterar el resultado de la elección y perpetuarse en el poder? En la misma dirección, ¿por qué la nueva administración no se valió de la misma estrategia? De esta manera, se relevará la historia política del país entre comienzo de la década de los 90 y el año 2006.

Situación antecedente

En el año 1963, tras independizarse de la corona británica, Jomo Kenyatta ganó las elecciones y llegó al poder, erigiéndose como el primer presidente de Kenia. Sus credenciales partidarias obedecían al KANU (*Kenya African National Union*), cuya base de apoyo estaba formada principalmente por las etnias Kikuyu y Luo. El KADU (*Kenya African Democratic Union*) era el otro partido keniano de la post-independencia, su líder era Daniel arap Moi (entre otros), y su base de apoyo estaba compuesta por una colección de minorías: Kamba, Luhya, Kalenjin y Maasai³⁰. El estilo político de Kenyatta era *authoritarian accountability* (Barkan, 1993). Luego de la cooptación de KADU y la prohibición del registro de otro partido, Kenia se convirtió en un sistema político unipartidario *de facto*. La represión, la detención extrajudicial y la censura estaban a la orden del día (Africa Watch, 1993; Barkan, 1993; Mutua, 1994; Klopp, 2001). A su vez, Kenyatta dio curso a lo que se denominó “Kikuyunización” de la política africana. Este término refiere al acomodamiento de miembros pertenecientes a la etnia Kikuyu en los cargos públicos (Musau, 2009).

³⁰ Kenia está conformada por más de 40 grupos étnicos. Los tres grupos más grandes son Kikuyu (21% de la población), Luhya (14% de la población), y Luo (13% de la población). Existen otros grupos más pequeños como Kamba, Kalenjin, Kisii, Meru, Maasai, entre otros. (Africa Watch, 1993: 5-6)

Tras el fallecimiento de Kenyatta en 1978, Daniel arap Moi llegó a la presidencia³¹. Proveniente de la etnia Kalenjin, la era Moi heredó el hábito por el favorecimiento de su base de apoyo étnica; a su turno, dio inicio a la “des-Kikuyunización” de la administración pública, y en su lugar ubicó a miembros de la etnia Kalenjin (Maina, 1992; Barkan, 1993; Musau, 2009). La administración Moi significó un recrudescimiento de las prácticas autoritarias de Kenyatta: “President Moi responded to political dissent with a severity that surprised even those Kenyans who had been critical of President Kenyatta's policies” (Africa Watch, 1993: 8)³². En 1982, luego de un intento fallido de golpe de Estado, Moi convirtió la tendencia partidaria de Kenia en ley; así, Kenia pasó a ser un Estado unipartidario *de jure* (Musau, 2009).

El cambio sistémico que evidenció el orden mundial en el período 1989-1991 tuvo su impacto en la dinámica política interna de Kenia. El efecto fue doble; por un lado, comenzaron a escucharse voces, desde la sociedad civil, pidiendo por una apertura democrática. Tanto las iglesias como miembros de la oposición empezaron a desafiar al gobierno, abogando por el multipartidismo (en semejanza con el proceso que estaba atravesando Europa del Este). Fiel a su estilo, Moi hizo caso omiso de estos pedidos (Barkan, 1993; Holmquist y Ford, 1994; Klopp, 2001). No obstante, “Western donors changed their foreign policies to Africa and began to link their aid to the continent with liberal democracy” (Musau, 2009: 38). En este caso, Moi no pudo desconocer la presión externa –que se manifestó en recortes a la ayuda financiera que recibía el país. En diciembre de 1991, a partir de este doble frente de presión, se derogó la prohibición constitucional a los partidos políticos, dando lugar a una nueva era de multipartidismo (Maina, 1992; Africa Watch, 1993; Barkan, 1993; Klopp, 2001; Nasong’o, 2007; Musau,

³¹ Tras la cooptación del KADU, Daniel arap Moi se convirtió en el vicepresidente de Kenyatta.

³² Esta opinión es compartida por Barkan (1993), Mutua (1994), Musau (2009).

2009). En este sentido, Kenia es un caso particular, pues el conflicto propiamente dicho no tuvo lugar en un período previo al comienzo de la transición. Por el contrario, su inicio se dio en un clima que, si bien era autoritario, se caracterizó por la ausencia de enfrentamientos cruentos.

“Luchas étnicas” y su convivencia con la transición a la democracia

La transición a la democracia, por otro lado, sí estuvo dominada por conflictos étnicos violentos (Musau, 2009) con consecuencias calamitosas. No obstante, es menester señalar que, lejos de ser fruto de una violencia descentralizada y espontánea, los enfrentamientos étnicos fueron la expresión de una estrategia de parte de Daniel arap Moi y el KANU para mantenerse en el poder. Inmediatamente posterior a la mencionada derogación, Moi predijo que el retorno del país al multipartidismo no tendría otra consecuencia más que un estallido de violencia tribal, con el potencial efecto para destruir a la nación (Africa Watch, 1993, Barkan, 1993). Como una profecía auto-cumplida, el período de 1991-1994 fue testigo de una limpieza étnica, patrocinada por el gobierno (Africa Watch, 1993; Klopp, 2001; Musau, 2009).

El inicio de estos enfrentamientos estuvo precedido por una convocatoria renovada al Majimboismo; éste implicaba el llamado hacia un sistema de mayor autonomía provincial, articulado alrededor del clivaje étnico (Africa Watch, 1993; Brown, 2002; Musau, 2009). La importancia política para Moi y la elite que lo rodeaba radicaba en que, en un sistema federal de esas características, ninguna mayoría estaría capacitada para ejercer su dominio en el país (Africa Watch, 1993). En este sentido, “[Majimboism] would allow KANU to retain control in the regions where it had significant power bases, even if it lost power nationally” (Brown, 2002). No obstante, el majimboismo era, asimismo, un llamado para la expulsión de aquellos grupos étnicos

que no eran originarios de la tierra en cuestión. Así, desde las cúpulas del gobierno, comenzaron a convocarse manifestaciones a favor de esta propuesta étnica-política; la particularidad de dichas convocatorias era que estaban articuladas alrededor de una retórica de violencia étnica, que hacía alusión a los Kikuyus como extranjeros que debían ser expulsados de las tierras que, ancestralmente, pertenecían a los Kalenjin³³. Según cuenta Brown (2002), “Majimboism became a euphemism for ‘ethnic cleansing’”.

Los primeros enfrentamientos entre Kalenjins y Kikuyus tuvieron lugar previo a la sanción de la reforma de la constitución, en la provincia del Valle del Rift. Sin embargo, su agravamiento se evidenció en la etapa posterior a dicha enmienda.

Youths referred to as “Kalenjin warriors” mainly carried out attacks. They ruthlessly killed, raped and maimed individuals, burnt their farms and houses, and killed or seized their livestock. They used traditional weapons such as spears, bows and arrows, machetes and knives among other rudimentary weapons. The warriors were usually attired in informal red or black shorts and t-shirts and they mainly attacked at night and when they did so during the day, they concealed their identity by smearing clay on their faces. (Musau, 2009: 47).

El saldo de muertos fue de 1.500 personas, mientras que el número de los desplazados ascendió a más de 300.000 (Africa Watch, 1993); éstos últimos se volvieron refugiados en su propio país. Sumado a esto, la pérdida de sus pertenencias y fuente de alimento no tardó en generar una crisis humanitaria en Kenia. A su vez, no sólo el gobierno no proveía la asistencia necesaria, sino que también –a través de una política de sitiado llamada “zonas de seguridad”- aisló a los distritos implicados en las matanzas,

³³ Ver Klopp (2001) para mayor detalle acerca de los discursos de los parlamentarios del KANU a favor de la violencia y la toma de la armas.

marginándolos y relegándolos a la lucha por la supervivencia³⁴. Frente a este panorama, diplomáticos extranjeros en Kenia compararon la masacre con la limpieza étnica que se llevó acabo en Bosnia³⁵.

La respuesta del gobierno, al margen de lo expuesto, fue prácticamente irrelevante. La primera reacción fue tratar de desacreditar los eventos y adjudicarlos a una ola de violencia apolítica, descentralizada, de tipo étnica. No obstante, una serie de reportes de parte de organizaciones de la sociedad civil y de organizaciones eclesiásticas, confirmaron la participación abierta y organización del gobierno en la masacre (Africa Watch, 1993; Klopp, 2001; Brown, 2002; Musau, 2009). Dicha intervención consistió en, por ejemplo, pagos diferenciales a los guerreros Kalenjin por cada casa incendiada o cada asesinato, el transporte de éstos hacia las zonas en cuestión, así como la contratación de mercenarios (Brown, 2002). A su vez, el desentendimiento de parte de la fuerza policial al momento de asistir a las víctimas también fue considerado una prueba de la complicidad del gobierno en esta ola de violencia (Klopp, 2001). Sin tornarse una teoría conspirativa, en general, hay acuerdo en la literatura acerca de los beneficios que dichas luchas traerían –y efectivamente trajeron- a Moi. En primer lugar, los enfrentamientos eran una prueba fehaciente de que el multipartidismo no era el sistema indicado para Kenia (en línea con la predicción hecha) (Holmquist y Ford, 1994; Klopp, 2001). A su vez, funcionaban como una estrategia para desplazar a todos aquellos kenianos no Kalenjin del Valle del Rift, no sólo obteniendo mayoría de los votos en aquella área sobre-representada (Ndegwa, 1998), sino también evitando que puedan concurrir a las urnas a depositar su voto

³⁴ Esta política impidió que organizaciones locales e internacionales o el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo no pudieran tampoco proveer asistencia humanitaria a los damnificados.

³⁵ En Africa Watch (1993: 54) se encuentra el testimonio de Lord David Ennals (representante del Consejo Británico de Refugiados) y de Kerry Kennedy-Cuomo (director ejecutivo del Centro Memorial Robert F. Kennedy para los Derechos Humanos).

(Africa Watch, 1993; Barkan, 1993; Holmquist y Ford, 1994). Más aún, el hecho de que el conflicto no haya tenido como locación a Nairobi “[contributed] to a certain invisibility as far as international opinion is concerned” (Holmquist y Ford, 1994: 13).

En diciembre de 1992 tuvieron lugar las primeras elecciones de Kenia como un Estado con un sistema político multipartidario. A pesar de que las predicciones indicaban que Moi no iba a salir victorioso en la contienda electoral, éste se declaró ganador con el 36% de los votos y renovó su estadía en el poder. Las irregularidades en el proceso electoral fueron variadas, desde el acceso a recursos públicos para el financiamiento de la campaña oficialista, hasta el hostigamiento de miembros de la oposición (Barkan, 1993). Sin embargo, hay acuerdo en la literatura acerca de que son dos los factores que explican, en general, la victoria de Daniel arap Moi. En primer lugar, tal como conjuró el KANU, el desplazamiento interno de las víctimas de las masacres impidió su registro para la elección, así como su presencia el día de la votación. Y, en segundo lugar, la fragmentación de la oposición era tal, que Moi pudo erigirse como vencedor con un magro porcentaje de votos (Holmquist y Ford, 1994; Mutua, 1994; Barkan y Ng’ethe, 1998; Brown, 2002). En términos políticos, el resultado pasó desapercibido. “Within days of Moi’s 1992 win came the shutdown of the limited political opening that he had permitted during the campaign” (Barkan y Ng’ethe, 1998: 32-3). Según cuentan los autores, a pesar de la apertura y de la participación de la oposición en el Parlamento, Moi eligió ignorarla *de facto* y remitirse a sus antiguas prácticas coercitivas y de censura.

A los efectos del argumento de esta investigación, ¿qué significa la combinación entre la crisis humanitaria producto de las “luchas étnicas”, y las elecciones y su resultado? En primer lugar, resulta indispensable mencionar que las llamadas “luchas étnicas” obedecieron a una dinámica de poder. No fueron espontáneas, sino que

estuvieron orquestadas por los sectores más duros del KANU, con el objetivo político de mantenerse en el poder. En este sentido, la apelación al enfrentamiento étnico implicó el desarrollo de una nueva estrategia tendiente a la politización de los clivajes étnicos existentes y su explotación en beneficio político. En vista a la apertura democrática de 1991, una forma que el KANU obtuvo de alterar la trayectoria de Kenia en pos de la democracia, fue a través de las armas. Y, efectivamente, tras la elección y la victoria de Moi, el gobierno continuó con su *modus operandi* autoritario, como si el llamado al multipartidismo y la celebración de elecciones no hubiesen significado el comienzo de un período de transición. Si se traza un paralelo con los otros dos casos de estudio y el argumento allí desarrollado, la estrategia del KANU fue movilizar gran parte de su base de apoyo, con el propósito de generar una situación que le permita al partido evitar seguir el camino comenzado por la apertura del sistema político. Así entonces, se apeló al uso de las armas para modificar un resultado obtenido a través de las urnas.

Durante el mandato de Moi entre su victoria en 1992 y la convocatoria a elecciones en 1997, se evidenció en Kenia un florecimiento y vigorización de las organizaciones de la sociedad civil –a pesar del contexto de represión política (Barkan y Ng’ethe, 1998; Holmquist y Ford, 1998; Kiai, 1998; Nasong’o, 2007). Dicho fortalecimiento se evidenció en el empuje por la reforma de la Constitución Nacional y se plasmó en la conformación del Grupo Parlamentario Inter-Partidario³⁶. El grupo se conformó muy a pesar del sector más duro del gobierno, cuyos intereses no se hallaban ni remotamente depositados en negociar con la oposición (Barkan, 1998; Nasong’o, 2007). Moi, por su parte, accedió a la formación del grupo, sólo bajo la condición de que su agenda trate un paquete de reformas mínimo, “those demanded by the opposition to create a ‘level playing field’ for the elections and guarantee their participation” (Barkan

³⁶ En la literatura figura bajo las siglas IPPG: Inter-Parties Parliamentary Group.

y Ng'ethe, 1998: 38). En este sentido, aquellos temas relacionados al ajuste en el balance de poderes y el rearmado de las reglas electorales debería esperar hasta después de las elecciones (Barkan y Ng'ethe, 1998; Kiai, 1998; Nasong'o, 2007). El desenlace de esta historia es predecible, dada la historia política de Kenia; el parlamento –donde Moi contaba con la mayoría- se haría cargo de revisar la constitución, paralizando el proceso (Nasong'o, 2007: 45).

El motivo para que dicho desenlace pueda haber sido llevado adelante por parte del gobierno radicó en una actualización de su política de poder, a través del uso de las armas. “With elections on the horizon, Moi began preparing to repeat 1992” (Barkan y Ng'ethe, 1998: 34); en la misma dirección, Klopp arguye que “In 1997, just as pressure was building for constitutional reform, ‘ethnic clashes’ broke out on the Coast and in the Rift Valley” (2001: 503). Así es que, en el período 1997-1998, tuvo lugar un resurgimiento de los enfrentamientos étnicos que habían ocurrido previamente, respetando el mismo patrón; desde las líneas más duras del gobierno se apeló al Majimboismo, y se movilizó gran parte de la base de apoyo con el propósito de desatar la violencia. “In the month of January 1998, the world was shocked by the massacre in a few days of Kenyan men, women and children in the valley of death, officially known as the Rift valley” (Apollos, 2001). El saldo de víctimas fue de 65 personas y aquellos desplazados ascendieron a 10.000 (Klopp, 2001; Musau, 2009). En comparación con la crisis anterior, quizá esta edición no podría catalogarse bajo el rótulo de “crisis humanitaria”. No obstante, lo relevante es que se empleó la misma estrategia de parte del gobierno: se recurrió a las armas con el objetivo de alterar el curso de la política doméstica en pos de la democracia. Según demuestra Klopp al respecto de la reincidencia en la técnica en el año 1997, “(...) ‘ethnic clashes’ are now part of the elite bargaining process” (2001: 503).

En diciembre de 1997 se celebraron elecciones en Kenia. Una vez más, Daniel arap Moi se instituyó como vencedor en la contienda, con el 40.5% de los votos (Barkan, 1998). Y, una vez más, el motivo de su victoria fue doble; por un lado, aquellos refugiados dentro de su propio país no pudieron presentarse a las urnas. Y, por otro lado, la oposición se hallaba dividida. Si bien el KANU no contaba con mayorías parlamentarias superiores a dos tercios, sí contaba con mayoría simple. Tal como fue mencionado previamente, el proyecto de reforma constitucional que se había pronunciado desde la sociedad civil y que había sido tomado por la oposición como su estandarte frente al KANU, recibió un trato parlamentario magro, hasta el punto de no ser discutido.

Nuevamente, si se intenta analizar los hechos a la luz del argumento de esta investigación, la dinámica se asemeja a lo ya ilustrado al respecto de los incidentes de 1991-1994 y su relación con el curso político del país. En este caso, la búsqueda de mayor apertura de parte de la sociedad civil y la oposición se tradujo en el empuje por la reforma de la Constitución Nacional. Frente a esto, el partido del presidente Daniel arap Moi consiguió volver a alterar la trayectoria a través de las armas. Luego de la victoria de Moi (que obedeció, en parte, a los efectos de las “luchas étnicas”), el gobierno congeló el proyecto de apertura, y dirigió el país conservando sus maneras autoritarias.

¿Hacia la consolidación de la democracia keniana?

Según el indicador Polity2 para la variable dependiente de esta investigación, entre el año 2001 y 2002, Kenia atravesó un cambio de una magnitud imponente; el puntaje en 2001 era de -2 puntos, ubicando a Kenia dentro del grupo de los autoritarismos. Mas en el año 2002, el sistema político keniano alcanzó los 8 puntos, situándolo dentro del conjunto de países democráticos –y con una puntuación más que

benévola³⁷. ¿A qué se debió esta transformación drástica? “The December 2002 election marked a milestone in a process that had begun a dozen years earlier (...)” (Ndegwa, 2003: 147); en la misma dirección, Barkan (2004) sugiere que las elecciones de 2002 marcaron el fin de la transición a la democracia –proceso que había comenzado a principios de la década de los 90. Y es que en las elecciones de 2002 se evidenció algo inédito en la política keniana: la rotación en el poder. Mwai Kibaki, por el partido NARC (*National Rainbow Alliance*), ganó las elecciones para presidente, con el 62% de los votos, en un ámbito en el que la violencia brilló por su ausencia (Närman, 2003; Ndegwa, 2003; Barkan, 2004). Kibaki logró vencer al candidato del KANU auspiciado por Moi, Uhuru Kenyatta (hijo de Jomo Kenyatta).

Frente al panorama descrito, la primera pregunta que surge es ¿cómo es que Kibaki logró la victoria electoral? La respuesta a esta pregunta se compone de tres aristas, relacionadas con la reorganización del espacio político en Kenia. El hecho disparador fue la renuncia de Moi a presentarse a elecciones en 2002. El motivo fue principalmente un impedimento constitucional; no obstante, el presidente tampoco contaba con los votos suficientes en el parlamento como para reformar la Constitución y permitirse la posibilidad de un mandato más (Barkan, 2004). Una vez que su retirada de la competencia electoral se convirtió en una certeza, los principales actores políticos comenzaron a reorganizarse. Por un lado, el partido KANU sufrió una fisura importante luego de la decisión de Moi de presentar a Uhuru Kenyatta como el candidato a presidente. Cuatro de los políticos de mayor peso dentro del partido – Odinga, Musyoka,

³⁷ E incluso, hasta el año 2011 mantiene la misma puntuación, aunque entre 2007 y 2009 recibió una calificación de 7 puntos.

Mudavadi y Saitoti³⁸- se convirtieron en desertores y formaron su propia alianza: la Alianza Arco Iris (Närman, 2003). Por otro lado, desde la oposición comenzó a surgir una nueva propuesta. El Partido Demócrata de Kibaki se unió a diferentes partidos etno-regionales, y al Partido Liberal Democrático, e hizo nacer a NAK (*National Alliance of Kenya*). Para octubre de 2002, NAK se unió a los disidentes del KANU, y formaron el partido de coalición NARC, con el que se presentaron a elecciones (Närman, 2003; Barkan, 2004). No obstante, la unión con la Alianza Arco Iris estuvo precedida por un memorándum en el que se delineó un acuerdo de reparto de poder entre sus miembros de manera equitativa. Según Barkan, “Once NARC had been formed, the outcome of the elections was never in doubt” (Barkan, 2004: 92).

Pese a esta explicación, quedan dos preguntas por responder. En primer lugar, ¿por qué el KANU no se levantó en armas para alterar el resultado de la elección? Y en segundo lugar, ¿por qué Kibaki no siguió la misma estrategia delineada y puesta en práctica con éxito por Daniel arap Moi? Una respuesta tentativa a ambas preguntas puede articularse alrededor de la salida del KANU de miembros de la facción más dura – los *hardliners*. Tanto Musyoka como Saitoti habían tenido papeles protagónicos en la organización y la puesta en acto de las masacres disfrazadas como “luchas étnicas” (Barkan, 1998; Barkan y Ng’ethe, 1998; Holmquist y Ford, 1998; Klopp, 2001). Es probable que, tras su salida, las facciones más blandas, catalogadas como moderadas y pragmáticas por Barkan y Ng’ethe (1998), hayan desistido de aquella práctica. En respuesta a la segunda pregunta, es menester mencionar de que no hay registros en la literatura acerca de una inclinación o no de Kibaki frente a la política de activación de los clivajes étnicos. No obstante, es factible hipotetizar que quizá los desertores del

³⁸ Saitoti ocupaba el cargo de Vice-presidente en la gestión de Moi; Musyoka era el Secretario del partido KANU; Mudavadi tenía asignada una cartera ministerial: el Ministerio de Finanzas; y Odinga ocupaba una banca en el parlamento.

KANU importaron esa estrategia. Odinga, Musyoka, Mudavadi y Saitoti se separaron del KANU en busca de una plataforma política con una promesa más certera de reparto del poder. No es que bajo Moi no hayan gozado de dicho poder; sino que algunos, como Saitoti, eran vistos como el próximo candidato a la presidencia, que continuaría el legado de Moi. Una vez que esta expectativa se vio truncada, resulta un comportamiento racional buscar una alternativa que se halle a tono con su esquema de prioridades. Mas resta la pregunta: ¿por qué no impulsaron la “toma de las armas”? Y en este sentido, una respuesta puede provenir por el lado de los incentivos (el cual era una de las aristas al momento de explicar la desmovilización). Los líderes de la Alianza Arco Iris no ingresaron a la coalición NARC sin antes ponerse de acuerdo sobre la configuración y el reparto de poder entre los miembros de la alianza. En línea con el argumento, aquella promesa de distribución de poder equitativa pudo haber funcionado como un incentivo para elegir soltar las armas y continuar por el camino de la democracia. Luego de una victoria con el 62% de los votos, pensar en gobernar con ese apoyo en algún momento es una expectativa interesante³⁹.

Para concluir, en el caso de Kenia, se observa que las armas y la violencia son aquello que entorpece la trayectoria democrática de un país. El proceso en Kenia es particular porque no existió una facción en contra del gobierno en términos de insurgencia; lo que había era una oposición, aunque desarticulada. Sin embargo, la administración de Daniel arap Moi desarrolló una estrategia de terrorismo de Estado para evitar la democratización del país y mantener un gobierno de corte autoritario. En particular, activó política y militarmente clivajes étnicos e, invocando el Majimboismo,

³⁹ Uno de los supuestos de este argumento se asienta en que las administraciones de Daniel arap Moi recurrieron a las prácticas autoritarias dado el magro apoyo electoral en las elecciones de 1992 y 1997.

desató una seguidilla de luchas en calidad de limpiezas étnicas. Las elecciones del 2002 son vistas, en general, como el primer traspaso de poder pacífico en la historia de Kenia. El motivo por el cual el gobierno de Kibaki no recurrió a la misma estrategia, a pesar de poseer a los ideólogos de la misma en su gabinete, se debió a la falta de incentivos robustos para tomar las armas. El NARC ganó las elecciones con el 62% de los votos, en elecciones libres y justas. La esperanza de parte de los desertores del KANU de poder gobernar un país con ese respaldo –apoyo que jamás había recibido Moi- puede haber funcionado como una motivación para no interrumpir, en este caso, el curso político del país.

VIII

UGANDA: 1990 – 2006

“The people here are fed up. Even the ordinary man says no, peace talks are not possible.

The only opportunity [for peace] is maintaining the military option.”

Teniente Chris Magezi, portavoz del ejército de Uganda; en: Eichstaedt, 2009

Tras haber rastreado el proceso de democratización no asistido en Kenia, el objetivo de este capítulo se basa en indagar sobre dicho proceso en otro país donde, a pesar de presentar una de las crisis humanitarias más graves, no presencié una IMH. Una vez más, se intentará someter a juicio el argumento elaborado en los capítulos precedentes, y observar cómo se ajusta a Uganda.

Uganda es un caso de una democratización que no fue. País que una vez fue rotulado “faro de esperanza” por Madeleine Albright, Uganda se ha sabido ganar su lugar dentro del grupo de los países cuya trayectoria se ha bifurcado del sendero hacia la democracia. Desde 1986, el pueblo ugandés no ha sido testigo de una rotación en el cargo ejecutivo; Yoweri Museveni ha logrado consolidar su poderío y blindar el acceso a los puestos más altos dentro de la administración pública. Dicha solidificación convivió con uno de los conflictos intra-estatales más violentos y sanguinarios de la era contemporánea. Hay cierto acuerdo en la literatura acerca de que la administración de Museveni, hasta el 2006, presenta dos etapas claramente distinguibles. En la primera fase, desde 1986 a 1995 aproximadamente, Museveni se vio en la necesidad de

construir legitimidad; y su objetivo fue hacerlo a través del impulso de un programa que, al menos, en su retórica era democrático. No obstante, el segundo período, que abarca desde 1996 hasta 2006, evidenció la emergencia de un sistema político “de un solo hombre”, sin nada que envidiarle a los autoritarismos de raza. Por lo tanto, surgen las siguientes preguntas: ¿qué ocurrió en Uganda para que el diagnóstico de Albright acabe por ser tan errado?, ¿cómo convivieron el proceso de democratización y la guerra civil? Y más importante aún, ¿cuál fue el impacto de dicha convivencia?

Situación antecedente

Para comprender la conflictividad en la que se halla inmersa Uganda, es menester indagar sobre la historia política correspondiente al período de la post-independencia y el entramado étnico, religioso, y socio-económico que subyace al conflicto⁴⁰ (Kasfir, 1998). En el año 1962, luego de la liberación del yugo británico, Milton Obote –un hombre proveniente del norte- llega a la presidencia con el proyecto de integrar el sistema de monarquías tribales que pre-existía en Uganda. En 1971 es derrocado, mediante un golpe de Estado, por Idi Amin, el militar de más alto rango del gobierno de Obote. Amin instaló un régimen alrededor de la cultura del terror. Fue una de las experiencias más dramáticas de Uganda, con un saldo de aproximadamente 300.000 muertos (Eichstaedt, 2009). En 1979, tras una campaña militar desastrosa en Tanzania, Amin se retiró al exilio. Un año más tarde, Milton Obote recuperó el poder a través de elecciones –en las que el fraude no estuvo ausente (ICG, 2004). Entre los vencidos se encontraba Yoweri Museveni, un comandante de origen sureño. Frente al

⁴⁰ Tanto la identidad étnica como regional son asuntos centrales en la política ugandesa. A su vez, hay una asociación fuerte entre el regionalismo y el nivel socioeconómico, producto del desarrollo económico histórico de las regiones. En particular, el sur gozó de una mayor prosperidad que el norte y el oeste. (Kasfir, 1998)

descontento por el resultado de las elecciones, Museveni formó su propia guerrilla, el Ejército Nacional de Resistencia (NRA), con el objeto de debilitar el gobierno de Obote y eventualmente derrocarlo. Sin embargo, en 1985 Obote fue destituido a través de un golpe de Estado por miembros de su propio ejército. En un intento de pacificación, Tito Okello –el nuevo presidente- negoció un acuerdo de paz con Museveni. Mas éste fue de corta vida; pues en 1986 Museveni, junto con el NRA, se apoderó del gobierno (Kasfir, 1998; ICG, 2004; Eichstaedt, 2009; Omach, 2009).

Los orígenes de la Pax Musevenica y una pseudo-transición. Museveni llegó a la presidencia a través de una estrategia ya conocida por los ugandeses: el golpe de Estado. Sin embargo, en su ceremonia de juramento, el presidente prometió que un cambio fundamental era lo que le deparaba el futuro a Uganda: “No one should think that what is happening today is a mere change of guard; it is a fundamental change in the politics of our country” (Museveni, 1997; en Muhumuza, 2009: 23). Incluso, Museveni anunció que los tres pilares sobre los que asentaba su proyecto político eran la creación de un sistema democrático, el restablecimiento de la seguridad, y la consolidación de la unión nacional (Omach, 2009). En este sentido, su objetivo primero se orientó a restaurar la confianza de los ciudadanos, en vistas a construir legitimidad (Rubongoya, 2007). Efectivamente, Museveni logró cosechar el apoyo del pueblo ugandés, a partir de una serie de políticas que se encontraban en coincidencia con la retórica democrática que promulgaba su líder. No obstante, si bien una serie de las reformas que impulsó sí se hallaban en la línea de una transición a la democracia, otras fueron de difícil justificación y dudoso propósito.

El “Programa de los Diez Puntos” era una suerte de manifiesto del NRA⁴¹ en el cual se encontraban contenidas las políticas a las que pensaba darle curso Museveni. Aquí se mencionarán, por motivos de parsimonia, solamente tres de ellas: la concepción de la “Democracia sin partidos”, la reconfiguración de la estructura política en Consejos Locales (LCs), y la reforma de la Constitución Nacional. Una de las innovaciones del NRM-A fue la creación y puesta en práctica de una “Democracia sin partidos” –o “Democracia de movimiento”, como fue luego bautizada (Kasfir, 1998; Rubongoya, 2007; Muhumuza, 2009). A la luz de las concepciones occidentales sobre democracia, este concepto es un sin sentido; en un intento por explicar la esencia de este sistema político, Kasfir señala:

Unlike Western societies, where parties represent different classes and interests and thus offer different economic programs, Uganda, according to Museveni, is a rural society composed predominantly of peasants with essentially the same economic interests. Unable to attract votes by advocating distinctive economic policies, Ugandan parties turn instead to ethnic, regional, and religious appeals, breeding strife and diverting people from the important issues that affect their livelihoods. In short, says the president, ‘Tribalism, religion, or regionalism becomes the basis for intense partisanship. There is no healthy basis for honest competition’. (1998: 59)⁴²

Por lo tanto, de acuerdo con Museveni, los partidos políticos eran perjudiciales para Uganda de acuerdo con la situación histórico-política en la que el país se encontraba. Dada la fragmentación de Uganda en términos étnicos, religiosos y socio-económicos, la activación de parte de los partidos políticos de estos clivajes con el objetivo de adquirir

⁴¹ De ahora en adelante se llamará NRM-A, que obedece a su nombre en inglés: *National Resistance Movement – Army*.

⁴² A partir de la justificación que aporta Museveni sobre la exclusión de los partidos políticos de la contienda electoral, Kasfir concluye que, si ése es efectivamente el motivo, entonces una vez que Uganda se modernice, debería adoptar un sistema político multipartidista: “The clear implication is that no-party democracy has become a transitional device pending the day when Uganda can become a “real” multiparty democracy” (Kasfir, 1998: 61)

votos, era contraproducente en nombre de la unidad nacional. De esta forma, en la “Democracia sin partidos”, cualquier individuo podía presentarse a elecciones, con sus méritos personales como únicas credenciales –y, según Museveni, dicha práctica era lo que hacía que Uganda no sea un sistema unipartidario (Cullimore, 1994).

Otra de las iniciativas propuestas por el NRM-A fue la organización de la estructura política en un sistema de cinco niveles con sus respectivos Consejos de Resistencia (RCs) o Consejos Locales (LCs): “the village council (RC1), parish council (RC2), sub-county council (RC3), county council (RC4) and district council (RC5)” (Muhumuza, 2009: 24). Los Consejos de Resistencia, al menos al nivel de la aldea, funcionaron efectivamente como mecanismos de participación popular directa, en los que, como ya fue mencionado, cualquier individuo podía presentarse a elecciones para formar parte del Consejo⁴³ (Kasfir, 1998; Rubongoya, 2007; Muhumuza, 2009; Omach, 2009). Como se observa, esta remodelación se encuentra en línea con la “Democracia de movimiento”. Desde el momento en que cualquier individuo podía presentarse como candidato para miembro del Consejo de Resistencia de su aldea, éste lo hacía por fuera del sistema occidental de política partidaria. Y, en este sentido, estaba dando su aprobación tácita al movimiento de Museveni.

Finalmente, ya desde 1988, Museveni abogó por la reforma de la Constitución Nacional. En ese mismo año se creó la Comisión Constitucional, cuya tarea se basó en recorrer el país, relevando las necesidades, inquietudes y propuestas políticas de los Consejos de Resistencia (RC1). El propósito era crear una Constitución que sea considerada legítima y reciba el apoyo de la mayoría del pueblo ugandés, en línea con los objetivos de unidad nacional que se había planteado el gobierno de Museveni

⁴³ Según señala Muhumuza (2009), mientras que los miembros de los consejos al nivel de la aldea eran electos mediante el sufragio directo de los ciudadanos, los consejos pertenecientes a los otros cuatro niveles eran electos de manera indirecta por los miembros del nivel inferior.

(Cullimore, 1994; Rubongoya, 2007; Muhumuza, 2009; Omach, 2009). En el año 1995, finalmente, se sancionó la Constitución renovada y se programaron las elecciones a presidente para diciembre del corriente.

Guerra civil en Uganda

Al mismo tiempo que el NRM-A estaba incursionando en estas transformaciones políticas en pos de la democracia, la seguridad y la reconciliación nacional, grupos insurgentes buscaban disputarle el poder –continuando con la lógica político-militar que se había desarrollado en Uganda desde la post-independencia. La estrategia del gobierno, desde el comienzo, fue abordar el problema en términos netamente militares. De esta manera, frente a la ofensiva de dichos grupos, el brazo militar del NRM-A respondió con tácticas de contrainsurgencia.

El UPDA (*Uganda's People Democratic Army*) fue uno de los primeros en presentarle un desafío al recién asumido NRM-A. Era un grupo guerrillero, proveniente del norte (específicamente, de la etnia Acholi) que resintió la derrota de Okello frente a Museveni. Al desconfiar de las intenciones conciliadoras del presidente, se lanzaron a la guerrilla y comenzaron una guerra civil contra el gobierno (Eichstaedt, 2009). Como fue mencionado, el NRM-A respondió militarmente; de acuerdo al informe del International Crisis Group, “The 1988 NRA counter-insurgency was brutal, including deliberate destruction of civilian food stocks and domestic animals” (ICG, 2004: 4). Luego de una iniciativa fracasada de parte del UPDA, en 1988 firmaron un acuerdo de paz con el gobierno (ICG, 2004).

Paralelamente, otra fuerza bélica se estaba gestando en el norte. Alice Auma, posteriormente conocida como Alice Lakwena, comenzó a reclutar adeptos a su secta religiosa *Holy Spirit Movement*. El atractivo de la propuesta de Alice Lakwena radicaba

en que ella proclamaba haber sido visitada por un espíritu, que le había ordenado hacerle la guerra al gobierno, por su invasión de la tierra Acholi (Omara-Otunnu, 1992; ICG, 2004). El movimiento de Lakwena, que luego pasó a llamarse *Holy Spirit Mobile Forces* (HSMF), presentó un verdadero desafío al gobierno. Ambos ejércitos se enfrentaron en una lucha armada salvaje: “As reported in the press, her encounters with the N.R.A. resulted in carnage” (Omara-Otunnu, 1992: 456). Eventualmente, debido al desbalance militar entre HSMF y el ejército nacional, el movimiento de Lakwena fue disuelto y reducido a la irrelevancia (Eichstaedt, 2009)⁴⁴.

Contemporáneo a Alice Lakwena es Joseph Kony, líder fundador de la guerrilla LRA (*Lord's Resistance Army*). Incluso, su movimiento es la continuación directa de HSMF (ICG, 2004; Finnström, 2006). Kony, al igual que Alice, alegó haber sido visitado por un espíritu que lo instó a iniciar una guerra contra el mal, y a enseñarle a la gente a seguir a Dios (Eichstaedt, 2009); el LRA manifiesta que su propósito es ponerle un fin tanto a la marginalización del pueblo Acholi (aunque esto no coincide con su estrategia bélica), como al régimen de Museveni (CSOPNU, 2006). Siguiendo a Omara-Otunnu, tanto Alice Lakwena como Kony, “[were] merely [vehicles] through which social discontent in the north of Uganda found expression” (1992: 458). El LRA es un ejército que recluta a la mayor parte de sus miembros a partir de secuestros de niños, que luego son convertidos en soldados (los llamados *child soldiers*); al mismo tiempo, el ejército también secuestra niñas y jóvenes, que son explotadas como parejas sexuales de los combatientes (las llamadas *child brides*) (Pham et al., 2008; Eichstaedt, 2009). El LRA opera en el norte de Uganda, aunque también tiene bases en el sur de Sudán y en la República Democrática del Congo (bases que son utilizadas para reagruparse, en caso de ataques de parte del gobierno). A diferencia del destino que sufrieron UPDA y HSMF,

⁴⁴ Lakwena se exilió a Kenia, donde falleció en un campo de refugiados (Eichstaedt, 2009).

el gobierno no ha podido vencer al LRA, a pesar de implementar la misma técnica de contrainsurgencia previamente utilizada. Actualmente, la guerra contra el LRA data de más de veinte años; según cuenta Eichstaedt, “The LRA war in northern Uganda has been going on for so long that most have forgotten why” (Eichstaedt, 2009: 4).

En la guerra contra el gobierno de Museveni, la motivación del LRA se reduce a provocar el descrédito de parte de la población ugandesa hacia el gobierno de Museveni a partir del fomento y enardecimiento del descontento de, principalmente, la población Acholi del norte de Uganda (ICG, 2004). Mas la estrategia para llevar adelante su objetivo es brutal y desconcertante, pues atenta contra la misma población Acholi. Tal como fue mencionado, el grueso de sus soldados son reclutados a partir del secuestro; sin embargo, la llegada de combatientes del LRA a una aldea significa el saqueo de la misma y el asesinato (ICG, 2004; Eichstaedt, 2009)⁴⁵.

Behind the abductions is a carefully crafted element of the war. Children and young girls are meant to provide labour and sex, as well as serve as weapons of terror against their own parents and community, creating in the process a sense of hopelessness, despair and hatred for the government. (ICG, 2004: 6)

La situación en el norte de Uganda no puede describirse sino como una crisis humanitaria, como “the world’s largest forgotten emergency” (Egeland, 2003; en CSOPNU, 2006: 7; ICG, 2004; Finnström, 2006; Pham et al., 2008; Eichstaedt, 2009). De acuerdo con Pham et al., entre 1986 y 2006, el LRA secuestró aproximadamente entre 54.000 y 75.000 personas, entre las que se encontraban entre 25.000 y 38.000 niños (Pham et al., 2008). A su vez, en el informe de las Sociedades Civiles para la Paz en el Norte de Uganda (CSOPNU) se expone un relevamiento de datos sobre el conflicto: 202

⁴⁵ En su prólogo, Eichstaedt (2009) relata la historia de un *ex-child soldier* que narra el momento en el que fue secuestrado y obligado a asesinar a sus padres. Este modus operandi no es casual, sino que es sistemático.

son los campos de refugiados en el norte de Uganda, en los que habitan entre 1.8 y 2 millones de personas (figura que representa el 8% de la población total de Uganda); la tasa de muerte violenta, para el año 2005, era tres veces más alta que aquella reportada en Irak en 2003, o la registrada en Darfur en el mismo año (CSOPNU, 2006). De acuerdo con el testimonio tomado por el periodista Eichstaedt, de uno de los miembros de los Consejos de Resistencia (CR) del norte asevera, “The solution to the LRA problem [is] to bring in an international force of peacekeepers” (2009: 28).

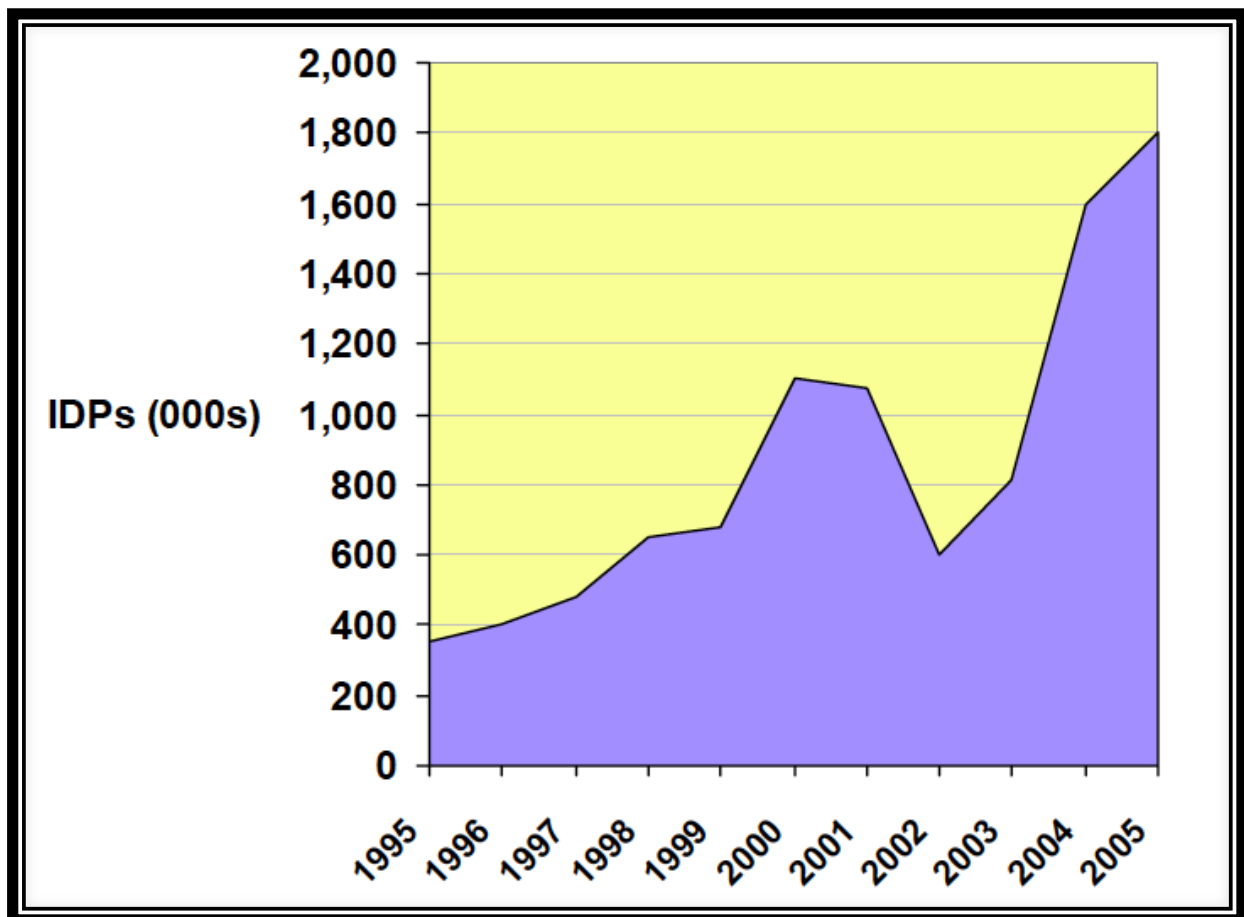


FIGURA 11. Desplazados internos en el norte de Uganda.
Fuente: CSOPNU, 2006

En 2005, el Tribunal Penal Internacional comenzó un proceso de enjuiciamiento en el que se acusó a Joseph Kony y cuatro de lo más altos comandantes del LRA de crímenes de lesa humanidad, entre los que se incluían el asesinato, el secuestro, y la esclavitud

sexual, entre otros. “Many wondered what would change with the issuance of these indictments. In short, nothing changed” (Eichstaedt, 2009: 9).

Frente al panorama de aberraciones descrito, una pregunta no menor refiere al rol del gobierno en la protección de los civiles. En particular, el NRM-A desarrolló la misma estrategia militar empleada contra UPDA y HSMF; la diferencia, en el caso del LRA, fue que la contrainsurgencia se prolongó por más de veinte años. Así, el conflicto con el grupo de Kony se convirtió en una guerra sucia, en la que los civiles fueron (y son) las principales víctimas de la violencia, no sólo de parte de la guerrilla, sino también del ejército nacional (CSOPNU, 2006; Eichstaedt, 2009). Una de las operaciones militares más importantes que se lanzó contra el LRA fue la Operación Puño de Hierro (Operation Iron Fist) en 2002. Luego de conseguir la aprobación de Sudán, las tropas ugandesas ingresaron al país en la búsqueda de Kony, con el objetivo de darle un golpe tan fuerte al LRA que acabe por desestabilizarlo (MFPED, 2003; CSOPNU, 2006). Oficialmente, la iniciativa fue considerada un éxito; se logró desalojar al LRA de Sudán, se capturaron armas y municiones, y se rescataron alrededor de 6.000 individuos (MFPED, 2003). Sin embargo, también contó con una externalidad significativa, pues el hecho de que el LRA haya abandonado el sur de Sudán significó su retorno al norte de Uganda. Incluso, dicho retornó se tradujo en una reincidencia de las masacres en el pueblo Acholi y en ataques a las organizaciones humanitarias (MFPED, 2003; CSOPNU, 2006). Según el informe del Ministerio de Finanzas, Planeamiento y Desarrollo Económico de Uganda, “Between June and September 2002, more lives and property were lost than in the whole of 2001” (MFPED, 2003: 21).

De acuerdo con el International Crisis Group (2004), el análisis sobre la continuación del conflicto no debe ser escindido del estudio sobre la situación política en Uganda. Nuevamente, lejos de ser una teoría conspirativa, hay acuerdo en la

literatura acerca de la rentabilidad política que le genera al NRM-A la continuación de la guerra civil (ICG, 2004; Mwenda, 2007; Omach, 2009). Según Mwenda, “(...) in every district or ethnic community that has faced a rebel group, the government has trained and armed a local ethnic militia as a response” (2007: 32). La justificación para la proliferación de grupos armados paramilitares se asentaba en la necesidad inmediata de hacerle frente a la guerra. Sin embargo, el autor denuncia que dichas milicias extraoficiales sirven a los propósitos de coaccionar contra miembros de la oposición, con costo político mínimo (Mwenda, 2007). De esta manera, la continuación del conflicto funciona a los efectos del control y la merma de las libertades civiles de la población en general, y de los miembros de la oposición política en particular (ICG, 2004; Mwenda, 2007). Según Omach, “(...) by attempting to link its political opponents with armed rebel groups, the NRA/M government has found it convenient to use conflicts to suppress political opposition and to militarize society” (2009: 16). Así, “Continuation of the conflict provides a crisis environment that enables the government to justify measures that would be unacceptable in different circumstances (...)” (ICG, 2004: 11); aquellas medidas refieren, específicamente, a la concentración del poder en la figura de Museveni, y a la transición de Uganda, no hacia la democracia, sino hacia un régimen unipersonal, hegemónico, y represivo.

La consolidación (de Museveni en el poder)

Prueba de lo dicho es la historia política de Uganda entre el período que abarca desde 1996 y 2006. En 1996 tuvieron lugar las primeras elecciones para presidente, desde que Museveni llegó al poder 10 años atrás; Museveni logró obtener el 74.2% de los votos, frente a un magro 23.7% de parte del primer finalista. Tanto Rubongoya (2007), como Muhumuza (2009) coinciden en que dos de los factores claves que

contribuyeron a esta victoria avasallante fueron el control de los recursos del Estado de parte del NRM-A –así como el armado de una red clientelar-, y la dificultad de parte de los candidatos opositores para ingresar en el juego político sin una estructura que sea capaz de aglutinar preferencias sociales y resolver problemas de acción colectiva. Una de las iniciativas más relevantes durante el mandato entre 1996 y 2001 fue la impulsión de la Ley de Movimiento (*Movement Act*) en 1997, un proyecto orientado a transformar legalmente a todos los ugandeses en “movimientistas”, a saber, miembros del movimiento NRM-A. De acuerdo con Rubungoya, “Clearly, the [Movement Act] legalized the existence of a single, omnipresent, and omnipotent political organization, the NRM, that was intent on circumscribing opposition to or separation from the state” (2007: 140). A su vez, según comenta el autor, durante este período se acrecentaron los cuestionamientos acerca de la imposibilidad de los candidatos de presentarse a elecciones bajo una bandera partidaria (Rubungoya, 2007). En el año 2001 se convocó nuevamente a elecciones, y Museveni resultó ganador con el 69.3% de los votos; sin embargo, estas elecciones resultaron significativas para el líder de NRM-A, pues, constitucionalmente, serían la última oportunidad para competir en los comicios.

A partir de 2001 se acrecentó notablemente la intolerancia, la represión, y las violaciones a las libertades individuales (Freedom House, 2006; Omach, 2009). La intimidación y encarcelamiento a opositores bajo alegaciones de sedición, el cierre de estaciones de radio independientes y la amenaza a la prensa escrita estuvieron a la orden del día; “Security has been the regime’s cry in all cases” (Mwenda, 2007: 33). Durante el período 2001-2006, dada la restricción constitucional a la ocupación de la presidencia por más de dos períodos, Museveni promovió la reforma de la Constitución Nacional. Las dos renovaciones más importantes incluyeron, por supuesto, la eliminación del límite de los dos períodos para el cargo de presidente, y la

reintroducción del sistema de partidos multipartidario (Mugisha, 2004; Mwenda, 2007; Rubungoya, 2007; Omach, 2009). Efectivamente, la reforma obtuvo el curso esperando por Museveni, y en el año 2006 se presentó nuevamente a elecciones y obtuvo el 59% de los votos, inaugurando otro mandato más (Freedom House, 2007). No obstante, las elecciones de 2006 fueron particularmente escandalosas puesto que Besigye, el principal candidato opositor, fue encarcelado en el mes anterior a la celebración de las elecciones, bajo cargos de traición y terrorismo (Mwenda, 2007). A partir de lo expuesto, se observa que la transición que efectivamente está teniendo lugar en Uganda es hacia un sistema no democrático, basado en el gobierno de un solo hombre (Mugisha, 2004; Mwenda, 2007).

Candidates	Unspecified "Party" Affiliation	Percent of Vote in 1996 Election
Yoweri Museveni	NRM	74.2
Paul Ssemogerere	IPC (DP, UPC, & NLC)	23.7
Muhammed Mayanja	Independent	2.1
<i>Sources: Siegmar Schmidt, "Uganda," in Dieter Nohlen, Michael Krennerich, and Bernhard Thibau (eds.), Elections in Africa: A Data Handbook (Oxford: Oxford University Press, 1999), p. 934.</i>		
Candidates	Unspecified "Party" Affiliation	Percent of Vote in 2001 Election
Yoweri Museveni	NRM	69.3
Muhammed Mayanja	Independent	1.0
Kiiza Besigye	NRM ("unofficial")	27.8
Aggrey Awori	Independent	1.4
Others (2)	Independents	0.5
<i>Source: "Elections in Uganda," http://www.electionworld.org/election/uganda.htm</i>		

TABLA 15. Resultados de las elecciones para presidente en Uganda en 1996 y 2001.
Fuente: Rubungoya, 2007

¿Cuál es el balance que se puede hacer sobre la democratización en Uganda? En 2006, fecha en que se cumplió el vigésimo aniversario del conflicto con LRA, Uganda aún no había logrado entrar al club de las democracias. Es cuestionable aseverar que el motivo principal para este estancamiento político obedece a la guerra civil en el norte. Sin embargo, ésta sí adquiere uno de los papeles protagónicos en la explicación. La perpetuación del conflicto con el LRA le permitió al NRM-A de Museveni justificar tendencias autoritarias en un contexto en el que, desde la retórica, se abogaba por la democracia. Así, bajo la excusa de la guerra, se observó un ataque contra las libertades individuales y políticas, que sirvió como plataforma para el alejamiento cada vez más acentuado de un sistema democrático –en 2006, Museveni cumplía su vigésimo aniversario en el poder. En línea con el argumento propuesto en los capítulos precedentes, la militarización de la política, a partir de la toma de las armas tanto del gobierno como de la facción rebelde, impidió el desarrollo de la democracia desde el momento en que dicho estado permite la alteración del curso de la política por medios violentos. El hecho de que no se haya llegado a un *impasse* militar producto del propio combate, o que no se haya intentado provocar exógenamente dicho balance de poder, retrasó cualquier intento de una democratización seria.

CONCLUSIONES

Esta investigación tuvo como objetivo someter a prueba la tesis del Liberalismo de Imposición. En este sentido, se propuso para examinar si, efectivamente, es factible salir en el auxilio de aquellos Estados que se encuentran atravesando un contexto de vorágine y librando a la orfandad a sus ciudadanos. Así, se exploró si, a través de la política de intervención militar humanitaria, era posible provocar el alivio de las poblaciones y exportar la democracia en calidad de sistema de gobierno respetuoso de la libertades individuales, y atento hacia la participación ciudadana en la elección de los representantes –entre otros atributos.

Siguiendo este propósito, el capítulo I abordó la cuestión acerca de la conceptualización del término, con el propósito de ofrecer mayor claridad al debate; a su vez, se analizó la trayectoria de la ONU en su faceta intervencionista y se especificó el motivo por el cual la investigación iba a ofrecer un panorama global, mas luego se iba a concentrar en África Sub-Sahariana. En el capítulo II se presentaron las dos posturas dentro de la literatura, en tanto voces a favor y en contra de la IMH como política capaz de traer la paz y la democracia. A su vez, se delinearon las hipótesis: (i) es de esperar que una IMH mejore la trayectoria democrática de un país; (ii) es de esperar que una IMH, en países con un PBI per cápita más alto, mejore aún más su trayectoria democrática (para el estudio restringido a África Sub-Sahariana se incluyó también la participación de la clase media en la economía); y (iii) es de esperar que en países exportadores de petróleo y minerales, una IMH tenga un efecto mermado sobre su trayectoria democrática. También se especificaron las variables para la investigación, de cara al análisis que se llevó adelante en los capítulos venideros.

En el capítulo III se desplegó el análisis cuantitativo a nivel global sobre la relación entre IMH y democracia; efectivamente, se encontró que, en el plano mundial, el efecto de las IMHs sobre el nivel de democracia del país intervenido es positivo y significativo, mas no es inmediato. Es decir, el impacto *democratizador* de la IMH es percibido luego de cuatro años de iniciada la intervención, independientemente de la cantidad de años de la misma. Por otro lado, en el capítulo IV se exploró dicha relación pero sólo para la región de África Sub-Sahariana. Nuevamente, se encontró que el impacto de una IMH sobre la democratización del país intervenido es positiva y significativa. No obstante, a diferencia de la sección anterior, los resultados arrojaron que, en esta región, el efecto *democratizador* de la IMH es más inmediato, pudiendo observarse dentro de tres años o menos de iniciada la intervención.

Los capítulos V, VI, VII y VIII se ocuparon del análisis cualitativo, para los países de Mozambique, Angola, Kenia, y Uganda, respectivamente. El objetivo detrás del empleo de la metodología de estudio de caso era reconocer el mecanismo causal que explica cómo opera la relación identificada en los capítulos III y IV. A partir del estudio comparado de los casos, se llegó a la conclusión de que la desmovilización y el desarme de las fuerzas de choque, previo a la celebración de elecciones –en tanto hito de la transición hacia la democracia- constituyen un importante mecanismo que opera en la relación entre las variables.

Es menester dedicarle un apartado a la diferencia en los resultados obtenidos en los capítulos III y IV. Como ya fue mencionado, la particularidad del análisis de África Sub-Sahariana radica en que el efecto de la política de IMH se puede observar en un período de tres años o menos. Y, a primera vista, podría lucir contra-intuitivo, pues la mayoría de los Estados africanos presentan un panorama desalentador en términos de conflictividad, o de su nivel de democracia. ¿Cómo se explica esto? Es mi opinión que, en

un contexto de ausencia de la democracia, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, y desprotección de parte del Estado de sus ciudadanos, un avance hacia un sistema de gobierno democrático –traducido en elecciones libres y competitivas, extensión del sufragio, o incluso respeto por la decisión popular en las urnas- aparece como un cambio de magnitud superlativa. Sin embargo, como una ilusión óptica, este cambio es extraordinario, sólo en comparación con la decadencia de la situación anterior. En términos del indicador Polity IV, estos hechos pueden significar el pasaje desde un puntaje negativo en su sistema político, hacia uno positivo. No obstante, este puntaje no deja de ser magro en términos comparados, o en referencia a su propia escala. Es más, también puede ser el caso (como en Mozambique) de que dicho puntaje se congele por varios años; y el motivo detrás de esto es que una vez puestos los cimientos y hecho el trabajo pesado, resulta de una dificultad superior escalar en el nivel de democracia, puesto que dicho asenso tiene una exigencia mayor. En otras palabras, si bien los cambios durante la transición hicieron que el país logre calificar como una democracia, ésta es una muy frágil. Es precisamente esto lo que no se logra percibir con la investigación realizada. Si bien los resultados arrojan que el impacto *democratizador* de una IMH en África Sub-Sahariana existe, es positivo, y ocurre en un plazo menor o igual a tres años, esto no permite hablar de la calidad del sistema de gobierno.

Otro de los puntos que merece atención es observar qué representan los casos estudiados en términos de *eslabón perdido*. A partir del análisis de la historia política de los casos en cuestión, se logró identificar el mecanismo causal. Como ya fue mencionado, la desmovilización y el desarme de las fuerzas de choque previo a la celebración de elecciones, como indicador del comienzo del período de transición, es un mecanismo que actúa en la relación entre IMH y democracia. En este sentido, se le

extrae a las facciones en conflicto la capacidad militar para alterar mediante el recurso de las armas los resultados obtenidos en las urnas. No obstante dicho descubrimiento, la investigación adolece en un punto. Y es que hay un elemento no contemplado –o quizá al cual no se le adjudicó la importancia que merece- que puede explicar la diferencia en las trayectorias de los casos. Éste es la existencia de compromisos de largo plazo de parte de los actores locales, regionales e internacionales. El motivo es que resultan fundamentales en tanto puntapiés disparadores de cualquier proceso de paz. Mas dichos compromisos son contingentes, a menudo se explican por factores exógenos, y no permitirían extraer conclusiones generales sobre el impacto de esta política.

Por último, el impulso para llevar adelante este trabajo siempre consistió en poder llegar a conclusiones en términos de recomendaciones de política. Al respecto, el hecho de saber que una IMH puede generar un impacto en el nivel de democracia es un hallazgo considerable. Sin embargo, a partir del estudio de los casos se logró identificar algo más, justamente relacionado con la posibilidad de alterar las configuraciones de preferencias de las facciones en conflicto. Al explorar el caso de Angola, se observó que la voluntad de los actores locales se veía seriamente influida por la capacidad financiera para auto-sustentarse; y dicha capacidad provenía de la explotación de los recursos naturales. Y es aquí donde se tienen que apuntar los dardos. Lamentablemente esta investigación no arremete contra este obstáculo, con lo cual queda pendiente para futuros análisis. Sin embargo, considero que el hecho de no contar con fuentes independientes de ingresos para costear la guerra tiene un impacto más que sustancial en la propensión de las facciones a sentarse a la mesa de negociación y, así, agilizar el proceso de paz. Por tanto, estimo que esta es una de las piedras de toque en la resolución de conflictos y promoción de la democracia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acemoglu, D. et al. (2008). “Income and Democracy”. *The American Economic Review*, Vol. 98 (No. 3), pp. 808-842.
- Adebajo, A. y Landsberg, C. (2000). “Back to the future: UN peacekeeping in Africa”. *International Peacekeeping*, Vol. 7 (No. 4), pp. 161-188.
- Africa Watch (1993). “Divide and Rule. State-Sponsored Ethnic Violence in Kenya”. *Human Rights Watch*, pp. 1-130.
- Ahmed, S., Keating, P., y Solinas, U. (2007). “Shaping the future of UN peace operations: is there a doctrine in the house?” *Cambridge Review of International Affairs*, Vol. 20 (No. 1), pp. 11-28.
- Ajello, A. (1999). “Mozambique: Implementation of the 1992 Peace Agreement”. En Crocker, C. A., Hampson, F. O., y Aall, P. (eds.) *Herding Cats: multiparty mediation in a complex world* (pp. 615-642). Washington: United States Institute of Peace.
- Ajello, A. y Wittmann, P. (2004). “Mozambique”. En Malone, D. M. (ed.) *The UN Security Council. From the Cold Ward to the 21st Century* (pp. 437-450). Colorado: Lynne Rienner Publishers, Inc.
- Alesina, A. et al. (2003). “Fractionalization”. *Journal of Economic Growth*, Vol. 8 (No. 2), pp. 155-194.
- Annan, K. (1998). “The Causes of Conflict and the Promotion of Durable Peace and Sustainable Development in Africa”. *Informe del Secretario General de las Naciones Unidas*, pp. 1-21.

- Anstee, M. J. (1996). “A tragedy not to be forgotten”. *The World Today*, Vol. 52 (No. 7), pp. 190-191.
- Apollos, M. (2001). “Ethnicity, violence and democracy”. *Africa Development*, Vol. 26 (No. 1), pp. 99-144.
- Arellano, M y Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations”. *The Review of Economic Studies*, Vol. 58 (No. 2), pp. 277-297.
- Barkan, J. D. (1993). “Kenya: Lessons from a Flawed Election”. *Journal of Democracy*, Vol. 4 (No. 3), pp. 85-99.
- Barkan, J. D. (1998). “Toward a New Constitutional Framework in Kenya”. *Africa Today*, Vol. 45 (No. 2), pp. 213-226.
- Barkan, J. D. (2004). “Kenya After Moi”. *Foreign Affairs*, Vol. 83 (No. 1), pp. 87-100.
- Barkan, J. D. Y Ng’ethe, N. (1998). “Kenya Tries Again”. *Journal of Democracy*, Vol. 9 (No. 2), pp. 32-48.
- Barnett, M., (2003). “Bureaucratizing the Duty to Aid: The United Nations and Rwandan Genocide”. En Lang Jr., A (ed.) *Just Intervention* (174-191). Georgetown: Georgetown University Press.
- Barro, R. J. (1999). “Determinants of Democracy”. *Journal of Political Economy*, Vol. 107 (No. S6), pp. S158-S183.
- Bartoli, A. (1999). “Mediating Peace in Mozambique: The Role of the Community of Sant’Egidio”. En Crocker, C. A., Hampson, F. O., y Aall, P. (eds.) *Herding Cats: multiparty mediation in a complex world* (pp. 245-274). Washington: United States Institute of Peace.

- Baum, C. F. (2006). *An introduction to modern econometrics using Stata*. Texas: Stata Press.
- Beach, D. y Pedersen, R. B. (2011). “What is process tracing actually tracing? The three variants of process tracing methods and their uses and limitations”. Paper presentado en *The American Political Science Association annual meeting*. Seattle, Washington, USA, pp. 1-35.
- Bekoe, D. A. (2008). *Implementing Peace Agreements. Lessons from Mozambique, Angola and Liberia*. New York: Palgrave Macmillan.
- Bellamy, A., (2004). “Motives, Outcomes, Intent and the Legitimacy of Humanitarian Intervention”. *Journal of Military Ethics*, 3(3) pp. 216 – 232
- Bellamy, A. y Wheeler, N. (2011). “Humanitarian Intervention in World Politics”. En Baylis, J., Owens, P. y Smith, S. (eds.) *The Globalization of World Politics* (510 – 525). Oxford: Oxford University Press.
- Berman, E. G, y Sams, K. E. (2000). “Peacekeeping in Africa: capabilities and culpabilities”. *United Nations Institute for Disarmament Research*, pp. 1-539.
- Boutros-Ghali, B. (1992). “An Agenda for Peace. Preventive diplomacy, peace-making and peacekeeping”. *Informe del Secretario General de las Naciones Unidas*, pp. 1-23.
- Boutros-Ghali, B. (1995). “Supplement to an Agenda for Peace: Position Paper of the Secretary-General on the Occasion of the Fiftieth Anniversary of the United Nations”. *Informe del Secretario General de las Naciones Unidas*, pp. 1-24.
- Brinkley, D. (1997). “Democratic Enlargement: The Clinton Doctrine”. *Foreign Policy*, No. 106, pp. 110-127.

- Brown, C., (2006). “Selective humanitarianism: in defence of inconsistency”. En Chatterjee, C. K. y Scheid, D.E. (eds.) *Ethics and Foreign Intervention* (31-50). Cambridge: Cambridge University Press.
- Brown, S. (2002). *Quiet Diplomacy and Recurring ‘Ethnic Clashes in Kenya’* [en línea]. Toronto: University of Toronto. Consultado el 30 de abril de 2013 en: <http://isanet.ccit.arizona.edu/noarchive/brownstephen.html>
- Bueno de Mesquita, B. y Downs, G. W. (2006). “Intervention and Democracy”. *International Organization*, Vol. 60, No. 3, pp. 627-649.
- Call, C. y Cook, S. (2003). “On Democratization and Peacebuilding”. *Global Governance*, Vol. 9 (No. 2), pp. 233-246.
- Caplan, R., (2003). “Humanitarian Intervention: Which Way Forward?” En Lang Jr., A (ed.) *Just Intervention* (131-144). Georgetown: Georgetown University Press.
- Chatterjee, C. K. y Scheid, D.E., (2006). “Introduction”. En Chatterjee, C. K. y Scheid, D.E. (eds.) *Ethics and Foreign Intervention* (1-18). Cambridge: Cambridge University Press.
- Chesterman, S. (2003). “Hard Cases make Bad Law: Law, Ethics and Politics in Humanitarian Intervention”. En Lang Jr., A (ed.) *Just Intervention* (46-61). Georgetown: Georgetown University Press
- Cingranelli, D., y Richards, D. (2008). *Short Variable Descriptions for Indicators in the Cingranelli-Richards (CIRI) Human Rights Dataset* [en línea]. Consultado el 12 de febrero de 2013 en: http://www.humanrightsdata.org/documentation/ciri_variables_short_descriptions.pdf

- Cingranelli, D. y Richards, D. (2011). *The Cingranelli-Richards (CIRI) Human Rights Dataset* [en línea]. Consultado el 12 de febrero de 2013 en: <http://www.humanrightsdata.org/>
- Civil Society Organizations for Peace in Northern Uganda (CSOPNU) (2006). *Counting the Cost. Twenty Years of War in Northern Uganda*. CSOPNU, pp. 1-41.
- Clarke, W. y Herbst, J. (1996). “Somalia and the Future of Humanitarian Intervention”. *Foreign Affairs*, Vol. 75 (No. 2), pp. 70-85.
- Collier, D. (2011). “Understanding Process-Tracing”. *Political Science and Politics*, Vol. 44 (No. 4), pp. 823-830.
- Collier, D. y Mahoney, J. (1996). “Insights and Pitfalls: Selection Bias in Qualitative Research”. *World Politics*, Vol. 49 (No. 1), pp. 56-91.
- Collier, P., (2007). *The Bottom Billion. Why The Poorest Countries Are Failing and What Can Be Done About It*. Capítulos 1, 2, 7, 8 y 11. New York: Oxford University Press.
- Collier, P. y Hoeffler, A. (2002). “On the Incidence of Civil War in Africa”. *The Journal of Conflict Resolution*, Vol. 46 (No. 1), pp. 13-28.
- Collier, P., Hoeffler, A., y Sambanis, N. (2005). “The Collier-Hoeffler Model on Civil War Onset and the Case Study Project Research Design”. En Collier, P. y Sambanis, N. (eds.) *Understanding Civil War. Evidence and Analysis*. Volume 1: Africa (1-34). Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank.
- Cullimore, C. (1994). “Uganda: The Making of a Constitution”. *The Journal of Modern African Studies*, Vol. 32 (No. 4), pp. 707-711.

- Diamonds For Development (2006). “The current state of the diamond mining in the Mano River Basin and the use of diamonds as a tool for peace building and development”. *International Alert*, pp. 1-58.
- Diehl, P. y Druckman, D. (2010). *Evaluating Peace Operations*. London: Lynne Rienner Publishers.
- Doyle M. W., y Sambanis, N. (2006). *Making War and Building Peace: United Nations Peace Operations*. Princeton: Princeton University Press.
- Eichstaedt, P. (2009). *First Kill Your Family. Child Soldiers of Uganda and the Lord’s Resistance Army*. Chicago: Lawrence Hill Books.
- Evans et al., (2001). “The Responsibility to Protect. Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty”. *International Development Research Center*, pp. 1.91.
- Evans, G. y Sahnoun, M., (2002). “The Responsibility to Protect”. *Foreign Affairs*, Vol. 81 (No. 6), pp. 99-110.
- Falleti, T. (2010). “Theory-Guided Process-Tracing in Comparative Politics: Something Old, Something New”. *Newsletter of the Organized Section in Comparative Politics of the American Political Science Association*, Vol. 17 (No. 1), pp. 1-8.
- Finnström, S. (2006). “Wars of the Past and War in the Present: The Lord’s Resistance Movement/Army in Uganda”. *Africa: Journal of the International African Institute*, Vol. 76 (No. 2), pp. 200-220.
- Fortna, V. (2004). “Does Peacekeeping Keep Peace? International Intervention and the Duration of Peace after Civil War”. *International Studies Quarterly*, Vol. 48 (No. 2), pp. 269-292.

- Freedom House (2004). *Mozambique* [en línea]. Consultado el 25 de abril de 2013 en: <http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2004/mozambique>
- Freedom House (2006). *Uganda* [en línea]. Consultado el 8 de mayo de 2013 en: <http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2006/uganda>
- Freedom House (2007). *Uganda* [en línea]. Consultado el 8 de mayo de 2013 en: <http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2007/uganda>
- Freedom House (2009). *Angola* [en línea]. Consultado el 30 de abril de 2013 en: <http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2009/angola>
- Fritzsche, A. (2010). *Political Analysis and Strategy on UN Peacekeeping in Sub-Saharan Africa. Lessons learned from Angola and Mozambique*. Munich: GRIN Academic Publishing.
- Gibney, M., Cornett, L. y Wood, R. (2011). Political Terror Scale 1976-2011 [en línea]. Consultado el 12 de febrero de 2013 en: <http://www.politicalterroryscale.org/>
- Gizelis, T. y Kosek, K. (2005). “Why Humanitarian Interventions Succeed or Fail? The Role of Local Participation”. *Journal of the Nordic International Studies Association*, Vol. 40 (No. 4), pp. 363-383.
- Greenhill, K. M y Major, S. (2006-7). “The Perils of Profiling: Civil War Spoilers and the Collapse of Intrastate Peace Accords”. *International Security*, Vol. 31 (No. 3), pp. 7-40.
- Hausman, J. A. (1978). “Specification Tests in Econometrics”. *Econometrica*, Vol. 46 (No. 6), pp. 1251-1271

- Hoffmann, S., (2006). “Intervention: should it go on, can it go on?” En Chatterjee, C. K. y Scheid, D.E. (eds.) *Ethics and Foreign Intervention* (21-30). Cambridge: Cambridge University Press.
- Holmquist, F. y Ford, M. (1994). “Kenya: State and Civil Society the First Year after the Election”. *Africa Today*, Vol. 41 (No. 4), pp. 5-25.
- Holmquist, F. y Ford, M. (1998). “Kenyan Politics: Toward a Second Transition?” *Africa Today*, Vol. 45 (No. 2), pp. 227-258.
- Huntington, S. P. (1991). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman: University of Oklahoma Press.
- International Crisis Group (ICG) (2004). “Northern Uganda: Understanding and Solving the Conflict”. ICG Africa Report No. 77, pp. 1-42.
- Kalyvas, S. y Balcells, L. (2010). “International System and Technologies of Rebellion: How the End of the Cold War Shaped Internal Conflict”. *American Political Science Review*, Vol. 104 (No. 3), pp. 415-429.
- Karl, T. L. (1997). *The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-States*. Berkeley: University of California Press.
- Kasfir, N. (1998). “‘No-party Democracy’ in Uganda”. *Journal of Democracy*, Vol. 9 (No. 2), pp. 49-63.
- Kaufmann, D., Kraay, A. y Mastruzzi, M. (2010). “The Worldwide Governance Indicators. Methodology and Analytical Issues”. Policy Research Working Paper 5430, *The World Bank*, pp. 1-31.
- Kegley, C. W. Jr. y Hermann, M. (1997). “Putting Military Intervention into the Democratic Peace: A Research Note”. *Comparative Political Studies*, Vol. 30, No. 1, pp. 78-107.

- Kiai, M. (1998). “Commentary: A Last Chance of Peaceful Change in Kenya?” *Africa Today*, Vol. 45 (No. 2), pp. 185-192.
- Kibasomba, R. (2005). “Post-War Defence Integration in the Democratic Republic of Congo”. *Institute for Security Studies (ISS)*, Paper 119, pp. 1-24
- King, G., Keohane, R. y Verba, S. (1994). *Designing social inquiry: scientific inference in qualitative research*. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Klopp, J. M. (2001). “‘Ethnic Clashes’ and Winning Elections: The Case of Kenya’s Electoral Despotism”. *Canadian Journal of African Studies*, Vol. 35 (No. 3), pp. 473-517.
- Knack, S. (2004). “Does Foreign Aid Promote Democracy”. *International Studies Quarterly*, Vol. 48 (No. 1), pp. 251-266.
- Knudsen, C. M. y Zartman, I. W. (1995). “The Large Small War in Angola”. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 541, pp. 130-143.
- La Porta, R. et al. (1998). “The Quality of Government”. Working Paper No. 6727, *NBER Working Paper Series*, pp. 1-61.
- Lang Jr., A. (2003). “Humanitarian Intervention. Definitions and Debates”. En Lang Jr., A (ed.) *Just Intervention* (1-7). Georgetown: Georgetown University Press.
- Lipset, S. M. (1959). “Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy”. *The American Political Science Review*, Vol. 53 (No. 1), pp. 69-105.
- Lundin, I. B. (2004). “The Peace Process and the Construction of Reconciliation Post-Conflict – The Experience of Mozambique”. Paper presentado en el Seminario Internacional *Experiences of Penal Alternatives in Peace Processes*. Barcelona, pp. 1-23

- MacQueen, N. (1998). “Peacekeeping by Attrition: the United Nations in Angola”. *The Journal of Modern African Studies*, Vol. 36 (No. 3), pp. 399-422.
- Mahoney, J. y Goertz, G. (2004). “The Possibility Principle: Choosing Negative Cases in Comparative Research”. *The American Political Science Review*, Vol. 98 (No. 4), pp. 653-669.
- Mahony, L. (2001). “Military Interventions in Human Rights Crisis: Responses and Dilemmas from the Human Rights Movement”. *International Council on Human Rights Policy*, pp. 1-21.
- Maina, K. W. (1992). “The Future of Democracy in Kenya”. *Africa Today*, Vol. 39 (No. 1/2), pp. 122-127.
- Manning, C. (1998). “Citizen Vies of Peace Building and Political Transition in Angola, 1997”. *New England Journal of Public Policy*, Vol. 14 (No. 1), pp. 161-178.
- Manning, C. (2005). “Assessing Adaptation to Democratic Politics in Mozambique. The Case of Frelimo”. En Villalón L. A. y VonDoepp, P. (eds.) *The Fate of Africa’s Democratic Experiments: elites and institutions* (pp. 221-245). Indiana: Indiana University Press.
- Manning, C. y Malbrough, M. (2009). “Learning the Right Lessons from Mozambique’s Transition to Peace”. *Taiwan Journal of Democracy*, Vol. 5 (No. 1), pp. 77-91.
- Mansfield, E.D. y Snyder, J. (1995). “Democratization and War”. *Foreign Affairs*, Vol. 74, No. 3, pp. 79-97.
- Marshall, M. G., Jaggers, K., y Gurr, T. R. (2010). “Polity IV Project. Political Regime, Characteristics and Transitions, 1800-2010. Data Users’ Manual”. *Center for Systemic Peace*, pp. 1-90.

- McVey (2003). “An analysis of UN peacekeeping efforts in African civil conflicts”. MA Thesis, University of Colorado, Denver.
- Meernik, J. (1996). “United States Military Intervention and the Promotion of Democracy”. *Journal of Peace Research*, Vol. 33, No. 4, pp. 391-402.
- Messiant, C. (2004). “Why did Bicesse and Lusaka fail? A critical analysis”. *Accord No. 15: From military peace to social justice? The Angolan peace process*, pp. 16-23.
- Ministry of Finance, Planning and Economic Development of Uganda (MFPED) (2003). “Post-Conflict Reconstruction: The Case of Northern Uganda”. *MFPED: Discussion Paper 7*, pp. 1-45
- Morjé-Howard, L. (2008). *UN Peacekeeping in Civil Wars*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mugisha, A. (2004). “Museveni’s Machinations”. *Journal of Democracy*, Vol. 15 (No. 2), pp. 140-144.
- Muhumuza, W. (2009). “From Fundamental Change to No Change: The NRM and Democratization in Uganda”. *IFRA – Les Cahiers d’Afrique de l’Est*, No. 41, pp. 21-42.
- Mutua, M. W. (1994). “Human Rights and State Despotism in Kenya: Institutional Problems”. *Africa Today*, Vol. 41 (No. 4), pp. 50-56.
- Musau, B. (2009). “Ethnic Conflicts and Transition to Democracy in Africa: Recurrence of Ethnic Conflicts in Kenya (1991 – 2008)”. MA Thesis, Universität Leipzig y Universität Wien.
- Mwenda, A. M. (2007). “Personalizing Power in Uganda”. *Journal of Democracy*, Vol. 18 (No. 3), pp. 23-37.

- Nardin, T. (2003). “The Moral Basis for Humanitarian Intervention”. En Lang Jr., A (ed.) *Just Intervention* (11-27). Georgetown: Georgetown University Press.
- Närman, A. (2003). “Elections in Kenya”. *Review of African Political Economy*, Vol. 30 (No. 96), pp. 343-350.
- Nasong’o, S. W. (2007). “Negotiating New Rules of the Game: Social Movements, Civil Society and the Kenyan Transition”. En Murunga, G. R. y Nasong’o, S. W. (eds.) *Kenya. The Struggle for Democracy* (pp. 19-57). London: Zed Books.
- Ndegwa, S. N. (1998). “The Incomplete Transition: The Constitutional and Electoral Context in Kenya”. *Africa Today*, Vol. 45 (No. 2), pp. 193-211.
- Ndegwa, S. N. (2003). “Kenya: Third Time Lucky?” *Journal of Democracy*, Vol. 14 (No. 3), pp. 145-158.
- Omach, P. (2009). “Democratization and Conflict Resolution in Uganda”. *IFRA – Les Cahiers d’Afrique de l’Est*, No. 41, pp. 1-20.
- Omara-Otonnu, A. (1992). “The Struggle for Democracy in Uganda”. *The Journal of Modern African Studies*, Vol. 30 (No. 3), pp. 443-463.
- Parekh, B. (1997). “Rethinking Humanitarian Intervention”. *International Political Science Review*, Vol.18, No. 1, pp. 49-69.
- Paulo, M. J. (2004). “The Role of the United Nations in the Angolan Peace Process”. *Accord No. 15: From military peace to social justice? The Angolan peace process*, pp. 28-31.
- Pazzanita, A. G. (1991). “The Conflict Resolution Process in Angola”. *The Journal of Modern African Studies*, Vol. 29 (No. 1), pp. 83-114.
- Pham et al. (2008). “The Lord’s Resistance Army and Forced Conscription in Northern Uganda”. *Human Rights Quarterly*, Vol. 30 (No. 2), pp. 404-411.

- Pickering, J. y Kisangani, E. F. (2006). “Political, Economic, and Social Consequences of Foreign Military Intervention”. *Political Research Quarterly*, Vol. 59, No. 3, pp. 363-376.
- Pickering, J. y Peceny, M. (2006). “Forging Democracy at Gunpoint”. *International Studies Quarterly*, Vol. 50, No. 3, pp. 539-559.
- Pycroft, C. (1994). “Angola – ‘The Forgotten Tragedy’”. *Journal of Southern African Studies*, Vol. 20 (No. 2), pp. 241-262.
- Rajan, R. y Subramanian, A. (2005). “Aid and Growth: What does the cross-country evidence really show? *National Bureau of Economic Research*, Working Paper No. 11513, pp. 1-48
- Rakner, L., Menocal, A., y Fritz, V. (2007). “Democratization’s Third Wave and the Challenges of Democratic Deepening: Assessing International Democracy Assistance and Lessons Learned”. *Good Governance, Aid Modalities and Poverty Reduction Working Papers Issue 1, Overseas Development Institute*, pp. 1-62.
- Regan, P. M. (1996). “Conditions of Successful Third-Party Intervention in Intrastate Conflicts”. *The Journal of Conflict Resolution*, Vol. 40, No. 2, pp. 336-359.
- Reibel, A. J. (2010). “An African Success Story: Civil Society and the ‘Mozambican Miracle’”. *Africana*, pp. 78-102.
- Rogier, E. (2003). “Cluttered with Predators, Godfathers and Facilitators: The Labyrinthine Path to Peace in the Democratic Republic of Congo”. Working Paper No. 23, *Clingendael Institute*, pp. 1-61.
- Roque, P. C. (2009). “Angola’s Façade Democracy”. *Journal of Democracy*, Vol. 20 (No. 4), pp. 137-150.

- Rosenau, J.N., (1969). “Intervention as a Scientific Concept”. *The Journal of Conflict Resolution*, Vol. 13, No. 2, pp. 149-171
- Ross, M. (2001). “Does Oil Hinder Democracy?” *World Politics*, Vol. 53 (No. 3), pp. 325-361.
- Rubongoya, J. B. (2007). *Regime Hegemony in Museveni’s Uganda. Pax Musevenica*. New York: Palgrave Macmillan
- Seybolt, T., (2008). *Humanitarian Military Intervention. The Conditions for Success and Failure*. Capítulo 2: “Judging Success and Failure”. Oxford: Oxford University Press.
- Shaxson, N. (2007). “Oil, Corruption and the Resource Curse”. *International Affairs*, Vol. 83 (No. 6), pp. 1123-1140.
- Sørensen, G. (2006). “Liberalism of Restraint and Liberalism of Imposition: Liberal Values and World Order in the New Millennium”. *International Relations*. Vol. 20 (No. 3), pp. 251-272.
- Stern, P. C. y Druckman, D. (2000). “Evaluating Interventions in History: The Case of International Conflict Resolution”. *International Studies*, Vol. 2, No. 1, pp. 33-63.
- The International Institute for Strategic Studies (IISS) (1994). *Strategic Survey 1993-1994*. London: Victoria Fisher.
- The World Bank. *GDP (current US\$)* [en línea]. Consultado el 20 de febrero de 2013 en: <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD>
- The World Bank. *GDP per capita (current US\$)* [en línea]. Consultado el 20 de febrero de 2012 en: <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD>
- The World Bank. *Income share held by highest 20%* [en línea]. Consultado el 20 de febrero de 2013 en: <http://data.worldbank.org/indicator/SI.DST.05TH.20>

- The World Bank. *Income share held by lowest 20%* [en línea]. Consultado el 20 de febrero de 2013 en: <http://data.worldbank.org/indicator/SI.DST.FRST.20>
- The World Bank. *Internet users (per 100 people)* [en línea]. Consultado el 14 de marzo de 2013 en: <http://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.P2>
- The World Bank. *Life expectancy at birth, total (years)* [en línea]. Consultado el 20 de febrero de 2013 en: <http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN>
- The World Bank. *Mortality rate, infant (per 1,000 live births)* [en línea]. Consultado el 20 de febrero de 2013 en: <http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.IMRT.IN>
- The World Bank. *Primary completion rate, total (% of relevant age group)* [en línea]. Consultado el 20 de febrero de 2013 en: <http://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.CMPT.ZS>
- The World Bank. *Ratio of female to male primary enrolment (%)* [en línea]. Consultado el 20 de febrero de 2013 en: <http://data.worldbank.org/indicator/SE.ENR.PRIM.FM.ZS>
- The World Bank. *Roads, paved (% of total roads)* [en línea]. Consultado el 14 de marzo de 2013 en: <http://data.worldbank.org/indicator/IS.ROD.PAVE.ZS>
- The World Bank. *Urban population (% of total)* [en línea]. Consultado el 14 de marzo de 2013 en: <http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS>
- The World Bank. *Worldwide Governance Indicators* [en línea]. Consultado el 20 de febrero de 2013 en: <http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp>
- United Nations (1945). *Charter of the United Nations* [en línea]. Consultado el 9 de septiembre de 2012 en: <http://www.un.org/en/documents/charter/>
- United Nations Department of Public Information - United Nations Department of Peacekeeping Operations (UNDPI-DPKO) (2000a). *Angola – United Nations*

- Angola Verification Mission II* [en línea]. New York: UN Publications. Consultado el 11 de febrero de 2013 en: <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/Unavem2/Unavem2.htm>
- United Nations Department of Public Information - United Nations Department of Peacekeeping Operations (UNDPI-DPKO) (2000b). *Angola – United Nations Angola Verification Mission III* [en línea]. New York: UN Publications. Consultado el 11 de febrero de 2013 en: <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unavem3.htm>
- United Nations Department of Public Information - United Nations Department of Peacekeeping Operations (UNDPI-DPKO) (2000c). *Sierra Leone – United Nations Observer Mission in Sierra Leone* [en línea]. New York: UN Publications. Consultado el 11 de febrero de 2013 en: <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unomsil/Unomsil.htm>
- United Nations Department of Public Information - United Nations Department of Peacekeeping Operations (UNDPI-DPKO) (2001a). *Angola – United Nations Mission of Observers in Angola* [en línea]. New York: UN Publications. Consultado el 11 de febrero de 2013 en: <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/monua/monua.htm>
- United Nations Department of Public Information - United Nations Department of Peacekeeping Operations (UNDPI-DPKO) (2001b). *Liberia – United Nations Mission Observer in Liberia* [en línea]. New York: UN Publications. Consultado el 11 de febrero de 2013 en: <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unomil.htm>
- United Nations Department of Public Information - United Nations Department of Peacekeeping Operations (UNDPI-DPKO) (2001c). *Mozambique – United*

- Nations Operation in Mozambique* [en línea]. New York: UN Publications. Consultado el 11 de febrero de 2013 en: <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/onumoz.htm>
- United Nations Department of Public Information - United Nations Department of Peacekeeping Operations (UNDPI-DPKO) (2003a). *Somalia – United Nations Operation in Somalia I* [en línea]. New York: UN Publications. Consultado el 11 de febrero de 2013 en: <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unosomi.htm>
 - United Nations Department of Public Information - United Nations Department of Peacekeeping Operations (UNDPI-DPKO) (2003b). *Somalia – United Nations Operation in Somalia II* [en línea]. New York: UN Publications. Consultado el 11 de febrero de 2013 en: <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unosom2.htm>
 - United Nations Department of Public Information - United Nations Department of Peacekeeping Operations (UNDPI-DPKO) (2009). *UNAMSIL – United Nations Mission in Sierra Leone* [en línea]. New York: UN Publications. Consultado el 11 de febrero de 2013 en: <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unamsil/>
 - United Nations Department of Public Information - United Nations Department of Peacekeeping Operations (UNDPI-DPKO) (2010). *MONUC – United Nations Organization Mission in Democratic Republic of Congo* [en línea]. New York: UN Publications. Consultado el 11 de febrero de 2013 en: <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/monuc/index.shtml>
 - Walter, B. F. (1997). “The Critical Barriers to Civil War Settlement”. *International Organization*, Vol. 51 (No. 3), pp. 335-364.

- Weiss, T. G., (1994). “Triage: Humanitarian Interventions in a New Era”. *World Policy Journal*, Vol. 11 (No. 1), pp. 59-68.
- Weiss, T. G., (2003). “Principles, Policies, and Humanitarian Action”. En Lang Jr., A (ed.) *Just Intervention* (84-103). Georgetown: Georgetown University Press.
- Wheeler, N. J., (2003). “Humanitarian Intervention after September 11, 2001”. En Lang Jr., A (ed.) *Just Intervention* (192-216). Georgetown: Georgetown University Press.
- Wheeler, N. J. y Dunne, T. (2001). “East Timor and the New Humanitarian Interventionism”. *International Affairs*, Vol. 77 (No. 4), pp. 805-827.
- Wooldridge, J. M. (2002). *Econometric analysis of cross section and panel data*. Cambridge: MIT Press.
- Wooldridge, J. M. (2003). *Introductory to Econometrics: a modern approach*. Australia: South-Western College Pub.
- World Trade Organization. *Merchandise Trade by Commodity: Fuels and mining products* [en línea]. Consultado el 7 de marzo de 2013 en: <http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx?Language=E>

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES

IMH: intervención militar humanitaria. Se le otorga un 1 para cuando la intervención existió y un 0 para cuando no.

Índice de fragmentación étnica (Alesina et al., 2003): mide cuál es la probabilidad de que dos individuos elegidos aleatoriamente no pertenezcan al mismo grupo étnico.

Índice de fragmentación lingüística (Alesina et al., 2003): mide cuál es la probabilidad de que dos individuos elegidos aleatoriamente no compartan la misma lengua.

Índice de fragmentación religiosa (Alesina et al., 2003): mide cuál es la probabilidad de que dos individuos elegidos aleatoriamente no pertenezcan al mismo grupo religioso.

Porcentaje de población musulmana (La Porta et al., 1999): mide el porcentaje de la población afiliada al credo musulmán.

Tasa de mortalidad infantil (por cada 1000 nacidos vivos): refiere al número de niños que mueren antes de cumplir un año de edad por cada 1.000 nacidos vivos en un año dado.

Esperanza de vida al nacer (en años): La esperanza de vida al nacer indica el número de años que un recién nacido viviría si los patrones de mortalidad registradas en el momento de su nacimiento se mantuvieran iguales durante toda su vida.

Prevalencia de HIV (%) : se refiere al porcentaje de personas entre 15-49 años que están infectadas con el VIH.

Razón entre mujeres y hombres matriculados para primaria (%): es el porcentaje de niñas y niños matriculados en la enseñanza primaria en las escuelas públicas y privadas.

Tasa total de finalización primaria (%): Total es el número total de nuevos ingresos en el último grado de la educación primaria, independientemente de su edad, expresado como porcentaje de la población total de la edad teórica de admisión al último grado de la primaria. Este indicador también se conoce como "tasa bruta de admisión en el último grado de primaria". La proporción puede superar el 100%, debido a los niños de más edad y menos de edad que entran tarde o temprano en los grados de primaria y/o son repetidores.

Ingresos por exportaciones de petróleo y/o minerales como porcentaje del PBI (Rentas petroleras y mineras)(a precios corrientes, USD): es el valor total de las exportaciones de petróleo y minerales (extraídos de la OMC), sobre el valor del PBI total para cada año.

Población urbana (como % del total): se refiere a las personas que viven en las zonas urbanas como se define por las oficinas nacionales de estadística. Se calcula utilizando las estimaciones de población del Banco Mundial y proporciones urbanas de las Perspectivas de la urbanización mundial de las Naciones Unidas.

Rutas pavimentadas (como % del total de las rutas): medidas en longitud, las rutas pavimentadas son aquellas con superficie de piedra triturada y un hidrocarburo aglutinante, con concreto o con adoquines, como porcentaje de todas las carreteras del país, medida de longitud.

Usuarios de Internet (cada 100 personas): Los usuarios de Internet son personas con acceso a la red mundial.

PBI (a precios corrientes, USD): El PIB a precio de comprador es la suma del valor agregado bruto de todos los productores residentes en la economía más todo impuesto a los productos, menos todo subsidio no incluido en el valor de los productos. Se calcula sin hacer deducciones por depreciación de bienes manufacturados o por agotamiento y degradación de recursos naturales. Los datos se expresan en moneda local a precios corrientes. Las cifras en dólares del PIB se obtuvieron convirtiendo el valor en moneda local utilizando los tipos de cambio oficiales de un único año. Para algunos países donde el tipo de cambio oficial no refleja el tipo efectivamente aplicado a las transacciones en divisas, se utiliza un factor de conversión alternativo. Datos en US\$ a precios actuales.

PBI per cápita (a precios corrientes, USD): El PIB per cápita es el producto interno bruto dividido por la población a mitad de año. El PIB es la suma del valor agregado bruto de todos los productores residentes en la economía más todo impuesto a los productos, menos todo subsidio no incluido en el valor de los productos. Se calcula sin hacer deducciones por depreciación de bienes manufacturados o por agotamiento y degradación de recursos naturales. Datos en US\$ a precios actuales.

Razón entre la participación del primer percentil en el PBI y la participación del último percentil en el PBI: con el propósito de observar la participación de la clase media en la economía de un país, se tomó la participación del primer percentil y la participación del último y se los dividió con el objeto de obtener una medida de la participación de los percentiles 2, 3 y 4.

Colonia GB: refiere a aquellos territorios que, previo a su independencia, estuvieron bajo el mandato británico. Se le otorga un 1 para aquellos que sí fueron colonias, y un 0 para aquellos territorios colonizados por otras potencias. Pickering y Peceny (2006), basándose en Huntington (1991), Przeworski et. al. (2000), y Colaresi y Thompson (2003), utilizan esta variable en calidad de variable de control, bajo el supuesto de que existe una correlación positiva entre un ex gobierno colonial de origen británico en el pasado y la democracia en el presente.

Población: refiere a la población total dentro del territorio para un año dado.

Índice de Fragilidad Estatal: obtenido del Center for Systemic Peace, toma el período 1995-2011. El valor máximo que puede tomar es 25, lo que indica una fragilidad extrema en el Estado en cuestión. Es un índice basado en la suma de dos puntuaciones: efectividad y legitimidad.

Índice Polity IV (2): Esta variable es una versión modificada de la variable de sistema de gobierno añadido con el fin de facilitar el uso de la medida de régimen Polity en los análisis de series de tiempo. Se modifica la puntuación combinada Polity anual mediante la aplicación de un tratamiento simple, o "arreglo" para convertir los casos de

“puntajes estandarizados de autoridad” (es decir, -66, -77 y -88) con las puntuaciones Polity convencionales (es decir, dentro de la rango de -10 a +10). Los valores se han convertido de acuerdo con el conjunto de reglas siguientes:

- -66: Casos de "interrupción" extranjera se tratan como “Sistema ausente”
- -77: Casos de "interregno", o la anarquía, se convierten en una puntuación "neutral" de la clase política "0".
- -88: Casos de "transición" se prorratean a través del ciclo de la transición. Las transiciones en curso (-88) en el año más reciente (2006) se convierten en valores de tipo “Sistema ausente”. Las transiciones (-88) después de un año de la independencia, interrupción (-66), o interregno (-77) se prorratean a partir del valor "0".

Escala de Terror Político: En una escala de 1 a 5 mide los niveles de violencia política y terror que experimenta el país en un año determinado. Los datos utilizados en la elaboración de este índice viene de dos fuentes diferentes: los informes anuales de los países de Amnistía Internacional y del Departamento de Estado de EE.UU. (En esta base se tomarán los valores arrojados a partir de los informes de Amnistía internacional para evitar sesgos del Departamento de Estado).

- 1: Países con un estado de derecho seguro; la gente no es encarcelada por su punto de vista, y la tortura es rara o excepcional. Los asesinatos políticos son extremadamente raros.
- 2: Existe una cantidad limitada de prisión por actividades políticas no violentas. Sin embargo, pocas personas se ven afectadas; la tortura y las golpizas son excepcionales. El asesinato político es raro.

- 3: O bien la prisión por motivos políticos es extensa, o bien hay una historia reciente de dichos encarcelamientos. La ejecución u otros asesinatos políticos son frecuentes. Encarcelamientos ilimitados, con o sin juicio por opiniones políticas.
- 4: Las violaciones de derechos civiles y políticos se han extendido a un gran número de la población. Asesinatos, desapariciones y torturas son una parte común de la vida. A pesar de su generalidad, este nivel de terror afecta a aquellos que se interesan en la política.
- 5: El terror se ha extendido a toda la población. Los líderes de estas sociedades no ponen límites a los medios o la minuciosidad con la que se persiguen los objetivos personales o ideológicos.

Índice de Integridad Física: Tomado del Proyecto CIRI, este es un índice aditivo construido a partir de los indicadores de Tortura, Ejecuciones Extrajudiciales, Encarcelamientos Políticos, y Desapariciones. El índice varía de 0 (ningún respeto de parte del gobierno para estos cuatro derechos) a 8 (respeto total del gobierno para estos cuatro derechos).

- La tortura refiere al propósito de infligir dolor extremo, ya sea mental o físico, por funcionarios públicos o por particulares a partir de la instigación de los funcionarios gubernamentales. Incluye el uso de la fuerza física u otro tipo de fuerza que cae bajo la categoría de cruel, inhumano o degradante. Esto también incluye las muertes bajo custodia debido a la negligencia de los funcionarios gubernamentales. Una puntuación de 0 indica que la tortura se practica con frecuencia en un año dado, una puntuación de 1 indica que la tortura se practica

ocasionalmente, y una puntuación de 2 indica que la tortura no se produjo en un año determinado.

- Las ejecuciones extrajudiciales son homicidios cometidos por funcionarios públicos sin el debido proceso de ley. Estos incluyen asesinatos por parte de grupos privados, en caso de ser instigados por el gobierno. Estas muertes pueden resultar del uso deliberado, ilegal y excesivo de la fuerza por parte de la policía, las fuerzas de seguridad, u otros agentes del Estado, ya sea contra presuntos delincuentes, detenidos, presos u otras personas. Una puntuación de 0 indica que las ejecuciones extrajudiciales se practicaron con frecuencia en un año dado, una puntuación de 1 indica que las ejecuciones extrajudiciales se practicaron en ocasiones, y una puntuación de 2 indica que esos asesinatos no ocurrieron en un año determinado.
- Los encarcelamientos políticos se refieren a la prisión de personas por parte de funcionarios del gobierno, debido a: su discurso, su oposición no violenta a las políticas gubernamentales o líderes, sus creencias religiosas, sus prácticas no violentas, incluyendo proselitismo religioso, o su pertenencia a un grupo, que incluye un grupo étnico o racial. Una puntuación de 0 indica que no había muchas personas encarceladas a causa de sus creencias religiosas, políticas o de otro tipo en un año dado, una puntuación de 1 indica que algunas personas fueron encarceladas, y una puntuación de 2 indica que no hay personas fueron encarceladas por cualquiera de las razones anteriores en un año determinado.
- Las desapariciones son casos de personas que no pueden ser encontradas y donde la motivación política parece probable. El conocimiento del paradero de los desaparecidos es, por definición, no público. Una puntuación de 0 indica que las desapariciones han ocurrido con frecuencia en un año determinado; una

puntuación de 1 indica que las desapariciones ocurrieron de vez en cuando, y una puntuación de 2 indica que no ocurrieron desapariciones en un año determinado.

Índice de Empoderamiento: Tomado del Proyecto CIRI, es un índice aditivo construido a partir de los indicadores de Libertad de Movimiento Extranjero, Libertad de Movimiento Interno, Libertad de Expresión, Libertad de Asociación, los Derechos de los trabajadores, Autodeterminación Electoral y Libertad de Culto. El índice varía entre 0 (ningún respeto de parte del gobierno) a 14 (respeto total de parte del gobierno a estos 7 derechos).

- Libertad de Movimiento Extranjero: Esta variable indica la libertad de los ciudadanos de salir y regresar a su país. Una puntuación de 0 indica que esta libertad estaba severamente restringida, una puntuación de 1 indica que la libertad se restringía de alguna manera, y una puntuación de 2 indica una irrestricta libertad de movimiento exterior.
- Libertad de Movimiento Interno: Esta variable indica la libertad de los ciudadanos a viajar dentro de su propio país. Una puntuación de 0 indica que esta libertad estaba severamente restringida, una puntuación de 1 indica que la libertad se restringía de alguna manera, y una puntuación de 2 indica una irrestricta libertad de movimiento exterior.
- Libertad de Expresión: Esta variable indica el grado en que la libertad de expresión y prensa se ven afectada por la censura del gobierno (incluyendo la propiedad de los medios de comunicación). Una puntuación de 0 indica que la censura gubernamental de los medios de comunicación fue completa; una puntuación de 1 indica que hubo cierta censura gubernamental de los medios de

comunicación, y una puntuación de 2 indica que no hubo censura de parte del gobierno de los medios de comunicación en un año determinado.

- **Libertad de Asociación:** Es un derecho internacionalmente reconocido de los ciudadanos a reunirse y asociarse libremente para con otras personas en partidos políticos, sindicatos, organizaciones culturales, u otros grupos de intereses especiales. Esta variable indica el grado en que las libertades de reunión y de asociación están sujetas a limitaciones reales o restricciones gubernamentales (en oposición a las protecciones estrictamente legales). Una puntuación de 0 indica que los derechos de los ciudadanos a la libertad de reunión o asociación fueron severamente restringidos o negados por completo a todos los ciudadanos; una puntuación de 1 indica que estos derechos eran limitados para todos los ciudadanos o severamente restringidos o negados para grupos selectos, y una puntuación de 2 indica que esos derechos eran practicados ilimitada y libremente disfrutado por prácticamente todos los ciudadanos en un año determinado.
- **Derechos de los trabajadores:** Los trabajadores deben tener la libertad de asociación en sus lugares de trabajo y el derecho a negociar colectivamente con sus empleadores. Esta variable indica el grado en que los trabajadores disfruten de éstos y otros derechos internacionalmente reconocidos, incluida la prohibición del uso de cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio, una edad mínima para el empleo de niños, y condiciones aceptables de trabajo respecto a salarios mínimos, horas de trabajo y seguridad y salud ocupacional. Una puntuación de 0 indica que los derechos de los trabajadores fueron severamente restringidos; una puntuación de 1 indica que los derechos laborales se

restringieron de alguna manera, y una puntuación de 2 indica que los derechos de los trabajadores están plenamente protegidos durante el año en cuestión.

- **Autodeterminación Electoral:** Esta variable indica en qué medida los ciudadanos disfrutaban de la libertad de elección política, así como la capacidad de cambiar no sólo las leyes, sino también los funcionarios que los gobiernan a través de elecciones libres y justas. Este derecho se conoce a veces como el derecho a la autodeterminación. Una puntuación de 0 indica que este derecho, no existía en la ley o en la práctica durante el año en cuestión. Una puntuación de 1 indica que si bien los ciudadanos tienen el derecho legal a la libre determinación, hubo algunas limitaciones para el cumplimiento de este derecho en la práctica. Una puntuación de 2 indica que la participación política era libre y abierta durante el año en cuestión.
- **Libertad de Culto:** Esta variable indica el grado en que la libertad de los ciudadanos para el ejercicio y practica de sus creencias religiosas está sujeto a las restricciones del gobierno. Una puntuación de 0 indica que las restricciones del gobierno sobre las prácticas religiosas son graves y generalizados. Una puntuación de 1 indica que tales prácticas son moderados, y un 2 indica que tales prácticas están prácticamente ausentes.

Rendición de cuentas: Tomado de los indicadores de gobernanza del Banco Mundial, refleja en qué medida los ciudadanos de un país perciben que pueden participar en la elección de su gobierno, así como disfrutaban de la libertad de expresión, asociación y de prensa. Oscila entre aproximadamente -2,5 (débil) a 2,5 (fuerte).

Estabilidad política y ausencia de violencia: Tomado de los indicadores de gobernanza del Banco Mundial, refleja la percepción de parte de los ciudadanos de que el gobierno sea desestabilizado o derrocado por medios inconstitucionales o violentos –incluida la violencia política y el terrorismo. Oscila entre aproximadamente -2,5 (débil) a 2,5 (fuerte).

Efectividad del gobierno: Tomado de los indicadores de gobernanza del Banco Mundial, refleja la percepción de los ciudadanos de la calidad de los servicios públicos, la calidad de la administración pública y su grado de independencia de las presiones políticas, la calidad de la formulación y aplicación de políticas y la credibilidad del compromiso del gobierno con esas políticas. Oscila entre aproximadamente -2,5 (débil) a 2,5 (fuerte).

Calidad reguladora: Tomado de los indicadores de gobernanza del Banco Mundial, refleja la percepción de parte de los ciudadanos de la capacidad del gobierno para formular y aplicar políticas acertadas que permitan y promuevan el desarrollo del sector privado. Oscila entre aproximadamente -2,5 (débil) a 2,5 (fuerte).

Estado de derecho: Tomado de los indicadores de gobernanza del Banco Mundial, refleja en qué medida los agentes confían y respetan las reglas de la sociedad, y en particular la calidad del cumplimiento de contratos, los derechos de propiedad, la policía y los tribunales. Oscila entre aproximadamente -2,5 (débil) a 2,5 (fuerte).

Control de la corrupción: Tomado de los indicadores de gobernanza del Banco Mundial, refleja la medida en la que los ciudadanos perciben que el poder público se ejerce en beneficio privado, incluyendo tanto las formas pequeña de corrupción, así como la

"captura" del Estado por minorías selectas e intereses privados. Oscila entre aproximadamente -2,5 (débil) a 2,5 (fuerte).

ANEXO II

PROTOCOLO PARA EL ESTUDIO DE CASO

Estudio de caso: país y años que comprende el análisis			
1. Situación antecedente	Naturaleza del conflicto		
	Principales actores - facciones involucradas		
	Consecuencias		
	¿Hubo un acuerdo de cese al fuego?		
2. IMH (para los países intervenidos)	Mandato	Objetivo y tareas	
		¿Se observan dificultades o éxitos con respecto a los objetivos y las tareas llevadas adelante?	
	Fortaleza	Número de tropas	
		Gasto total	
		Víctimas de la agencia organizadora	
		¿Se observan dificultades o éxitos con respecto a la fortaleza?	
	Cooperación interna	¿Del gobierno?	
		¿De las facciones en guerra?	
		¿Se observan dificultades o éxitos con respecto a la existencia o falta de cooperación interna?	
	Terceros partidos	Se involucraron? Naturaleza y alcance del involucramiento	
		¿Se observan dificultades o éxitos con respecto a la existencia de terceros partidos?	
	Fin de la IMH	¿En qué contexto ocurrió?	
¿Cómo fue recibida la retirada de las tropas?			
3. Transición a la democracia	¿Hubo acuerdos o pactos de <i>power-sharing</i> ?		
	¿Hubo elecciones abiertas y libres?		
	¿Cómo se reorganizaron las fuerzas políticas más relevantes?		
	Participación regional		
	Participación mundial		
	¿Se sancionó una Constitución Nacional?		
4. Consolidación de la democracia	¿Hay instituciones que permitan expresar las preferencias de los ciudadanos?	Sufragio	¿Es universal? ¿Es secreto?
		Elecciones	¿Son regulares? ¿Hay fraude? ¿Hay recambio en el poder?
		Partidos políticos	Clivajes e implicancias

		Asociaciones civiles
¿Hay constreñimientos institucionales al ejercicio de poder?		División de poderes
		Independencia del poder judicial
¿Se respetan y son garantizadas las libertades civiles?		Libertad de expresión
		Libertad de prensa
		Libertad de culto

A partir del protocolo expuesto, se estipularon una serie de preguntas guía, en calidad de lineamientos propios a seguir al momento de llevar adelante la investigación.

En cuanto a la situación antecedente, lo que se buscaba explorar era la historia político-social que antecedió a la IMH en el caso de que la hubiese, o los orígenes del conflicto, para aquellos países que no fueron intervenidos. Así, se confeccionaron las preguntas que siguen a continuación. ¿De qué naturaleza fue el conflicto?, ¿fue de tipo político, étnico o religioso? ¿Cuáles fueron los principales actores locales involucrados? En caso de que la situación antecedente haya sido una de guerra, ¿cuáles fueron las consecuencias, tanto de corto como de largo plazo? Es decir, ¿cuál fue el saldo de muertos?, ¿cuánto le había costado la guerra al país?, ¿cómo se encontraba el país en términos de infraestructura?, entre otras. Finalmente, ¿hubo un acuerdo de cese al fuego entre las partes, simbolizando la terminación del conflicto?⁴⁶

Para aquellos países que sí evidenciaron una IMH, el objetivo de la próxima etapa del análisis radica en observar en qué consistió dicha intervención. A saber, ¿cuáles fueron los objetivos y tareas delineados en el mandato?, ¿cómo se llevaron a la práctica? En lo que refiere a la fortaleza de la misión, adquiere relevancia preguntarse por el número de tropas con las que contaba la misión, así como también el presupuesto de la misma. El motivo radica en poder identificar si dicha fortaleza representó una dificultad

⁴⁶ Si bien este evento da cuenta de la finalización de esta etapa, a efectos narrativos, puede formar parte de la siguiente.

o contribuyó al éxito de la misión. A su vez, el protocolo también apunta a identificar los compromisos políticos de parte de los actores internos y de terceros partidos, tanto regionales como extra-regionales. En este sentido, se pregunta: los actores locales, ¿cumplieron con sus pactos?, ¿se evidenció a las claras un compromiso de parte del Secretario General o del Representante Especial del Secretario General?, ¿contribuyeron las fuerzas regionales para ejercer presión sobre los grupos locales, en pos de la terminación del conflicto?, ¿o es que se dio la situación a la inversa? Finalmente, es menester observar en qué contexto tuvo lugar el fin de la IMH⁴⁷.

La próxima etapa a analizar es la transición a la democracia. Antes de establecer las preguntas para la guía de la investigación, es necesario aclarar lo siguiente. Para aquellos países en los que tuvo lugar una IMH, la transición puede formar parte de la IMH, como no –depende de si ésta logró cumplir su cometido. Pero para los países que no evidenciaron una intervención, la transición suele estar interrelacionada con la primera etapa, es decir, con el conflicto. Puede ocurrir, efectivamente, que la llamada “etapa de transición” se de en paralelo con el estallido de los conflictos; como bien, también, puede ocurrir que el conflicto haya tenido lugar, se haya terminado, y luego comience la transición. No obstante la trayectoria, hay ciertos indicadores que permiten observar si la mencionada transición ha tenido lugar. Por ejemplo, ¿se han librado elecciones libres y competitivas? ¿Esto pudo ser atestiguado por observadores internacionales? ¿Cómo se reorganizaron las fuerzas políticas más relevantes para la contienda democrática? ¿Se celebraron acuerdos de *power-sharing* entre éstas? ¿Tuvo lugar la sanción de una constitución?

⁴⁷ A menudo, la finalización de la IMH puede ubicarse en la etapa de transición a la democracia, puesto que lo que la intervención se propone es justamente officiar en calidad de puntapié inicial para el período de transición.

Por último, la cuarta etapa del análisis se dirige a examinar si tuvo lugar o no la consolidación de la democracia –o, en todo caso, en que estadio se encuentra. En este sentido, surgen tres grandes interrogantes; el primero es el siguiente: ¿hay instituciones que permitan expresar las preferencias de los ciudadanos? A saber, el sufragio, ¿es universal y secreto?, ¿se llevan acabo elecciones periódicas, libres y competitivas? ¿Hay más de un partido político?, ¿de qué tipo son los clivajes existentes y qué implicancias posee para el funcionamiento regular de la democracia? Por otro lado, ¿existen asociaciones de la sociedad civil?, ¿pueden éstas funcionar libremente? En segundo lugar, surge otra pregunta: ¿hay constreñimientos institucionales al ejercicio de poder? Es decir, ¿hay separación de poderes y un control efectivo de parte de legislativo y el judicial para con el ejecutivo? En línea con esto, ¿se puede decir que el Poder Judicial es independiente? Y finalmente, ¿se respetan y son garantizadas las libertades civiles? ¿Hay libertad de prensa, libertad de asociación y de culto? En caso de que no, ¿es *de facto* o *de jure*? ¿Se practica la violencia de parte del Estado hacia la oposición?

ANÁLISIS CUANTITATIVO: REGRESIONES Y ESPECIFICACIONES

Para el capítulo III, los modelos que se estimaron según las hipótesis, fueron los siguientes.

Para la hipótesis 1

▪ Modelo I:

$$Polity2_{it} = \beta_0 + \beta_1.imh_{it} + \beta_2.pbipercap_{it} + \beta_3.rentas_{it} + \beta_4.fraget_{it} + \beta_5.fragling_{it} + \beta_6.fragrel_{it} + \beta_7.calidadvida_{it} + \beta_8.alfabetización_{it} + \beta_9.africa_{it} + \beta_{10}.sudesteasia_{it} + \beta_{11}.amlat_{it} + \beta_{12}.europaeste_{it} + \beta_{13}.medioriente_{it} + \beta_{14}.asia_{it} + \nu_{it}$$

▪ Modelo II:

$$Polity2_{it} = \beta_0 + \beta_1.imh_{it} + \beta_2.pbipercap_{it} + \beta_3.rentas_{it} + \beta_4.calidadvida_{it} + \beta_5.alfabetización_{it} + \nu_{it}$$

▪ Modelo III:

$$Polity2_{it} = \beta_0 + \beta_1.(imh_{it-1}) + \beta_2.pbipercap_{it} + \beta_3.rentas_{it} + \beta_4.fraget_{it} + \beta_5.fragling_{it} + \beta_6.fragrel_{it} + \beta_7.calidadvida_{it} + \beta_8.alfabetización_{it} + \beta_9.africa_{it} + \beta_{10}.sudesteasia_{it} + \beta_{11}.amlat_{it} + \beta_{12}.europaeste_{it} + \beta_{13}.medioriente_{it} + \beta_{14}.asia_{it} + \nu_{it}$$

▪ Modelo IV:

$$Polity2_{it} = \beta_0 + \beta_1.(imh_{it-1}) + \beta_2.pbipercap_{it} + \beta_3.rentas_{it} + \beta_4.calidadvida_{it} + \beta_5.alfabetización_{it} + \nu_{it}$$

▪ Modelo V:

$$Polity2_{it} - Polity2_{it-1} = \beta_0 + \beta_1.imh_{it} + \gamma_2.Polity2_{it-1} + \beta_3.pbipercap_{it} + \beta_4.rentas_{it} + \beta_5.calidadvida_{it} + \beta_6.alfabetización_{it} + \nu_{it}$$

donde:

$v_{it} = \delta_i + \mu_{it}$ siendo δ_i el efecto fijo y μ_{it} el error aleatorio

imh_{it-1} = es el coeficiente para capturar el valor retrasado de la variable independiente.

Y_2 . $Polity2_{it-1}$ = es el regresor que contempla el retraso de la variable dependiente. Dado que genera problemas de endogeneidad, se utilizó la metodología Arellano-Bond (1991), a partir de la cual se utilizan períodos previos como instrumentos para obtener un estimador consistente de la variable endógena.

Para la hipótesis 1.2

- Modelo I:

$$Polity2_{it} = \beta_0 + \beta_1.imh_{it} + \beta_2.(imh*pbipercap)_{it} + \beta_3.rentas_{it} + \beta_4.fraget_{it} + \beta_5.fragling_{it} + \beta_6.fragrel_{it} + \beta_7.calidadvida_{it} + \beta_8.alfabetización_{it} + \beta_9.africa_{it} + \beta_9.sudesteasia_{it} + \beta_9.amlat_{it} + \beta_9.europaeste_{it} + \beta_9.medioriente_{it} + \beta_9.asia_{it} + v_{it}$$

- Modelo II:

$$Polity2_{it} = \beta_0 + \beta_1.imh_{it} + \beta_2.(imh*pbipercap)_{it} + \beta_3.rentas_{it} + \beta_4.calidadvida_{it} + \beta_5.alfabetización_{it} + v_{it}$$

- Modelo III:

$$Polity2_{it} = \beta_0 + \beta_1.(imh_{it-1}) + \beta_2.(imh*pbipercap)_{it} + \beta_3.rentas_{it} + \beta_4.fraget_{it} + \beta_5.fragling_{it} + \beta_6.fragrel_{it} + \beta_7.calidadvida_{it} + \beta_8.alfabetización_{it} + \beta_9.africa_{it} + \beta_{10}.sudesteasia_{it} + \beta_{11}.amlat_{it} + \beta_{12}.europaeste_{it} + \beta_{13}.medioriente_{it} + \beta_{14}.asia_{it} + v_{it}$$

- Modelo IV:

$$Polity2_{it} = \beta_0 + \beta_1.(imh_{it-1}) + \beta_2.(imh*pbipercap)_{it} + \beta_3.rentas_{it} + \beta_4.calidadvida_{it} + \beta_5.alfabetización_{it} + v_{it}$$

- Modelo V:

$$Polity2_{it} - Polity2_{it-1} = \beta_0 + \beta_1.imh_{it} + \gamma_2.Polity2_{it-1} + \beta_3.pbipercap_{it} + \beta_4.rentas_{it} + \beta_5.calidadvida_{it} + \beta_6.alfabetización_{it} + v_{it}$$

donde:

$v_{it} = \delta_i + \mu_{it}$ siendo δ_i el efecto fijo y μ_{it} el error aleatorio

$imh*pbipercap$ = es el término de interacción entre la variable independiente y el PBI per cápita.

imh_{it-1} = es el coeficiente para capturar el valor retrasado de la variable independiente.

$\gamma_2.Polity2_{it-1}$ = es el regresor que contempla el retraso de la variable dependiente. Dado que genera problemas de endogeneidad, se utilizó la metodología Arellano-Bond (1991), a partir de la cual se utilizan períodos previos como instrumentos para obtener un estimador consistente de la variable endógena.

Para la hipótesis 1.3

- Modelo I:

$$Polity2_{it} = \beta_0 + \beta_1.imh_{it} + \beta_2.(imh*rentas)_{it} + \beta_3.pbipercap_{it} + \beta_4.fraget_{it} + \beta_5.fragling_{it} + \beta_6.fragrel_{it} + \beta_7.calidadvida_{it} + \beta_8.alfabetización_{it} + \beta_9.africa_{it} + \beta_{10}.sudesteasia_{it} + \beta_{11}.amlat_{it} + \beta_{12}.europaeste_{it} + \beta_{13}.medioriente_{it} + \beta_{14}.asia_{it} + v_{it}$$

- Modelo II:

$$Polity2_{it} = \beta_0 + \beta_1.imh_{it} + \beta_2.(imh*rentas)_{it} + \beta_3.pbipercap_{it} + \beta_4.calidadvida_{it} + \beta_5.alfabetización_{it} + v_{it}$$

- Modelo III:

$$Polity2_{it} = \beta_0 + \beta_1.(imh_{it-1}) + \beta_2.(imh*rentas)_{it} + \beta_3.pbipercap_{it} + \beta_4.fraget_{it} + \beta_5.fragling_{it} + \beta_6.fragrel_{it} + \beta_7.calidadvida_{it} + \beta_8.alfabetización_{it} + \beta_9.africa_{it} + \beta_{10}.sudesteasia_{it} + \beta_{11}.amlat_{it} + \beta_{12}.europaeste_{it} + \beta_{13}.medioriente_{it} + \beta_{14}.asia_{it} + v_{it}$$

- Modelo IV:

$$Polity2_{it} = \beta_0 + \beta_1.(imh_{it-1}) + \beta_2.(imh*rentas)_{it} + \beta_3.pbipercap_{it} + \beta_4.calidadvida_{it} + \beta_5.alfabetización_{it} + v_{it}$$

- Modelo V:

$$Polity2_{it} - Polity2_{it-1} = \beta_0 + \beta_1.imh_{it} + \gamma_2.Polity2_{it-1} + \beta_3.(imh*rentas)_{it} + \beta_4.pbipercap_{it} + \beta_5.calidadvida_{it} + \beta_6.alfabetización_{it} + v_{it}$$

donde:

$v_{it} = \delta_i + \mu_{it}$ siendo δ_i el efecto fijo y μ_{it} el error aleatorio

$imh*rentas$ = es el término de interacción entre la variable independiente y el porcentaje de participación de las exportaciones de petróleo y minerales en el PBI.

imh_{it-1} = es el coeficiente para capturar el valor retrasado de la variable independiente.

$\gamma_2.Polity2_{it-1}$ = es el regresor que contempla el retraso de la variable dependiente. Dado que genera problemas de endogeneidad, se utilizó la metodología Arellano-Bond (1991), a partir de la cual se utilizan períodos previos como instrumentos para obtener un estimador consistente de la variable endógena.

Por otro lado, para el capítulo IV, los modelos que se estimaron según las hipótesis, fueron los siguientes.

Para el testeo de la interacción entre IMH y África Sub-Sahariana

- Modelo I:

$$Polity2_{it} = \beta_0 + \beta_1.imh_{it} + \beta_2.(imh*africa) + \beta_3.pbipercap_{it} + \beta_4.rentas_{it} + \beta_5.fraget_{it} + \beta_6.fragling_{it} + \beta_7.fragrel_{it} + \beta_8.calidadvida_{it} + \beta_9.alfabetización_{it} + \beta_{10}.sudesteasia_{it} + \beta_{11}.amlat_{it} + \beta_{12}.europaeste_{it} + \beta_{13}.medioriente_{it} + \beta_{14}.asia_{it} + v_{it}$$

- Modelo II:

$$Polity2_{it} = \beta_0 + \beta_1.imh_{it} + \beta_2.(imh*africa) + \beta_3.pbipercap_{it} + \beta_4.rentas_{it} + \beta_5.calidadvida_{it} + \beta_6.alfabetización_{it} + v_{it}$$

- Modelo III:

$$Polity2_{it} = \beta_0 + \beta_1.(imh_{it-1}) + \beta_2.(imh*africa) + \beta_3.pbipercap_{it} + \beta_4.rentas_{it} + \beta_5.fraget_{it} + \beta_6.fragling_{it} + \beta_7.fragrel_{it} + \beta_8.calidadvida_{it} + \beta_9.alfabetización_{it} + \beta_{10}.sudesteasia_{it} + \beta_{11}.amlat_{it} + \beta_{12}.europaeste_{it} + \beta_{13}.medioriente_{it} + \beta_{14}.asia_{it} + v_{it}$$

- Modelo IV:

$$Polity2_{it} = \beta_0 + \beta_1.(imh_{it-1}) + \beta_2.(imh*africa) + \beta_3.pbipercap_{it} + \beta_4.rentas_{it} + \beta_5.calidadvida_{it} + \beta_6.alfabetización_{it} + v_{it}$$

- Modelo V:

$$Polity2_{it} - Polity2_{it-1} = \beta_0 + \beta_1.imh_{it} + \gamma_2.Polity2_{it-1} + \beta_3.(imh*africa) + \beta_4.pbipercap_{it} + \beta_5.rentas_{it} + \beta_6.calidadvida_{it} + \beta_7.alfabetización_{it} + v_{it}$$

donde:

$v_{it} = \partial_i + \mu_{it}$ siendo ∂_i el efecto fijo y μ_{it} el error aleatorio

$imh*africa$ = es el término de interacción entre la variable independiente y la *dummy* regional para África Sub-Sahariana.

imh_{it-1} = es el coeficiente para capturar el valor retrasado de la variable independiente.

$\gamma_2.Polity2_{it-1}$ = es el regresor que contempla el retraso de la variable dependiente. Dado

que genera problemas de endogeneidad, se utilizó la metodología Arellano-Bond (1991), a partir de la cual se utilizan períodos previos como instrumentos para obtener un estimador consistente de la variable endógena.

Para la hipótesis 2

▪ Modelo I:

$$Polity2_{it} = \beta_0 + \beta_1.imh_{it} + \beta_2.log(PBI)_{it} + \beta_3.rentas_{it} + \beta_4.desigualdad_{it} + \beta_5.fraget_{it} + \beta_6.fragling_{it} + \beta_7.musulmán_{it} + \beta_8.coloniaGB_{it} + \beta_9.poburbana_{it} + \beta_{10}.internet_{it} + \beta_{11}.rutas_{it} + v_{it}$$

$$ÍndiceGob_{it} = \beta_0 + \beta_1.imh_{it} + \beta_2.log(PBI)_{it} + \beta_3.rentas_{it} + \beta_4.desigualdad_{it} + \beta_5.fraget_{it} + \beta_6.fragling_{it} + \beta_7.musulmán_{it} + \beta_8.coloniaGB_{it} + \beta_9.poburbana_{it} + \beta_{10}.internet_{it} + \beta_{11}.rutas_{it} + v_{it}$$

▪ Modelo II:

$$Polity2_{it} = \beta_0 + \beta_1.imh_{it} + \beta_2.log(PBI)_{it} + \beta_3.rentas_{it} + \beta_4.desigualdad_{it} + \beta_5.poburbana_{it} + \beta_6.internet_{it} + \beta_7.rutas_{it} + v_{it}$$

$$ÍndiceGob_{it} = \beta_0 + \beta_1.imh_{it} + \beta_2.log(PBI)_{it} + \beta_3.rentas_{it} + \beta_4.desigualdad_{it} + \beta_5.poburbana_{it} + \beta_6.internet_{it} + \beta_7.rutas_{it} + v_{it}$$

▪ Modelo III:

$$Polity2_{it} = \beta_0 + \beta_1.(imh_{it-1}) + \beta_2.log(PBI)_{it} + \beta_3.rentas_{it} + \beta_4.desigualdad_{it} + \beta_5.fraget_{it} + \beta_6.fragling_{it} + \beta_7.musulmán_{it} + \beta_8.coloniaGB_{it} + \beta_9.poburbana_{it} + \beta_{10}.internet_{it} + \beta_{11}.rutas_{it} + v_{it}$$

$$ÍndiceGob_{it} = \beta_0 + \beta_1.(imh_{it-1}) + \beta_2.log(PBI)_{it} + \beta_3.rentas_{it} + \beta_4.desigualdad_{it} + \beta_5.fraget_{it} + \beta_6.fragling_{it} + \beta_7.musulmán_{it} + \beta_8.coloniaGB_{it} + \beta_9.poburbana_{it} + \beta_{10}.internet_{it} + \beta_{11}.rutas_{it} + v_{it}$$

▪ Modelo IV:

$$Polity2_{it} = \beta_0 + \beta_1.(imh_{it-1}) + \beta_2.log(PBI)_{it} + \beta_3.rentas_{it} + \beta_4.desigualdad_{it} + \beta_5.poburbana_{it} + \beta_6.internet_{it} + \beta_7.rutas_{it} + v_{it}$$

$$ÍndiceGob_{it} = \beta_0 + \beta_1.(imh_{it-1}) + \beta_2.log(PBI)_{it} + \beta_3.rentas_{it} + \beta_4.desigualdad_{it} + \beta_5.poburbana_{it} + \beta_6.internet_{it} + \beta_7.rutas_{it} + v_{it}$$

- Modelo V:

$$Polity2_{it} - Polity2_{it-1} = \beta_0 + \beta_1.imh_{it} + \gamma_2.Polity2_{it-1} + \beta_3.log(PBI)_{it} + \beta_4.rentas_{it} + \beta_5.desigualdad_{it} + \beta_6.poburbana_{it} + \beta_7.internet_{it} + \beta_8.rutas_{it} + \nu_{it}$$

$$\acute{I}ndiceGob_{it} - \acute{I}ndiceGob_{it-1} = \beta_0 + \beta_1.imh_{it} + \gamma_2.\acute{I}ndiceGob_{it-1} + \beta_3.log(PBI)_{it} + \beta_4.rentas_{it} + \beta_5.desigualdad_{it} + \beta_6.poburbana_{it} + \beta_7.internet_{it} + \beta_8.rutas_{it} + \nu_{it}$$

donde:

$\nu_{it} = \partial_i + \mu_{it}$ siendo ∂_i el efecto fijo y μ_{it} el error aleatorio

imh_{it-1} = es el coeficiente para capturar el valor retrasado de la variable independiente.

$\gamma_2.Polity2_{it-1}$ y $\gamma_2.\acute{I}ndiceGob_{it-1}$ = son los regresores que contemplan el retraso de la variable dependiente. Dado que genera problemas de endogeneidad, se utilizó la metodología Arellano-Bond (1991), a partir de la cual se utilizan períodos previos como instrumentos para obtener un estimador consistente de la variable endógena.

Para la hipótesis 2.2

- Modelo I:

$$Polity2_{it} = \beta_0 + \beta_1.imh_{it} + \beta_2.(imh*log(PBI)*desigualdad)_{it} + \beta_3.rentas_{it} + \beta_4.fragrel_{it} + \beta_5.musulmán_{it} + \beta_6.coloniaGB_{it} + \beta_7.poburbana_{it} + \beta_8.internet_{it} + \beta_9.rutas_{it} + \nu_{it}$$

- Modelo II:

$$Polity2_{it} = \beta_0 + \beta_1.imh_{it} + \beta_2.(imh*log(PBI)*desigualdad)_{it} + \beta_3.rentas_{it} + \beta_4.poburbana_{it} + \beta_5.internet_{it} + \beta_6.rutas_{it} + \nu_{it}$$

- Modelo III:

$$Polity2_{it} = \beta_0 + \beta_1.(imh_{it-1}) + \beta_2.(imh*log(PBI)*desigualdad)_{it} + \beta_3.rentas_{it} + \beta_4.fragrel_{it} + \beta_5.musulmán_{it} + \beta_6.coloniaGB_{it} + \beta_7.poburbana_{it} + \beta_8.internet_{it} + \beta_9.rutas_{it} + v_{it}$$

- Modelo IV:

$$Polity2_{it} = \beta_0 + \beta_1.(imh_{it-1}) + \beta_2.(imh*log(PBI)*desigualdad)_{it} + \beta_3.rentas_{it} + \beta_4.poburbana_{it} + \beta_5.internet_{it} + \beta_6.rutas_{it} + v_{it}$$

- Modelo V:

$$Polity2_{it} - Polity2_{it-1} = \beta_0 + \beta_1.imh_{it} + \gamma_2.Polity2_{it-1} + \beta_3.(imh*log(PBI)*desigualdad)_{it} + \beta_4.rentas_{it} + \beta_5.poburbana_{it} + \beta_6.internet_{it} + \beta_7.rutas_{it} + v_{it}$$

donde:

$v_{it} = \delta_i + \mu_{it}$ siendo δ_i el efecto fijo y μ_{it} el error aleatorio

$imh*log(PBI)*desigualdad$ = es el término de interacción entre la variable independiente, el nivel de PBI, y la razón entre la participación del primer percentil y el quinto percentil en el PBI.

imh_{it-1} = es el coeficiente para capturar el valor retrasado de la variable independiente.

$\gamma_2.Polity2_{it-1}$ = es el regresor que contempla el retraso de la variable dependiente. Dado que genera problemas de endogeneidad, se utilizó la metodología Arellano-Bond (1991), a partir de la cual se utilizan períodos previos como instrumentos para obtener un estimador consistente de la variable endógena.

Para la hipótesis 2.3

- Modelo I:

$$Polity2_{it} = \beta_0 + \beta_1.imh_{it} + \beta_2.(imh*rentas) + \beta_3.log(PBI)_{it} + \beta_4.desigualdad_{it} + \beta_5.fraget_{it} + \beta_6.fragling_{it} + \beta_7.musulmán_{it} + \beta_8.coloniaGB_{it} + \beta_9.poburbana_{it} + \beta_{10}.internet_{it} + \beta_{11}.rutas_{it} + v_{it}$$

▪ Modelo II:

$$Polity2_{it} = \beta_0 + \beta_1.imh_{it} + \beta_2.(imh*rentas) + \beta_3.log(PBI)_{it} + \beta_4.desigualdad_{it} + \beta_5.poburbana_{it} + \beta_6.internet_{it} + \beta_7.rutas_{it} + v_{it}$$

▪ Modelo III:

$$Polity2_{it} = \beta_0 + \beta_1.(imh_{it-1}) + \beta_2.(imh*rentas) + \beta_3.log(PBI)_{it} + \beta_4.desigualdad_{it} + \beta_5.fraget_{it} + \beta_6.fragling_{it} + \beta_7.musulmán_{it} + \beta_8.coloniaGB_{it} + \beta_9.poburbana_{it} + \beta_{10}.internet_{it} + \beta_{11}.rutas_{it} + v_{it}$$

▪ Modelo IV:

$$Polity2_{it} = \beta_0 + \beta_1.(imh_{it-1}) + \beta_2.(imh*rentas) + \beta_3.log(PBI)_{it} + \beta_4.desigualdad_{it} + \beta_5.poburbana_{it} + \beta_6.internet_{it} + \beta_7.rutas_{it} + v_{it}$$

▪ Modelo V:

$$Polity2_{it} - Polity2_{it-1} = \beta_0 + \beta_1.imh_{it} + \gamma_2.Polity2_{it-1} + \beta_3.(imh*rentas) + \beta_4.log(PBI)_{it} + \beta_5.desigualdad_{it} + \beta_6.poburbana_{it} + \beta_7.internet_{it} + \beta_8.rutas_{it} + v_{it}$$

donde:

$v_{it} = \delta_i + \mu_{it}$ siendo δ_i el efecto fijo y μ_{it} el error aleatorio

$imh*rentas$ = es el término de interacción entre la variable independiente y el porcentaje de participación de las exportaciones de petróleo y minerales en el PBI.

imh_{it-1} = es el coeficiente para capturar el valor retrasado de la variable independiente.

$\gamma_2.Polity2_{it-1}$ = es el regresor que contempla el retraso de la variable dependiente. Dado

que genera problemas de endogeneidad, se utilizó la metodología Arellano-Bond

(1991), a partir de la cual se utilizan períodos previos como instrumentos para obtener un estimador consistente de la variable endógena.

A continuación, se presentarán los Tests de Hausman, según fueron mencionados en el análisis de los capítulos III y IV. Si $\text{Prob}>\chi^2$ es mayor a 0.05, entonces es seguro utilizar la metodología de efectos aleatorios.

Para la hipótesis 1

$\text{Prob}>\chi^2 = 0.3697$

Para la hipótesis 1.3

El modelo ajustado a estos datos no cumple los supuestos asintóticos del Test de Hausman.

Para el testeo de la interacción entre IMH y África Sub-Sahariana

$\text{Prob}>\chi^2 = 0.1494$

Para la hipótesis 2

- Modelos I y II:

$\text{Prob}>\chi^2 = 0.7736$

- Modelos III y IV:

$\text{Prob}>\chi^2 = 0.4292$

Para la hipótesis 2.2

El modelo ajustado a estos datos no cumple los supuestos asintóticos del Test de Hausman.